

PROMUEVO JUICIO

SEÑORA JUEZ DEL TRABAJO IA. NOM

**JUICIO: “NIEVA, MIGUEL ALBERTO c/ ARBOL SOLO SRL. s/
EXTENSION DE RESPONSABILIDAD”**

SILVIA ADRIANA FAIAD, abogada de la matrícula, con domicilio real en Italia 1397 Concepción, y constituyendo domicilio digital a todos los efectos legales en CUIT 27-14465854-5 (correo electrónico leilafaiad@outlook.com), teléfono móvil 3865 691490), a V.S. respetuosamente digo:

I) PERSONERIA

Surge del Poder Ad-Litem adjunto que soy apoderada en sus términos, del Sr. **MIGUEL ALBERTO NIEVA**, DNI 17.537.072 y demás condiciones personales que constan en el mencionado instrumento.

I) OBJETO

En tiempo y forma vengo a promover esta Demanda **de Extensión de Responsabilidad, por transferencia de establecimiento**, a fin de que oportunamente se condene a la razón social **ÁRBOL SOLO SRL**, CUIT 30-70742680-9, con domicilio en la localidad de Monte Rico Viejo, Departamento Chichigasta, provincia de Tucumán, a pagar al actor, las sumas ordenadas por la sentencia de fondo, con más sus intereses, gastos y costas, en mérito a los fundamentos que se expresan.

III) RECHAZO DE LA VIA INCIDENTAL – INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION

Ante el Juzgado del Trabajo de la 2da. Nominación tramitó el Incidente caratulado JUICIO: “NIEVA, MIGUEL ALBERTO c/ LA PAZ S.A. s/ DESPIDO” Expte. N° 398/15-I4. El Sr. Juez interviniente decretó el 29-06-2022 que la vía Incidental no resultaba admisible y que debía tramitarse en un proceso ordinario:

“Agréguese los instrumentos acompañados. Téngase presente. En análisis del presente, surge que se pretende introducir en la litis a personas que hasta ahora no tomaron parte en la misma, y por lo cual ante estas actuaciones revisten el carácter de terceros. Al respecto, el Art. 90 del C.P.C. y C. de aplicación supletoria al fuero, es claro en cuanto a la oportunidad para citar a terceros, que es con la demanda o con la contestación de la misma, si lo piden las partes, mientras que el art. 93 C.P.C. y C. otorga la facultad al juez, siendo el momento hasta la apertura a prueba.

En autos, como lo reconoce el propio incidentista, ya se ha dictado sentencia, por lo cual, la oportunidad para citar terceros ha precluido, razón por la cual el pedido de la parte actora debe ser rechazado por extemporáneo. Como consecuencia: Devuélvase el escrito de fecha 01-06-2022 al presentante. Atento la modalidad del SAE, procédase por Secretaría a reservar el mencionado escrito a fin de que no sea tenido en cuenta. Personal.

El actor interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, que fueron rechazados por providencia del 06-07- 2022

“A lo solicitado por la letrada Silvia Adriana Faiad: 1) A la revocatoria planteada, encontrándose en un todo ajustado a derecho, no ha lugar. 2) A la apelación, no ha lugar atento lo normado por el Art. 151 del C.P.L. A la oficina”.

Habiendo quedado firme esta resolución, ha quedado expedita la vía ordinaria que se intenta en esta acción. La interposición de dicho Incidente produjo la interrupción de la prescripción, según lo establecido en los arts. 2.546 y 2.547 CCyC.

IV) LOS RECAUDOS DEL ART. 55 CPL

a) El actor ingresó a trabajar bajo relación de dependencia de la razón social La Paz S.A. en fecha fue 29-06-2009 y se dio por despedido el 21-11-2013.

b) Cumplió tareas de “obrero de Campo”, en las fincas “La Paz”, de Alto Verde y Monte Rico, de la localidad de Alto Verde de esta provincia, que consistían desde el inicio de la cosecha de caña de azúcar en realizar tareas de acondicionar y descolar de caña en conjunto y otras; luego las de limpieza, plantada y riego en plantas de limón y/o caña de azúcar; Manejo tractor interno, etc.

c) Sus jornadas las desempeñaban de lunes a sábados en jornadas de 8 hs. normalmente y cuando se regaba (caña y limón) de lunes a lunes en turnos rotativos de 8 hs., con cinco compañeros. Fue un trabajador de temporada, jornalizado, que no recibió capacitación.

Fue un trabajador jornalizado, de temporada, que se desempeñó como peón general en las fincas de propiedad de la accionada y dedicadas a la plantación y cosecha de caña de azúcar y limón, desde fecha **29/06/2.009**, de Junio hasta diciembre inclusive, hasta el año 2.012.

En el 2.013 trabajó los meses de Julio, agosto, septiembre y 4 días de Octubre, que es cuando dejan de proveerle tareas, pese a que el actor mantuvo a su disposición su fuerza de trabajo y la zafra se extendió hasta el mes de noviembre. De todos modos, siendo un trabajador de temporada, la obligación del empleador era de proveerle tareas durante todo el ciclo, comunicarle su finalización y abonarle la liquidación final, cosa que tampoco hicieron.

d) Su ex empleadora no registraba la totalidad de los días efectivamente trabajados, sino una cantidad mucho menor (entre 8 y 11 días al mes). Por eso se reclamaron las diferencias de remuneraciones, en base a las vigentes para el personal de la industria azucarera, comprendidos en el CCT 12/88, multiplicada por los 26 días trabajados en el mes.

e) Mi instituyente intimó reiterada y fehacientemente, la entrega de la certificación de servicios y pago de las indemnizaciones de la LCT, a su ex empleadora mediante TCL del 21-12-2013, que suspendió automáticamente

por un año el curso de la prescripción. Y después con los TCL del 07-02-2014 y 07-02-2015, se dio cumplimiento con las intimaciones requeridas por los arts. 2 de la ley 25.323 y 3 del Dto. 146/01.

f) El actor percibió en el último mes liquidado, Setiembre 2013, 3 jornales, \$ 390; un escalafón del 10 %, \$ 3,90; y un importe no remunerativo de \$ 90. Total \$ 393,90.

Según el CCT 12/88 le correspondía percibir los siguientes conceptos y montos: Jornal Básico, (\$ 228,12 x 26 d.) \$ 5.931,12; Escalafón (10 %), \$ 593,11; “Suma No rem.” (\$ 18,36 x 26 d) \$ 660,96. Total mensual, **\$ 6.645,19**.

Al haber quedado determinado por la sentencia de fondo que se encuentra pasada en autoridad de **cosa juzgada**, los hechos se encuentran probados y no están sujetos a revisión.

V) TRANSFERENCIA DE ESTABLECIMIENTO - EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD

Con fecha 19-12-2018 la Excma. Cámara del Trabajo, Sala 2a., ha dictado sentencia de fondo en los autos principales, en el juicio “**NIEVA, MIGUEL ALBERTO c/ LA PAZ S.A. s/ DESPIDO**”, haciendo lugar parcialmente al Recurso de Apelación en contra de la sentencia definitiva de 1a. Instancia (JT 2ª Nom.) de fecha 26/03/2018 (fs. 335/348) y su aclaratoria de fecha 28/03/2018, condenando a la demandada, **la razón social La Paz S.A.**, a abonar al actor, la suma de **\$ 176.865,24**, montos que se encuentran calculados al **28-02-2018**. Esa sentencia se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada (adjunto copias de ambas sentencias).

La suma determinada corresponde a los conceptos reclamados por: indemnización por antigüedad, preaviso, SAC sobre preaviso, diferencias de remuneraciones 2013, SAC proporcional, integración mes de despido, vacaciones, arts. 1 y 2 ley 25.323 y art 80 LCT.

Ha quedado determinado en dichas sentencias que el actor se desempeñó como trabajador agrícola, en las fincas “La Paz”, de Alto Verde y

Monte Rico, de la localidad de Alto Verde de esta provincia, entre los años 2009 a 2013.

En el proceso de cumplimiento de sentencia en este juicio, se ordenó trabar embargo y secuestro sobre bienes muebles existentes en dicha finca y no se pudo llevar a cabo la medida de desapoderamiento, porque la persona que se encontraba presente y representaba a Árbol Solo SRL, se opuso afirmando que su representada era la propietaria del inmueble y de los bienes muebles.

Casi inmediatamente Árbol Solo SRL promovió un Incidente de Levantamiento de Embargo sin Tercería, que fue rechazado por sentencia del 26-03-2018 (en el Incidente I1), por no haber acreditado la titularidad invocada.

La accionada posteriormente promovió el juicio caratulado “ARBOL SOLO SRL vs. NIEVA MIGUEL ALBERTO, FAIAD SILVIA ADRIANA Y LA PAZ S.A. s/ TERCERIA DE DOMINIO (Expte. 67/20), que tramitó por ante este mismo Juzgado y se ofrece como prueba.

Esa demanda fue inicialmente rechazada en 1a. Instancia (JT 1ª Nom., 10-08-2022) y confirmada por la Cámara de Apelaciones, Sala 2 (CJC) en fecha 03-11-2022. En contra de la misma la Árbol Solo SRL interpuso Recurso de Casación que la CSJT hizo lugar, anulando la sentencia anterior (sent. Del 22-06-2023). Sorteada un nuevo Tribunal, la Sala 1ª, conforme lo ordenado por el Superior, dictó nueva sentencia el 27-11-2023 haciendo lugar a la Tercería y Levantamiento del Embargo ordenado en el JUICIO: “NIEVA, MIGUEL ALBERTO c/ LA PAZ S.A. s/ DESPIDO” Expte. N° 398/15. Esta sentencia ha quedado firme.

En su demanda Árbol Solo SRL afirma que esas fincas fueron adquiridas en el año 2003 y que los bienes muebles (maquinarias agrícolas) también fueron adquiridas en el mismo año.

Sin embargo, ha quedado establecido en la sentencia de fondo de este juicio, que la demandada, la razón social La Paz S.A. explotaba esas fincas cuando el actor trabajó en las mismas entre 2009 a 2013 (cuando se da por

despedido), y que estuvo usufructuando dichos bienes con posterioridad a las supuestas adquisiciones de los bienes inmuebles y muebles.

En los fundamentos de la demanda de Tercería, **Árbol Solo SRL expresa que:**

* según la escritura traslativa de dominio N° 99 ARBOL SOLO S.R.L., es legítima propietaria y poseedora de los inmuebles matriculas Z-5686 y Z-5685, ubicados en Monte Rico, Dpto. Chicligasta, que en conjunto V.S. ha denominado “Finca Monte Rico Alto Verde”.

* que la medida de embargo ordenada en el juicio laboral afecta a bienes muebles de su propiedad, depositados en la denominada “Finca Monte Rico Alto Verde”.

* Esta medida de embargo se llevó a cabo el día 27/12/2019 sobre una cisterna de agua de 4.000 Lts. con tanque de acero inoxidable, mangueras y bomba montado sobre un chasis de dos ejes de color verde, un tractor marca Fiat de color naranja, una máquina fumigadora de un eje y dos ruedas, con tanques de 400 Lts. cada uno con sus respectivas bombas, un tanque de acero de 1.500 Lts de capacidad y dos ruedas, una podadora y máquina abonadora marca AUDI con dos tanques color amarillos montados sobre dos ruedas y un carro volquete sobre un eje de cuatro ruedas.

* que todos los bienes muebles que se encuentran en esa finca son de exclusiva propiedad de Árbol Solo S.R.L.

*** Que Árbol Sólo SRL arrendó la finca a La Paz S.A. mediante contrato de arriendo de fecha 16-04-2007 y que finalizó el día 30-09-2016.**

* que ese contrato de arriendo no le hizo perder a Árbol Solo SRL la posesión de sus bienes.

* que, como propietaria y poseedora del inmueble, en fecha 12-12-2016, celebró con S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. un contrato de compraventa de la fruta producida en la Finca Monte Rico Alto Verde, hasta el 31-

12-2021. Esto demostraría que, a la fecha en que se llevó a cabo la medida de embargo, la Finca se encontraba en posesión de Árbol Sólo SRL.

* que la posesión de los bienes por parte de Árbol Solo SRL se presume que inició en las fechas de las facturas, es decir con anterioridad a la relación laboral entre el Sr. Nieva y La Paz S.A.

Resulta indiscutible y ha quedado determinado sin necesidad de ninguna prueba adicional, que se ha producido una transferencia sin interrupciones de la “Finca Monte Rico”, que explotaba la accionada La Paz S.A. y que actualmente está explotando la razón social Árbol Solo SRL.

El objeto de la explotación es idéntico, plantación y cosecha de caña de azúcar y limón. Todos los bienes muebles, inmuebles, instalaciones, maquinarias, automotores que anteriormente utilizaba La Paz S.A., continúan en poder y uso de Árbol Solo SRL.

VI) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE ÁRBOL SOLO SRL

La posición asumida por la accionada en el juicio de Tercería mencionado por Árbol Solo SRL, hace innecesaria otras pruebas, ante sus propios reconocimientos.

Al afirmar y acreditar en el juicio “ARBOL SOLO SRL vs. NIEVA MIGUEL ALBERTO, FAIAD SILVIA ADRIANA Y LA PAZ S.A. s/ TERCERIA DE DOMINIO, que es la titular registral del inmueble conocido como “Finca Monte Rico Alto Verde” y que **lo había tenido arrendado entre los años 2007 a 2016 a La Paz S.A.**, hechos de los que recién mi representado toma conocimiento, está reconociendo que existió una cesión transitoria del establecimiento, durante el período en que prestó servicios mi representado.

Como se encuentra establecido en las sentencias mencionadas, **el actor prestó servicios en esa finca entre los años 2009 a 2013.**

Los bienes muebles embargados se encontraban y usaban en la explotación agrícola que se desarrollaba en esa finca arrendada, **contrato que**

finalizó 30-09-2016, produciéndose la situación prevista en los arts. 227 y 228 LCT:

Art. 227. —Arrendamiento o cesión transitoria del establecimiento.

Las disposiciones de los artículos 225 y 226 se aplican en caso de arrendamiento o cesión transitoria del establecimiento.

Al vencimiento de los plazos de éstos, el propietario del establecimiento, con relación al arrendatario y en todos los demás casos de cesión transitoria, el cedente, con relación al cesionario, asumirá las mismas obligaciones del artículo 225, cuando recupere el establecimiento cedido precariamente.

Art. 228. —Solidaridad.

El transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaren a aquél.

Esta solidaridad operará ya sea que la transmisión se haya efectuado para surtir efectos en forma permanente o en forma transitoria.

A los efectos previstos en esta norma se considerará adquirente a toda aquel que pasare a ser titular del establecimiento aun cuando lo fuese como arrendatario o como usufructuario o como tenedor a título precario o por cualquier otro modo.

La solidaridad, por su parte, también operará con relación a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existente al tiempo de la restitución del establecimiento cuando la transmisión no estuviere destinada a surtir efectos permanentes y fuese de aplicación lo dispuesto en la última parte del artículo 227.

La responsabilidad solidaria consagrada por este artículo será también de aplicación cuando el cambio de empleador fuese motivado por la transferencia de un contrato de locación de obra, de explotación u otro análogo, cualquiera sea la naturaleza y el carácter de los mismos”.

Por lo tanto, al finalizar el arrendamiento se produjo una nueva transferencia del establecimiento (de la arrendataria, La Paz S.A. a la arrendante, Árbol Solo SRL) y esta se convirtió por ese solo hecho, en corresponsable solidaria de las totalidades de las obligaciones, que esta tuviere con sus ex trabajadores, aun cuando esos contratos de trabajo ya hubieren estado extinguidos al momento de esta última transferencia.

La interpretación tanto literal como teleológica de los arts. 227 y 228 y su remisión al art. 225 LCT, no dejan dudas que la responsabilidad solidaria del adquirente de un establecimiento, se extiende también a las deudas derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad al traspaso, porque el art. 225 LCT alude a **todas las obligaciones existentes**, que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, sin distinguir entre trabajadores en actividad y trabajadores cuyo contrato ha fenecido.

“Los sucesivos cambios en la titularidad del empleador por arrendamiento o cesión transitoria (art. 227 y su remisión al art. 225), no pueden operar en perjuicio del derecho del trabajador; pues en cualquiera de esos casos transmitente y adquirente deben responder integralmente por la totalidad de las obligaciones existentes y adeudadas por el arrendatario, al concluir el contrato de arriendo.

La doctrina ha entendido que las obligaciones alcanzadas por la solidaridad legal son las siguientes: a) las deudas contraídas por el cedente antes de la cesión, tanto las que ya resultaban exigibles en ese momento como las que aún no tenían plazo vencido; b) las indemnizaciones por el despido indirecto motivado por la transferencia; c) las indemnizaciones derivadas de la extinción, si el transmitente despide al trabajador en razón de la transferencia o si el adquirente no admite la continuación de la relación. Los autores coinciden en que la solidaridad no abarca las obligaciones nacidas con posterioridad a la transferencia, que están exclusivamente a cargo del nuevo empleador, salvo,

naturalmente, el caso de fraude (Ackerman, Mario E., Tratado de Derecho del Trabajo, Tomo III, pág. 788/789; Vázquez Vialard, Antonio, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Tomo III, págs. 246/247, Etala, Carlos A., Contrato de Trabajo, pág. 228).

En un viejo y conocido fallo Plenario N° 289 de la CNAT, "Baglieri, Osvaldo c/Francisco Nemec y Cía. SRL y otros s/despido", seguido por toda la Jurisprudencia Nacional y Local, se pronunció estableciendo que: "El adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el art. 228 LCT es responsable por las obligaciones del transmitente derivadas de las relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión" (Publicado: DT 1997-B-2013; JA 1997-IV-177 LL 1997-E-595).

Y así lo ha resuelto nuestra Cámara del Trabajo, Sala Analizando esta Vocalía las concretas circunstancias de la causa, a la luz de las consideraciones expuestas y necesariamente indagando más allá de la apariencia formal –primacía de la realidad- atento los documentos agregados en autos, no desconocidos por la demandada en la etapa procesal pertinente (art. 88, inc. 1 CPL), corresponde resaltar que la transferencia del establecimiento por parte de Campo Alegre S.A. a la codemandada Teresita Eugenia Díaz tuvo lugar conforme se notificó a los actores (copia a fs.109/115) en fecha 01/03/2017, a pesar de que el último contrato de alquiler firmado entre las partes vencía recién en fecha 31/05/2019 (copia fs. 93/97), y ante la falta de cumplimiento del deber de ocupación efectiva tanto por parte del transmitente como del adquirente, es que los actores en el mismo mes de marzo de 2017, enviaron telegramas ley a Campo Alegre S.A. y a la Srta. Teresita Díaz; y ante la negativa de ambas, alegando su causa respectiva -conforme surge de la prueba arrimada en autos- recién se colocaron en situación de despido.

En los presentes autos, no se advierte que el A quo haya infringido las normas que rigen la tarea valorativa ni que se configure la omisión con relación a la valoración del plexo probatorio. En efecto, no puede desconocerse que la causal de injuria analizada por el Juez a quo conforme art. 242 LCT resulta acertada y probada por los actores de autos, ya que para los accionantes la transferencia del establecimiento implicó un gravamen que tornó imposible continuar con el contrato de trabajo, específicamente no se cumplió con

el deber de ocupación (art. 78 LCT) y no se continuó (art. 10 LCT) con el contrato de trabajo, alegando sus excusas respectivas tanto por parte del transmitente como de la adquirente, lo cual ya fue valorado por el Juez de origen al sentenciar; resultando ser un despido indirecto motivado por la transferencia, al cual deben responder solidariamente transmitente y adquirente. Y es que no puede desconocerse que el art. 226 resulta una autorización para emplear el despido indirecto según el art. 242 de la LCT, lo que, efectuado al tiempo de la transmisión, invocándose la injuria que lo perjudica, acarrea la responsabilidad solidaria prevista por la ley para dicho supuesto de hecho.

La finalidad del instituto transferencia (continuidad) del contrato de trabajo en caso de transferencia de establecimiento tiene justamente como fundamento básico el de la protección del trabajador y su contrato, esto es, la tutela concreta de los créditos laborales, tanto así que expresamente estipula que en dichos supuestos se respetará la antigüedad adquirida con el transmitente, otorgándole además la posibilidad al trabajador de darse por despedido (art. 226, LCT) si con motivo de la transferencia sufre algún perjuicio. En consecuencia, los créditos salariales e indemnizatorios a cuyo pago condena la sentencia atacada, se generaron con motivo de la transferencia, resultando acertado la solidaridad dispuesta por el juez de origen con respecto a la demandada Campo Alegre S.A. y a la codemandada Teresita Eugenia Díaz.

Y es que, ante la situación mencionada, la responsabilidad es solidaria, atento lo preceptuado por el art. 228 que dispone que, tanto el transmíete como el adquirente de una empresa y/o establecimiento, serán solidariamente responsables respecto a la época de la transmisión que los afectare, cosa que ocurrió en autos.

Ante este contexto fáctico, y conforme las consideraciones expuestas, resulta evidente que la parte recurrente no logra evidenciar que el A quo hubiera incurrido en un yerro que exija invalidar la resolutive atacada, por cuanto resulta de aplicación en autos la normativa del art. 228 LCT a los fines de condenar a la demandada Campo Alegre S.A. y a la codemandada Teresita Eugenia Díaz en forma solidaria al pago de los créditos e indemnizaciones, conforme se discrimina en la planilla de fallo de la sentencia apelada”. (Cámara de Apelaciones del Trabajo de Concepción; 26-05-2020; “DOMINGUEZ JOSE

HECTOR Y OTROS VS. CAMPO ALEGRE S.A. S/ DESPIDO” –Expediente N° 141/17; Dres. Seguí – Stordeur).

Se ha producido la circunstancia prevista en el art. 225 LCT, la transferencia del establecimiento, en virtud de la cual **pasan al adquirente o sucesor, por cualquier título**, las obligaciones existentes con sus trabajadores al momento de la transferencia, aun cuando el vínculo contractual se hubiere producido con anterioridad a la fecha de la transferencia (CNAT fallo plenario n° 289; “Baglieri Osvaldo c/ Francisco Nemec y Cía. SRL y otro s/Despido”).

Según Vazquez Vialard, podría decirse que, en las transmisiones transitorias, “las partes han decidido no una transferencia, sino dos, que producen sus efectos en tiempos distintos”. La primera es la que opera como consecuencia de la etapa inicial del negocio concertado; en virtud de ella, el adquirente se subroga en el rol de empleador que tenía su contratante. Al vencer el plazo fijado en el acuerdo celebrado (segunda etapa), se produce una nueva transferencia, de signo contrario a la anterior, en la que el empleador originario recupera ese rol que durante un tiempo había dejado de ejercer; en otras palabras, la titularidad de la unidad productiva (y con ella, su carácter de empleador respecto de las relaciones laborales) revierte a su persona. Al producirse esa reversión, el propietario o cedente asume (o, mejor dicho, reasume) el carácter de empleador, no solo respecto de los trabajadores que habían sido contratados por él, sino también respecto de los que fueron contratados por el locatario o cesionario (). Así, por ejemplo, los trabajadores arbitrariamente despedidos por el locatario pueden reclamar las indemnizaciones respectivas tanto a éste como al locador. (“Curso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”, Adrian Goldin, Ed. La Ley, 2009, pag 478/9).

La correcta interpretación del art. 228 de la LCT, nos lleva a sostener que el adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas por la mencionada norma, es solidariamente responsable del pago de todos los créditos que no se encuentran extinguidos al momento de la transferencia, inclusive de aquellos que correspondan a relaciones laborales que concluyeron con anterioridad a la misma” (CSJT; Sentencia: 181 Fecha de la Sentencia: 12/03/2009; TOLEDO CARLOS ALBERTO Vs. ZABALZA JORGE ERNESTO S/COBRO DE PESOS; DRES.:GANDUR-GOANE-ESTOFAN).

En consecuencia y en virtud de lo dispuesto por los arts. 225, 227 y 228 LCT, solicito se haga lugar a la extensión de los efectos de la sentencia de fondo dictada en los autos principales en fecha **19-12-2018** la Excma. Cámara del Trabajo, Sala Ia., condenándose a la razón social ARBOL SOLO SRL, en forma solidaria con LA PAZ S.A., a pagar la totalidad de las obligaciones en dicha resolución y sin perjuicio del derecho de repetición que pudiere corresponderles recíprocamente.

La condena deberá incluir las costas procesales, que se encuentran comprendidas en las deudas existentes al momento de la transferencia, pues fue la accionada la que obligó a promover estas acciones judiciales para obtener el reconocimiento de sus derechos derivados del contrato de trabajo.

VII) OFREZCO PRUEBAS

A) Documental

1) Las constancias de los autos principales del juicio “NIEVA, MIGUEL ALBERTO c/ LA PAZ S.A. s/ DESPIDO” Expte. N° 398/15, especialmente la sentencia de la Instancia de fecha 26/03/2018, que tramitara ante el Juzgado del Trabajo de la 2ª. Nom. y su aclaratoria de fecha 28/03/2018; y la de 2da. Instancia de fecha 19-12-2018 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala 2a., que se adjuntan escaneadas.

2) Las constancias del Incidente de Extensión de Responsabilidad tramitado en el Incidente caratulado JUICIO: “NIEVA, MIGUEL ALBERTO c/ LA PAZ S.A. s/ DESPIDO” Expte. N° 398/15-I4, especialmente los decretos de fechas 29-06-2022 y 06-07-2022, que tramitaron ante el Juzgado del Trabajo de la 2ª. Nominación.

3) Las constancias del juicio “ARBOL SOLO SRL vs. NIEVA MIGUEL ALBERTO, FAIAD SILVIA ADRIANA Y LA PAZ S.A. s/ TERCERIA DE DOMINIO.- Expte. N° 67/20, que tramita actualmente ante el Juzgado del Trabajo de la 1ª. Nom. (CJC). Especialmente la demanda; la escritura pública con la que acredita la titularidad de los inmuebles; el informe del Registro

Inmobiliario; los contratos de arrendamientos celebrados con La PAZ S.A.; las sentencias de fondo de Ia. Instancia de fecha 10-08-2022; de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala 2 (CJC) de fecha 03-11-2022; de la CSJT de fecha 22-06-2023; y de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala 1ª. de fecha 27-11-2023.

VIII) Por lo expuesto pido:

a) Me tenga por presentada, en el carácter invocado y con el domicilio digital constituido.

b) Por presentada la demanda y cumplido con los recaudos exigidos por el código del rito.

c) Se tenga presente la prueba documental que se adjunta escaneada. Para el caso de desconocimiento de su autenticidad, tratándose de constancias obrantes en un expediente judicial, se deberá ordenar que por Secretaría se constate en el SAE e informe sobre su autenticidad.

d) Se corra traslado a los accionados por el término y bajo apercibimiento de ley.

c) Oportunamente se haga lugar al pedido de extensión de responsabilidad conforme se peticiona, con costas.

JUSTICIA

Firmado digitalmente
Silvia Adriana Faiad
Mat. C.A.S. 170 - Lo. 01 - Fo. 05.
Casillero digital: 27144658545

FORMULARIO PARA EL INGRESO DE CAUSAS (Acordada 72/2001)

DATOS A INCORPORAR – MESA DE ENTRADAS CIVIL

EXPTE. N°				
-----------	--	--	--	--

		DESCRIPCIÓN		
1.-	OBJETO DEL JUICIO	EXTENSION DE RESPONSABILIDAD		

		DESCRIPCIÓN		
2.-	MODO DE PROCESO	ORDINARIO		

3.- DATOS ABOGADO/S

Apellido/s y Nombres	P/A	Domicilio/s Constituidos	Localidad	Casillero
SILVIA ADRIANA FAIAD	A	ITALIA 1397	CONCEPCION	27-14465854-5

* Patrocinante / Apoderado

4.-	DEFENSORIA	Nro.:
-----	------------	-------

5.- ACTORES, PETICIONANTES O CAUSANTES

Apellido/s y Nombres	Domicilio Real o Contractual	Localidad	Tipo y N° de Doc.	N° de CUIT
Nieva Miguel Alberto	Bo. Santa Emilia S/N	Alto Verde	17.537.072	-----

6.- DEMANDADOS (Datos Conocidos)

APELLIDO/S Y NOMBRES	Domicilio Real o Contractual	Localidad	Tipo y N° de Doc.	N° de CUIT
Árbol Solo SRL	Monte Rico Viejo	Dpto. Chicligasta	-----	30-70742680-9

7.-	FUERO DE ATRACCIÓN
JUZ.	EXPTE. CONEXO
Lab. 1	67/20

8.-	OFICIOS LEY 22.172
Juez oficiante:	
Juzgado y Fuero:	
Jurisdicción:	

9.-	MONTO DEL JUICIO	
\$	USD	IMPORTE

10.-	TASA de JUSTICIA	
	Abona Tasa mínima:	
	Abona Tasa íntegra:	
	Exenta de pago	

11.-	BONOS PROF.	
	ADJUNTA	
	NO ADJUNTA	

-12-	LEY 6.059	
	ABONA	
	NO ABONA	

LOS DATOS CONSIGNADOS REVISTEN EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firmado digitalmente

Silvia Adriana Faiad
Mat. C.A.S. 170 - Lo. 01 - Fo. 05
Casillero digital: 27144658545

16/02/2024
FECHA

.....
FIRMA Y SELLO DEL LETRADO DECLARANTE

El presente formulario deberá completarse con letra legible (en forma manual o imprenta). Toda raspadura o enmienda deberá ser salvado previo a la firma del profesional.-

El número de expediente será completado en forma manual al momento de la asignación.

Expediente: 398/15
Carátula: NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ LA PAZ S.A S/ DESPIDO
Unidad Judicial: JUZGADO DEL TRABAJO I C.J.C.
Tipo Actuación: LEX

tarWriterSJUZG. LABORAL IFOLIO

JUICIO:NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ LA PAZ S.A S/ DESPIDO – Expte. N° 398/15

Conciliación y Trámite la. NominaciónCENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN R E G I S T R A D O
Sentencia N°Fecha:26/03/2018

Concepción, 26 de marzo de 2018

AUTOS Y VISTOS: Los presentes autos caratulados: “NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ LA PAZ S.A. S/ COBRO DE PESOS”, que se tramitaron por ante el Juzgado de Conciliación y Trámite de la Ira. Nominación de éste Centro Judicial, del que

R E S U L T A

Que a fs. 2/4 se presenta la letrada Silvia Adriana Faiad, en nombre y representación de Nieva Miguel Alberto y de las demás condiciones personales obrantes en los instrumentos de poder Ad-litem cuyas copias obran agregadas a fs. 7. En tal carácter promueve demanda en contra de LA PAZ S.A., domiciliada en calle Vélez Sarsfield N° 509, de la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán, por la suma de \$ 102.902,35 (pesos ciento dos mil novecientos dos con 35/100) y/o lo que en más o menos resulte de las pruebas en autos, con más intereses, gastos y costas hasta su real y efectivo pago en concepto de: remuneración e integración (art. 233 L.C.T.) Noviembre 2013 (26 jornales), indemnización art. 232 L.C.T. (2 meses), indemnización art. 245 L.C.T. (3 m), SAC 2013 (prop. 5 m.), SAC sobre preaviso, vacaciones proporcionales 2013, indemnización art. 1 y 2 Ley 25.323, remuneraciones Octubre 2013 (26 jornales), diferencias remuneraciones 2013 (julio, agosto y septiembre), indemnización art. 80 L.C.T. e indemnización por daños y perjuicios.

Relata los hechos y manifiesta: Que el actor ingresó a prestar servicios como trabajador jornalizado de temporada para la firma demandada en sus fincas de Alto Verde y Monte Rico en fecha 29/06/2009 de manera continua e ininterrumpida entre los meses de junio a diciembre de cada año, en la categoría de peón general, realizando tareas de acondicionada y descolada de caña de azúcar, limpieza, plantada y riego de plantas de limón y/o caña de azúcar; manejo tractor interno, etc.

Refiere que normalmente laboraba de lunes a sábados (8 horas diarias) pero cuando se regaba caña y limón lo hacía de lunes a lunes, en turnos rotativos de 8 hrs con cinco compañeros.

Expresa que el accionante, se encontraba irregularmente registrado, que percibiendo una remuneración inferior a la que le correspondía (ya que al no saber el actor leer ni escribir, la accionada se aprovechó de esa situación para pagarle a veces por tanto, a veces por jornal) y entregándole de vez en cuando recibos pero figurando solo algunos días en el mes, en especial los correspondientes a los últimos trabajados, siendo la última remuneración percibida la suma de \$15 por 100 kgs. Asimismo, afirma que se vio privado de percibir la asignación familiar correspondiente a sus 5 hijos menores.

Explica, que en el año 2013, el actor trabajó durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y en Octubre 4 días, fecha en la que dejan de proveerle tareas, (a pesar que la zafra se extendió hasta el

mes de Noviembre y que mantuvo su fuerza a disposición de la razón social demandada). Haciendo notar, que tratándose de un trabajador de temporada, la obligación del empleador era proveerle tareas durante todo el ciclo, comunicarle su finalización y abonarle la liquidación final (lo cual no hizo la demandada). Indica que esa situación, motivó al señor Nieva a intimar a LA PAZ S.A. mediante TCL N° 79247254 de fecha 21/11/13 que expresa: “Concepción, 21 de Noviembre de 2013, Atento al tiempo transcurrido sin respuesta alguna a mi parte a pesar de encontrarme a sus disposición, intímole en el plazo de 48 hrs. aclarar mi situación laboral y me otorgue tareas habituales en horarios y lugar habitual y me abone los salarios caídos, todo bajo apercibimiento en caso de silencio o negativa de considerarme injuriado y despedido por vuestra exclusiva culpa. Ultimo día trabajado 4/14/13. Tareas varias realizadas desde mi fecha de ingreso 29/06/2009, en forma continua e ininterrumpida, laborando entre los meses de Junio a Diciembre inclusive hasta el 2012, y en el presente 2013 solo Julio, Agosto, Septiembre y 4 días de Octubre. Desde el inicio de la cosecha de La Caña de Azúcar realizando tareas de acondicionada y descolada de caña en conjunto, cobrando \$15 por 100 Kgs. Tareas de limpieza, plantada y riego en plantas de limón, manejo del tractor interno, etc. Aprovechando que no se leer ni escribir, se pagaba a veces por tanto, a veces por jornal, pero siempre por debajo de los valores vigentes por las tareas realizadas. A veces se entregaba recibos, a veces solo algunos días en el mes, en especial los últimos meses trabajados. En fincas de La Paz Alto Verde, Monte Rico, Pcia de Tucumán, trabajando de lunes a sábados jornadas de 8 hs. normalmente y cuando se regaba (caña y limón) de lunes a lunes en turnos rotativos de 8 hs. (con 5 compañeros más). Intímole regularice mi registración laboral y me inscriba en los libros respectivos debidamente y conforme real meses y tareas trabajadas, modalidad y remuneración, conforme los valores expuestos precedentemente en el plazo de ley 30 días y de conformidad a las disposiciones y bajo apercibimiento de la ley 25.323 y con la remuneración que correspondía de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo de aplicación en autos, bajo apercibimiento de reclamar las indemnizaciones de la ley vigente. Intímole plazo 48 hs. me abone mes adeudado Septiembre, Octubre y Noviembre del presente año, Salarios Caídos por ser de vuestra exclusiva responsabilidad, SAC y Vacaciones de los últimos 2 años no prescriptos, domingos y feriados trabajados y Diferencias Salariales en igual plazo de los dos últimos años, no prescriptos. Todo bajo apercibimiento en caso de silencio o negativa de considerarme injuriado y despedido por vuestra exclusiva culpa. Mas los salarios familiares de mis cinco (5) hijos menores de edad (Matías, Thalía, Antonio, Enrique y Lucas). Queda Ud. debidamente notificado”.

Destaca que ante la falta de respuesta remite TCL N° 8463945 de fecha 11 de Diciembre de 2013 ratificando todos los términos de TCL anterior, dándose por despedido ante el silencio de la empleadora. Asimismo procedió a iniciar trámite mediante denuncia en la SET en fecha 10/02/2014 originando el expediente N° 036/182/N/14, no compareciendo la accionada a ninguna de las audiencias fijadas, ni abonándole la liquidación final y obligándolo a solicitar archivo de las actuaciones para recurrir a la vía judicial.

Menciona que la demandada responde mediante CD 237073369 de fecha 04/01/2014 la que reza de la siguiente manera: “Con referencia al TCL 84963945 rechazamos sus términos, pretensiones y alcances por improcedentes e infundados. Señalole que el TCL N°79247254 del 21/11/2013 fue respondido en tiempo oportuno mediante CD N° 17213768 cursado al domicilio consignado en ese TCL, que es el mismo al que ahora se contesta y que fue devuelto por Correo Argentino por dirección inexistente, por lo que no hubo posición de silencio como falsamente lo afirma. Ratificamos íntegramente términos de nuestra Carta Documento que a continuación se transcribe: “San Miguel de Tucumán. 03 de diciembre de 2013. Con referencia a v/TCL79247254 rechazamos sus términos, pretensiones y alcances por improcedentes e infundados. Rechazamosle que no hubiera habido respuestas de nuestra parte respecto a v/relación de trabajo, siendo que revista como trabajador temporario para ser ocupado durante la zafra de acuerdo a las registraciones obrantes en nuestro

poder y efectivas tareas realizadas. Por la zafra 2013 trabajo por los meses de Julio y agosto, realizando tareas hasta el 31/08/2013, abonándosele dichas tareas conforme a las remuneraciones y escalas salariales vigentes del convenio colectivo de la actividad, por lo que se le rechaza que se le pagaba por debajo de los valores vigentes según lo afirma temerariamente en v/TCL. Asimismo, se le rechaza se le adeude remuneraciones por los meses de setiembre, octubre y noviembre del presente año, mas salarios caídos y diferencias salariales, etc. Dado que no efectuó tarea alguna por esos períodos, menos que se le adeuden salarios familiares por cinco hijos por los cuales no cabe a nuestra firma responsabilidad alguna por ese rubro. Se encuentra a v/disposición liquidación del 10/09/2014 por finalización temporada 2013 que incluye vacaciones proporcionales y SAC proporcional. Queda ud. debidamente notificado”. -Por lo demás, carece de toda entidad los motivos o causales que invoca para considerarse injuriado y despedido, no correspondiéndole ni se le adeuda ninguno de los rubros que indebidamente pretende. Queda ud. debidamente notificado”.

Destaca que si bien en la mencionada carta documento indica la firma demandada que el actor trabajó hasta el 31/08/2013, ello queda absolutamente desvirtuado con el recibo de haberes Septiembre de 2013.

Explica que el actor nunca recibió la carta documento y ello queda corroborado a través del sistema “Track and Trace” de Correo Argentino, el cual arroja como resultado.: “Número inválido de Pieza”.

El actor responde en su tercer TCL N°CD83125126 en fecha 07/02/2014 en el que ratifica ambos TCL anteriormente enviados en todos sus términos y niega haber recibido CD N°17213768. Posteriormente la demandada remite carta documento de fecha 20/02/2014 manteniendo su posición. Finalmente el actor la intima a abonar las indemnizaciones de ley y hacer entrega de certificación de servicios bajo apercibimiento de lo prescripto por el art. 80 L.C.T. mediante TCL de fecha 07/10/15.

Indica que del intercambio epistolar resulta que la ruptura de la relación laboral se produjo por despido indirecto por falta de suministro de trabajo para el accionante y el silencio de la demandada ante los requerimientos e intimaciones realizados, lo que configura injuria y conduce a la consecuente resolución del vínculo laboral, destacando que del intercambio epistolar surge inequívocamente la voluntad de prestar servicios por parte del Sr. Nieva, poniendo a disposición de su ex empleadora su fuerza de trabajo, solicitando la regularización de la debida registración laboral en cuanto al tiempo real trabajado y su remuneración, conforme a la escala salarial vigente. Solicita aplicación del art. 1 y 2 de la ley 25.323, 80 de la LCT y tasa activa. Formula petitorio.

A fs. 47/49 la letrada apoderada de la parte actora amplía demanda, indicando: a) que el actor fue trabajador jornalizado de temporada dedicado a la plantación y cosecha de caña de azúcar y limón desde fecha 29/06/2009, desde junio hasta diciembre inclusive, b) que el actor perdió el derecho a percibir las asignaciones familiares por sus 5 hijos por el fraude laboral en que incurrió la demandada al registrarle una cantidad menor a los días efectivamente trabajados (entre 8 y 11 días al mes), reclamando en consecuencia una indemnización por daños y perjuicios, equivalente al monto de las asignaciones familiares que el actor se vio privado de percibir de la seguridad social por defectuosa registración, especificando que mediante decreto 614/13 se fijaron los nuevos importes correspondientes a las asignaciones familiares que paga el ANSES (hijo \$ 460, ayuda escolar anual \$170), debiéndose calcular las diferencias de las remuneraciones que se reclaman en base a las remuneraciones vigentes para el personal de la industria azucarera, comprendidos en el CCT 12/88, multiplicada por los 26 días trabajados en el mes, c) que el actor intimó reiterada y fehacientemente la entrega de certificación de servicios y pago de las indemnizaciones de la LCT, mediante TCL del 21/12/2013, que suspendió automáticamente por un año el curso de la prescripción. Y posteriormente con los TCL del 07/02/2014 y 07/02/2015, se dio cumplimiento con las intimaciones requeridas por los art. 2 de la ley 25.323 y 3 del decreto 146/01; d) que el actor percibió en el último mes liquidado

(Septiembre 2013) 3 jornales \$ 39, un escalafón del 10% \$390 y un importe no remunerativo de \$90. Total \$393,90. Plantea inconstitucionalidad de las sumas no remunerativas. Cita art. 103 LCT, art. 1 del Convenio 95 OIT, art. 1 LCT, doctrina y jurisprudencia. Adjunta planilla de rubros reclamados y documentación (originales reservados en caja fuerte de seguridad). Formula petitorio. Hace reserva del caso federal.

A fs. 76/80 se presenta el Dr. José A. Taboada como apoderado general para juicios de la razón social LA PAZ S.A., con domicilio en calle Vélez Sarsfield N° 509, de la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán, lo que acredita en mérito al instrumento de poder general para juicios que glosa a fs. 74/75, en tal carácter contesta la demanda solicitando su rechazo con costas. Tras formular negativa ritual en forma general y particular, brinda su versión de los hechos. Así dice: Que el actor se encontraba correctamente registrado desde el inicio de la relación laboral (29/06/2009) como trabajador de temporada en la actividad azucarera en sus fincas, revistiendo la categoría de peón general (jornalero), desarrollando sus tareas en horarios normales de lunes a viernes y sábados al mediodía, gozando de los descansos correspondientes, no excediendo en ningún momento las jornadas de las ocho horas diarias y percibiendo las remuneraciones registradas en los recibos de sueldos y documentación de la demandada (los que eran recibidos en forma mensual pero liquidados por jornales efectivamente trabajados, todo ello conforme al convenio azucarero). Asimismo niega absurdas invocaciones del actor de que haya existido aprovechamiento de su condición de no saber leer ni escribir y que por ello se le pagaba a veces por tanto, y a veces por jornal, y que se le entregaban recibos figurando solo algunos días trabajados.

Manifiesta que en la temporada de zafra del año 2013 prestó servicios efectivos a partir de julio hasta el día 31/08/2013 (época de finalización de la misma), indicando que encontrándose en receso por haber terminado la temporada, el actor mediante TCL N° 79247254 de fecha 21/11/2013 intimó a la firma demandada para que le aclare su situación laboral, le otorgue tareas habituales, regularice su registración laboral con inscripción en los libros respectivos; y le abone jornales adeudados por los meses de septiembre, Octubre y Noviembre, SAC, Vacaciones y Diferencias Salariales. El mencionado telegrama fue contestado por la patronal mediante carta documento N° 372878048 fechada el día 03/12/2013, por medio de la cual se rechazaron sus términos. No hubo respuesta respecto a la relación de trabajo habida, siendo que el actor revistaba como trabajador temporario, con ocupación y tareas efectivas durante la zafra azucarera, todo ello de acuerdo a las registraciones obrantes en poder de su mandante e indica que en la zafra 2013 trabajó los meses de Julio y Agosto inclusive, realizando tareas hasta el día el 31/08/13, abonándole las mismas conforme a las escalas salariales vigentes en el convenio colectivo de la actividad azucarera. Finalmente rechazó que se le adeude remuneraciones por los meses de setiembre, octubre y noviembre del año 2013, más salarios caídos y diferencias salariales, etc., dado que no efectuó tareas alguna por esos períodos, así también niega que le adeuden salarios familiares por cinco hijos por los cuales no cabe responsabilidad alguna por ese rubro a LA PAZ S.A. poniendo a disposición del actor la liquidación del 10/09/2013 por finalización de temporada 2013 que incluye vacaciones proporcionales, SAC proporcional, certificación de servicios y remuneraciones.

Expone que la mencionada carta documento fue enviada al domicilio del actor en Barrio Santa Emilia S/N – Alto Verde, Tucumán, siendo devuelta por Correo Argentino informando “desconocido”, indicando que el domicilio anteriormente señalado es el domicilio del actor que figura en sus telegramas obreros remitidos, resultando el mismo que denuncia en su escrito de inicio de demanda, no habiendo en consecuencia silencio de su parte ante TCL de fecha 21/11/2013 que le permitiera al actor ejercitar la opción del Art. 57 LCT.

Con respecto a las asignaciones familiares, indica que la antigüedad computable del actor dado su carácter de trabajador de temporada es de 10 meses y 9 días (un año) conforme certificación de

servicios y remuneraciones, , en cuanto al recibo emitido en el mes de septiembre de 2013 a favor del actor, corresponde al pago de diferencias de haberes por la temporada y/o zafra 2013.

Relata que el actor mediante TCL N°84963945 de fecha 11/12/2013, invocando una falsa causa y armando una situación de hecho inexistente se dio por despedido en forma indirecta alegando silencio por parte de su mandante, pretendiendo rubros indemnizatorios indebidos.

Refiere que el requerimiento del actor formulado en su TCL del 21/11/2013 fue contestado por la patronal dentro del plazo legal y razonable, por lo que no hubo silencio como así tampoco del telegrama por el cual se da por despedido en forma indirecta, siendo respondido éste último mediante Carta Documento N°237073369 de fecha 04/01/2014, por lo que el despido invocado y su causal carece de toda entidad para que se considere injuriado, no guardando silencio la patronal que le permita al actor ejercer la opción del art. 57 LCT. Impugna planilla de rubros indemnizatorios, rechaza que adeude salarios familiares por cinco hijos por los cuales indica que no cabe responsabilidad alguna por ese rubro a LA PAZ S.A. Formula petitorio e indica que los libros y registraciones laborales y contables se encuentran a disposición del Juzgado en su domicilio situado en calle Vélez Sarsfield 509, de la ciudad de Aguilares, Provincia de Tucumán. Rechaza remuneración de \$ 6.645, 19 que el actor invoca en su planilla de liquidación y toma como base para el cálculo de los rubros pretendidos. Se opone a que el actor trate de introducir o agregar a la presente causa cualquier prueba documental y/o instrumental.

A fs. 64 la letrada apoderada de la parte actora adjunta actas de nacimiento y certificados de estudio.

A fs. 81 mediante decreto de fecha 31 de mayo de 2016 se tiene por apersonado al letrado apoderado de la parte demandada, por constituido domicilio legal, dándosele intervención de ley en el carácter invocado, en mérito al poder general acompañado.

A fs. 84/129 el letrado apoderado de la parte demandada adjunta documentación original (reservada en caja fuerte del juzgado) cumpliendo con lo normado por el art. 56 C.P.L.

A fs. 132, se abre la causa a prueba a los fines de su ofrecimiento.

A fs. 151 obra Acta de fecha 14/10/2016 que da cuenta de la realización de la audiencia de conciliación prevista por el art. 69 de la ley 6.204, la que fracasa por falta de acuerdo entre los litigantes.

A fs. 154/285 se glosan las pruebas ofrecidas y producidas por las partes.

A fs. 287 informa el actuario sobre la pruebas producida y por la parte actora.

A fs. 292/293 alega la parte actora, haciéndolo a fs. 295/297 la parte demanda.

A fs. 303 glosa dictamen fiscal sobre la inconstitucionalidad de las sumas remunerativas.

A fs. 314 mediante decreto de fecha 06/09/2017 se ordena librar oficio al correo oficial, el que es contestado mediante informe de fs. 323/325.

A fs. 327 mediante decreto de fecha 26/10/2017 se da cumplimiento con el art. 102 C.P.L.

A fs. 331, mediante providencia de fecha 30/11/2017 se llaman autos para sentencia quedando la causa en estado de dictarse sentencia definitiva, y

C O N S I D E R A N D O

I.- De los términos de la demanda (fs. 2/4), su ampliación (47/49) y su responde (fs.76/80) surge que constituyen hechos admitidos y por lo tanto exentos de prueba : 1) la existencia de la relación laboral que uniera al actor Nieva Miguel Alberto con la firma demandada LA PAZ S.A.; 2) que categoría del actor era la de peón general; 3) que trabajaba 8 horas diarias; 4) que su fecha de ingreso fue el día 29/06/2009; 4) que la actividad principal del actor era la relacionada con la caña de azúcar; 5) que las partes se encontraban vinculadas por medio de un contrato de temporada típico de prestación discontinua. Entonces al tener por reconocido por las partes que la actividad específica del actor es la cosecha de caña de azúcar, aún cuando las mismas puedan calificarse de labores agrícolas realizadas en un ámbito rural, no cabe dudas que quedan aprehendidas por las normas incluidas en la convención colectiva concertada a fin de regular la actividad azucarera a partir del año 1.954 (hoy C.C.T. N° 12/88), las cuales hasta la actualidad de manera invariable mandan aplicar respecto de dicha actividad las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, sin excepción. Como consecuencia, tomando en consideración que el artículo 34 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de Tucumán, aplicable supletoriamente al fuero del trabajo expresamente dispone que "...El Magistrado tiene la obligación de aplicar el derecho vigente, con prescindencia o contra la opinión de las partes, dando a la relación sustancial la calificación que por derecho corresponde", concluyo que la controversia suscitada en autos debe resolverse conforme lo estatuido por la Ley 20.744 (y sus modificatorias) como así también el convenio colectivo 12/88 que regula la actividad.

II.- Respecto de las actuaciones administrativas sustanciadas ante la SET delegación Concepción (copias glosadas a fs. 09/13) y recibos de sueldo (adjuntados a fs. 24/39 y originales a la vista reservados en caja de seguridad de Secretaría) acompañados con la demanda, la parte accionada no niega su autenticidad, conforme lo prescribe el artículo 88 del C.P.L. Por ello, ante su falta de respuesta categórica en tal sentido y de acuerdo al marco normativo citado, y criterio doctrinal y jurisprudencial imperante (Palacio, Tratado de Derecho Procesal Civil, T. VI, pág. 271, Fenochietto-Arazi, "Reseña de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Prov. De Buenos Aires", 1976, n° 179), se debe tener por auténticos los mencionados instrumentos. Así lo declaro.

En consecuencia, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las cuales este Tribunal deberá pronunciarse son:

1- Inconstitucionalidad de las sumas no remunerativas

2- Deficiente registración.

3- Extinción de la relación laboral: su justificación.Época de finalización de la zafra 2013.

4- Rubros y montos reclamados.

Costas y honorarios.

Primera Cuestión:Inconstitucionalidad de las sumas no remunerativasLa parte actora plantea la inconstitucionalidad del carácter no remunerativo de las asignaciones para empleados, en razón de que los acuerdos colectivos que atribuyen carácter no remunerativo a los aumentos acordados que violan el concepto de salario que consagra la LCT en su art. 103 y en el art. 1 del convenio 95 OIT, en cuanto privan al trabajador despedido de una indemnización que tenga en cuenta el salario real que percibía y repare adecuadamente el daño que produce su desvinculación.

La ley de contrato de trabajo ha adoptado un concepto amplio al definir el salario. La norma dispone que "A los fines de esta ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo" y agrega que "El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél" (LCT, artículo 103). La extensión dada al concepto admite

que la remuneración corresponda en los casos de trabajo efectivamente prestado, y también que aquélla se gane aunque el trabajador no preste servicios cuando ha puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador, aunque éste no la haya utilizado, y en ciertos casos, la ley pone a cargo del empleador el pago del salario, aunque no exista una prestación del trabajo ni una puesta a disposición del mismo, obligación que le atribuye por razones de política legislativa aún en situaciones en que no hay una conexión necesaria entre el trabajo y la causa por la que se dispone la continuidad del pago del salario (por ejemplo, la licencia paga por enfermedad inculpable del trabajador). En virtud de esa amplitud conceptual se ha observado la propensión del pensamiento del legislador "a aceptar que de una noción de salario estrictamente remuneratoria del trabajo, se pase a una remuneración del empleo mismo" (Conf. Rodríguez Mancini, Jorge en "Tratado de Derecho del Trabajo" dirigido por Antonio Vázquez Vialard, Buenos Aires, Astrea, 1983, tomo 4°, p. 557) quien señaló que esa noción ya había sido incorporada al ordenamiento por una norma previsional, el artículo 11 de la Ley 18037, que definía al salario, a los fines de esa ley jubilatoria, como "todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal..." Entre los elementos esenciales del salario el autor citado destacó que el salario es siempre una ventaja patrimonial y que todo pago que tenga esa característica, realizado por el empleador dentro del marco del contrato de trabajo, es decir que no tenga su causa comprobada en una relación jurídica ajena a aquélla, se presume que tiene carácter salarial (op. cit. p.556 y 558).

La evolución normativa posterior aceptó la naturaleza no salarial de ciertas prestaciones otorgadas por el empresario a los trabajadores que se brindaban en forma genérica atendiendo a algunas necesidades de éstos con la finalidad de mejorar su nivel de vida o de sus familias, sin que tales prestaciones tuvieran una relación directa con el trabajo prestado por los empleados. La Ley 24700 modificó la ley de contrato de trabajo e incorporó el artículo 103 bis, norma que estableció que se denominan beneficios sociales a "las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulativas ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo".

Con motivo de la crisis económica del año 2001, el Poder Ejecutivo Nacional dictó varios decretos que sucesivamente establecieron la obligación de pagar a los trabajadores mensualmente una suma de dinero durante un lapso determinado, en carácter de asignaciones no remunerativas de carácter alimentario. Las primeras normas sobre esta materia fueron los decretos n° 1273/02 (B.O. 18/07/02) ; n° 2641/02 (B.O. 20/12/02) y n° 905/03 (B.O. 16/04/03) En los considerandos de estas normas se afirmó que la crisis económica que atravesaba nuestro país había deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios, perjudicando a los trabajadores y acentuando la recesión; que tanto la CGT como las confederaciones representativas de los distintos sectores empresarios que abarcaban la totalidad del sector productivo reconocían la situación descripta y coincidían en que resultaba necesario tomar medidas de emergencia para la recuperación del ingreso alimentario. En los considerandos del último de los decretos mencionados, se exhortó a todas las entidades representativas de los empleadores y de los trabajadores para que con la mayor celeridad posible, en el marco de la negociación colectiva construyeran los consensos pertinentes a los efectos de que las asignaciones fijadas con carácter no remunerativo, fueran incorporadas a la remuneración de los trabajadores.

El Poder Ejecutivo, en cada decreto mencionado, invocó que la situación expuesta configuraba una circunstancia excepcional que hacía imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, por lo que dictó esas normas invocando las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional, que se refiere a los decretos de necesidad y urgencia.

Es notorio que en la evolución de la negociación colectiva se han realizado numerosos acuerdos colectivos que han establecido incrementos en los ingresos de los trabajadores pero mediante asignaciones no remunerativas que se pagan mensualmente y que en ciertos casos, se toman como base de cálculo para aportes y contribuciones de obra social, pero que en virtud de su carácter no remunerativo, no se consideran para el cálculo del sueldo anual complementario ni para los rubros indemnizatorios que corresponden en el caso del despido sin causa del trabajador.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad del artículo 103 bis, inciso c) de la Ley de contrato de trabajo (texto según Ley 24700) relativo a los vales alimentarios, en la sentencia del 01/09/09 dictada en los autos "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.", abordó recientemente la cuestión relativa a la constitucionalidad de los decretos que establecieron las asignaciones no remunerativas mencionadas precedentemente.

La Corte se pronunció en un caso referido al reclamo de un trabajador al que una sentencia de Cámara, al modificar el fallo de primera instancia, redujo la condena por diferencias en las indemnizaciones por despido y por vacaciones no gozadas y en el sueldo anual complementario, pues desestimó el planteo de inconstitucionalidad de los decretos 1273/02, 2641/02 y 905/03 que calificaron como "asignaciones no remunerativas de carácter alimentario" a las prestaciones establecidas a favor de los trabajadores y rechazó la pretensión del demandante de que aquéllas se consideraran para el cálculo de los rubros reclamados.

La sentencia de la Corte, del 19/05/2010, fue dictada en el expediente "González, Martín Nicolás c/ Polimat S.A. y otro". Al resolver la queja del trabajador, la Corte ponderó que el desconocimiento de la naturaleza salarial de la prestación produjo una disminución del importe del sueldo anual complementario, y trastornó la finalidad reparadora del régimen indemnizatorio del artículo 245 de la LCT, reglamentario del artículo 14 bis de la CN, que ordena proteger al trabajador contra el despido arbitrario, pues condujo a que la indemnización desconociera la concreta realidad a la que quiso atender al limitar uno de los elementos de cálculo de la indemnización que constituye uno de los dos indicadores de esa realidad, que es el salario realmente percibido por el trabajador (el otro indicador es la antigüedad).

La Corte manifestó que eran aplicables al caso las consideraciones que había expuesto en la sentencia del 01/09/09 dictada en el expediente "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A." a cuyos votos se remitió (considerando 4°) En ese fallo, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 103 bis, inciso c) de la LCT, que negaba la naturaleza salarial de los vales alimentarios, la Corte consideró que el principio protectorio (CN, artículo 14) se refiere de manera directa al salario, retribución o remuneración; que "la evolución progresiva de la tutela jurídica del trabajador en materia de salarios, se inserta en un proceso más comprensivo, concerniente a todos y cada uno de los aspectos del contrato o relación de trabajo, lo cual ha tenido, entre sus propósitos fundamentales, la protección de la dignidad de la persona humana en el vínculo laboral subordinado." (considerando 4°). Expresó también que el principio protectorio y el plexo de derechos que de él derivan, perderían buena parte de su sentido y efectividad si no expresaran una conceptualización del salario que posibilitara su identificación; que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) brinda, en sus artículos 6° y 7° pautas para esclarecer esa conceptualización, de las que resulta que el derecho a trabajar comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo y cuando esa oportunidad se materializa mediante un trabajo en relación de dependencia, la prestación debida por el empleador al empleado es calificada como "salario" o "remuneración", por lo que resulta inadmisibles que caiga fuera del alcance de esas denominaciones una prestación que, como los vales alimentarios, entrañó para el trabajador una "ganancia" que sólo encontró motivo o resultó consecuencia del contrato o relación de empleo (considerando 5°) por lo que "llamar a los vales "beneficios sociales" o "prestaciones de naturaleza

jurídica de seguridad social, no remunerativas", suplantando como causa del crédito o ganancia al contrato de empleo por un acto del empleador ajeno a este último; introducir en un nexo oneroso para ambos celebrantes una suerte de prestación gratuita por parte de una de éstas, el empleador, traduce una calificación que....resulta poco afortunada, carente de contenido y un evidente contrasentido" (considerando 5°)

Agregó que "la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador o los particulares, le atribuyan... sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen juris sería inconstitucional" y que "el artículo 103 bis, inciso c, no proporciona elemento alguno que, desde el ángulo conceptual, autorice a diferenciar a la concesión de los vales alimentarios asumida por el empleador de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de éste" (considerando 5°) y que toda ganancia que el trabajador obtiene del empleador, con motivo o a consecuencia del empleo, resulta un salario, una contraprestación de este último sujeto y por esta última causa. Esa contraprestación sólo puede ser llamada jurídicamente, salario, remuneración o retribución (considerando 6°)

De lo precedentemente expuesto surge que el concepto de salario abarca implícitamente la forma particular que en los últimos tiempos adoptó en muchos casos, (en la negociación colectiva), la mejora de los ingresos de los trabajadores, al culminar los acuerdos con el otorgamiento de aumentos que son calificados como "asignaciones o sumas no remunerativas" que son concedidas por única vez o mensualmente, de modo que la prestación es acordada durante cierto tiempo como un concepto no remunerativo diferente del salario y que puede estar sometido o no a aportes y a contribuciones (generalmente se aplican los destinados a la obra social). Por lo tanto, en el caso a examen, la suma correspondiente a estas prestaciones deben computarse como base de cálculo a todos los efectos laborales, y así lo declaro.

CAMARA DEL TRABAJO - CONCEPCION - Sala 2 QUINTANA MARGARITA LIDIA Vs. ALPARGATAS SAIC S/ COBRO DE PESOS Nro. Sent: 177 Fecha Sentencia: 11/05/2017 CONTRATO DE TRABAJO: OBREROS TEXTILES. ASIGNACION NO REMUNERATIVA SEGUN CALIFICACION EN CONVENIO COLECTIVO. SU VERDADERA NATURALEZA DE CARA A LA CONSTITUCION NACIONAL. La naturaleza jurídica de " las asignaciones no remunerativas " debe ser definida por los elementos que las constituyen, con independencia del nombre que se le asigne, los distintos sujetos del Derecho y que, aun cuando el convenio colectivo sea la fuente de tales beneficios (las asignaciones en cuestión), debe realizarse un juicio de compatibilidad, por lo que considero que debe remarcarse que los convenios colectivos de trabajo sólo resultarán operativos y vinculantes en todo cuanto no violen el orden mínimo legal o el orden público laboral. Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha seguido confirmado el criterio reseñado precedentemente. Así se ha expedido en los autos "Díaz Paulo Vicente c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A s/ recurso de hecho" de fecha 4/06/2013, cuyos fundamentos acertadamente la parte accionante hace propios en sostén de la pretensión de autos. A la luz de lo expuesto en los párrafos anteriores, podemos concluir que del precedente que hemos analizado del Máximo Tribunal del país, receptando el criterio de la Comisión de la OIT y los Tratados Internacionales, surge que las prestaciones de naturaleza salarial debían considerarse como parte integrante de la remuneración, haciendo caso omiso a las incorrectas denominaciones que el legislador pudiera atribuir a dichas prestaciones. Se ha buscado llamar las cosas por el nombre que el ordenamiento constitucional les otorga y se ha convalidado el pensamiento mayoritario de la doctrina autoral más respectada de nuestro país, el que poco después se plasmó en la reforma legislativa introducida por la ley 26.341. Si como lo explicó Deveali el trabajo no se presume gratuito por parte del trabajador, de manera idéntica también es oneroso para el empleador y por lo tanto nada de lo que entrega al trabajador podría ser ajeno a la noción básica de remuneración como contraprestación, tal como lo define el Art. 103 de la

LCT.- DRES.: ESPASA – SEGUÍ.

Segunda Cuestión: Deficiente registración.

1) Controvierten las partes respecto la modalidad de registración de la relación laboral que uniera a Nieva Miguel Angel Alberto con LA PAZ S.A.

En la demanda (fs. 2/3) el actor afirma que ingreso a prestar servicios como trabajador jornalizado de temporada para la firma demandada en las fincas de La Paz ubicadas en Alto Verde y Monte Rico en fecha 29/06/2009 de manera continua e ininterrumpida entre los meses de junio a diciembre de cada año (con una antigüedad de 28 meses), en la categoría de peón general, realizando tareas de acondicionada y descolada de caña de azúcar, limpieza, plantada y riego de plantas de limón y/o caña de azúcar; manejo tractor interno, etc., laborando de lunes a sábados 8 horas diarias pero cuando se regaba caña y limón lo hacía de lunes a lunes en turnos rotativos de 8 hrs con cinco compañeros. Manifiesta se encontraba irregularmente registrado, percibiendo una remuneración inferior a la que le correspondía (ya que al no saber leer ni escribir, la accionada se aprovechó de esa situación para pagarle a veces por tanto, a veces por jornal) y entregándole de vez en cuando recibos pero figurando solo algunos días en el mes, en especial los correspondientes a los últimos trabajados, siendo la última remuneración percibida \$15 por 100 kgs.

Por el contrario, en el responde (fs. 76/80) la razón social demandada afirma que el actor se encontraba correctamente registrado desde el inicio de la relación laboral (29/06/2009) como trabajador de temporada en la actividad azucarera en sus fincas, revistiendo la categoría de peón general (jornalero), desarrollando sus tareas en horarios normales de lunes a viernes y sábados al mediodía, gozando de los descansos correspondientes, no excediendo en ningún momento las jornadas de las ocho horas diarias y percibiendo las remuneraciones registradas en los recibos de sueldos conforme al convenio azucarero. Indica que la antigüedad computable del actor dado su carácter de trabajador de temporada es de 10 meses y 9 días (un año) conforme certificación de servicios y remuneraciones, resultando ese el tiempo efectivamente trabajado. Rechaza remuneración de \$ 6.645, 19 que el actor invoca en su planilla de liquidación y que toma como base para el cálculo de los rubros pretendidos.

2) Del estudio en que cada parte posiciona sus afirmaciones, corresponde merituar las pruebas aportadas en orden a su pertinencia y atendibilidad, conforme artículos 40, 265 inc. 4º, 300 y 302 del CPCC, de aplicación supletoria.

Los jueces del trabajo están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros sin que su oposición pueda revisarse en la instancia extraordinaria sino se demuestra absurdo. SCBA 17/05/94 (052898 sumario 13249). Así se considera:

2.a) Cuaderno de prueba instrumental (CPA N°1): Esta prueba es fundamental en un proceso y meritución sentencial laboral, pero hay que tener en cuenta que ante los hechos y realidad de otras demostraciones en proceso pueden ser desvirtuadas; (por ejemplo los importes de los recibos que demuestren sumas inferiores o categorías diferentes a las efectivamente laboradas por el trabajador).

La mencionada prueba consiste en: Expediente administrativo de la SET recibos de haberes, resumen de la tabla salarial del CCT 12/88, acuerdo de paritaria salarial 2013/2014.

Del expediente administrativo ante la SET 036-182 letra N año 2014 surge que las copias de las actas policiales (fs. 13, 15 y 18) y de las actas de audiencia (fs. 14, 16 y 19 de fechas 27/02/2014, 18/03/2014 y 22/05/2014) corroboro lo relatado en el escrito de demanda.

De los recibos de haberes (fs. 24/39): extraigo que el actor registra como fecha de ingreso el día 29/06/2009, en la categoría de peón general, percibiendo una remuneración mensual pero liquidada por jornada trabajada. Del análisis de los mismos concluyo: a) que el señor Nieva Miguel Alberto trabajaba desde junio a diciembre de cada año, con excepción del año 2013 donde se registran recibos de haberes por los meses trabajados de julio, agosto y septiembre, b) Que en los mismos figuran algunos días trabajados en el mes cuando en la demanda y en su responde se indica que laboraba de lunes a sábados (y el actor expone que en época de riego de lunes a lunes), por lo que determino que se encontraba deficientemente registrado el accionante.

De las copias del resumen de tabla salarial del convenio colectivo 12/88, adjuntadas por el actor a fs. 40/42 (en la que figura la escala salarial correspondiente al período 01/08/2013-30/04/2014) cotejada con el recibo de haber de fs. 39 (correspondiente al mes de agosto del año 2013), considero que el señor Nieva Miguel Alberto percibía una suma inferior a la que le correspondía (según lo prescripto por la ley aplicable y vigente).

2.b) Cuaderno de prueba de exhibición: La parte actora solicita se intime a la firma accionada a fin de que exhiba la documentación laboral, la parte demandada cumple en adjuntar copia de la documentación laboral a fs. 92/128, la cual se reserva en Caja de Seguridad de Secretaría, por lo cual debe tenerse por cumplido lo prescripto en el art. 61 C.P.L. La exhibición de documentación laboral y contable, rendida en la litis por la accionada tal como dan cuenta las presentaciones, si bien impide la aplicación al caso de la presunción establecida por el art. 61 C.P.L., de ninguna manera enerva la eventual demostración por parte del actor de las circunstancias fácticas fundantes de su acción. No cabe perder de vista que los libros laborales, son llevados en forma unilateral por el empleador y sin intervención del dependiente, por lo que resultan inoponibles a este último, conforme lo tiene dicho nuestro Máximo Tribunal (CSJT, "Smael Hugo Sale vs. Suc. Salazar Pedro Camilo s/ indemnización", sentencia n° 125 del 14/03/03).

De la constancia de simplificación registral de AFIP (constancia de baja del trabajador, fs. 124) se desprende que el actor se encontraba registrado como trabajador de temporada en la actividad azucarera, teniendo la obra social OS del personal de la actividad azucarera tucumana, encontrándose asegurado por ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO; aplicándole el convenio colectivo 12/88; y si bien refleja la mencionada constancia que era tractorista, de la demanda y del responde no resulta un hecho controvertido que el actor se desempeñaba como peón general correspondiéndole en consecuencia esa categoría.

A fs. 125/128 corre agregada certificación de servicios y remuneraciones del actor, en este sentido es necesario resaltar que la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones y el formulario de cese y la liquidación final, resultan obligaciones surgidas como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo. No debe confundirse el "certificado de trabajo" del art. 80 LCT con la "certificación de servicios y remuneraciones" de la ley 24241, ya que ésta última se expide en un formulario de la ANSES (P.S.6.2) en el que se inserta datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el citado art. 80 LCT. Si bien el certificado de servicios y remuneraciones otorgado por el empleador para ser presentado ante la Administración Nacional de la Seguridad Social, podría cumplir la función de certificado de trabajo reclamado por el dependiente, dada la finalidad diferente que tienen ambas constancias, es procedente intimar al empleador a que extienda el certificado requerido bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento." Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VIII - Lucas, Esteban Mariano c. Delta Compresión S.R.L. s/despido - 14/02/2008 - La Ley online.

Respecto a la oportunidad de entrega y exigibilidad de cada certificado, la Ley 20.744 expresamente dispuso que, el empleador tiene la obligación de entregarlo al trabajador, a su pedido, al momento de

la extinción del contrato; pero también establece que esa "Constancia Documentada" - Certificación de Servicios y Remuneraciones - podrá ser solicitada durante la vigencia del contrato, cuando existan causas razonables para su exigibilidad. Al respecto, la doctrina ha dicho que: "el párrafo agregado por el art. 45 de la ley 25.345, llamada Ley Antievasión, crea una nueva indemnización para el supuesto de que el empleador no entregara al trabajador, dentro de un plazo determinado, ciertas constancias y certificaciones laborales y de la seguridad social. Dichas constancias y certificaciones previstas en los parrafos 1° y 2° del artículo en comentario son las siguientes: a)- constancia de cumplimiento de la obligación del empleador de ingresar los fondos de la seguridad social; b) certificado de trabajo de exclusivo contenido laboral y c) certificación de servicios, remuneraciones y aportes prevista por el art. 12 inc g, de la ley 24.241". (Carlos Alberto Etala - Contrato de Trabajo ley 20.744 6° edición actualizada, Ed Astrea. T 1. 264).

Dicho todo esto, del análisis de autos surge que si bien consta la certificación de servicios y remuneraciones, no así el certificado de trabajo.

2.c) Cuaderno de prueba informativa (CPA N°3): A fs. 181/189 glosa informe de Anses del que extraigo que al actor se le hacían las contribuciones a la obra social y a la seguridad social desde el año 1995 hasta el 2016, es decir que durante el tiempo que el señor Nieva Miguel Alberto trabajó bajo la dependencia de LA PAZ S.A. registra aportes a los mencionados organismos.

2.d) Cuaderno de prueba testimonial (CPA N°4): Las pruebas testimoniales son esenciales en el proceso, porque implican reconstruir la realidad a través de versiones orales, con todo el margen de ficción que ello puede llegar a importar, es, sin dudas, la prueba más importante de los procesos laborales. Las declaraciones testimoniales rendidas por Guzmán Juan Carlos (fs. 210) y Sánchez Walter Daniel (fs. 212), Domínguez Armando David (fs.225) y Sánchez Carlos Alberto (fs. 227) obrantes en el presente cuaderno sirven a esta magistrada para ilustrarse acerca de que los testigos reafirman que el actor trabajaba en la firma LA PAZ S.A. y que lo saben porque eran compañeros de trabajo, lo cual consolida la versión de que la relación laboral existió (hecho que no está discutido en autos), a lo que cabe agregar que el testigo Sanchez Carlos Alberto manifiesta "...yo lo veía a la mañana, a la tarde trabajando todos los días, descansando los domingos..", afirmando de esta manera que el actor tenía descanso, y que la patronal le hacía figurar en los recibos de sueldo menos días trabajados que los reales, pagándole una remuneración inferior a la que le correspondía.

A fs. 274/275 el letrado apoderado de la parte demandada deduce incidente de tacha en contra de todos los testigos en sus dichos, explicando puntualmente el Dr. José A. Taboada que tacha al testigo Juan Carlos Guzmán por que si bien manifiesta que siempre lo veía trabajar en la finca LA PAZ no dice la circunstancia, el tiempo o período, solo se limita a formular una manifestación; con respecto al testigo Sánchez Walter Daniel indica que no da las explicaciones necesarias de los hechos por los cuales se lo interroga y de lo que él expone; en cuanto al testigo Domínguez David Armando indica que conoce los hechos porque el actor le comentaba y en lo que se refiere al testigo Sánchez Carlos Alberto expone que es un testigo de complacencia exponiendo declaraciones que no se sustentan en elementos objetivos, y hace manifestaciones personales que no tienen ninguna incidencia. Manifiesta que todas las declaraciones son ineptas, inapropiadas e inconducentes para constituir una prueba testimonial.

Considero no hacer lugar a las tachas recaídas sobre todos los testigos, por cuanto se trataron de personas que veían al actor realizar las tareas. El hecho de que los testigos fueran dependientes de la demandada no los inhabilita, aunque hayan sido propuestos por la contraparte, pues son ellos precisamente quienes han tenido una vinculación directa con los acontecimientos (C.N.T., Sala VIII 03/06/90 "Herrera Fernando y otros c/ Establecimientos Modelo Terrabusi S.A: T y S.S. 1990-538").

Es preciso resaltar que para la eficacia de la prueba testimonial, los testigos, deben dar detalles precisos y concretos sobre el conocimiento del hecho discutido a diferencia de la prueba confesional, en la que las posiciones son presentadas en forma asertiva, es decir para responder por sí o por no; en la prueba testimonial: las posiciones serán interrogativas e indagatorias de tal forma que no resulten sugestivas ya que con la prueba testimonial, se reconstruye la realidad a través de las versiones orales de los testigos. El valor de la prueba testimonial reside precisamente en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los testigos refieren en apoyo de sus versiones respecto de los hechos que afirman conocer o saber. Toda afirmación despojada de una explicación circunstanciada, que permita establecer porqué el testigo sabe o conoce respecto de determinado hecho, resulta irrelevante como elemento de comprobación. La declaración del testigo debe persuadir al juez y ello obviamente no ocurrirá si no aparece respaldado en razones o motivos que la tornen no sólo creíble, sino también racionalmente explicable que las cosas se sucedieron tal como son referidas por el deponente (cfr. C.S.J.Tuc., sentencia N° 724 del 16/8/2006. En el caso de autos en lo que respecta a la cuestión a tratar sostengo que a pesar que los testimonios no son suficientemente claros para tener por acreditado que el actor se encontraba deficientemente registrado, pero del testimonio vertido por el señor Sanchez Carlos Alberto concluyo que al haber afirmado que el actor descansaba los domingos, estimo que laboraba de lunes a sábados (lo cual es sostenido en la demanda y su responde) y al ser cotejados con los recibos de haberes determino que en los mismos solo figuraban algunos días en el mes trabajados.

2.e) Prueba confesional (CPA N°5): Sobre la prueba confesional se sabe que la obligación de confesar se enfrenta y colisiona contra el elemental derecho de defensa y la potestad de no declarar contra los propios intereses en juicio, por ello la apreciación de la misma, será estricta, atento la relatividad que a mi criterio presenta. Dicho esto, paso a analizar el cuaderno de prueba del actor N°5. A fs. 252 corre agregado pliego de posiciones las que son absueltas a fs. 254 por el señor Jorge Hernán Simón Padros quien reconoce que el actor trabajaba en la cosecha de caña de azúcar bajo la dependencia de la firma demandada. Con respecto a la instrucción del actor (en referencia si sabe leer o escribir) la respuesta es contradictoria ya que primero dice que no conoce y luego agrega “..no es verdad firmaba los recibos”. De lo que surge que al resultar confuso ello no resulta admisible para resolver la cuestión. A la cual debo agregar, que la circunstancia de que una persona sepa firmar, no necesariameente prueba que sepa leer y escribir.

3) Se desprende de las constancias de autos, luego de valorar las pruebas en conjunto, que si bien en la demanda el actor indica que trabajaba normalmente de lunes a sábados y cuando se regaba de lunes a lunes; en el responde la accionada explica que lo hacía de lunes a sábados, de la prueba testimonial glosada a fs. 227 ésta sentenciante corrobora lo vertido por LA PAZ S.A. a fs. 76/80 en cuanto a que el señor Nieva descansaba los domingos, trabajando de lunes a sabados, concluyendo que laboraba 26 días al mes figurando en los recibos de haberes una cantidad menor, configurándose la deficiente registración a pesar de encontrarse correctamente registrada su categoría y la fecha de ingreso.

Tercera Cuestión: Extinción de la relación laboral: su justificación. Época de finalización de la zafra 2013.

1) Con los esritos de demanda y contestación, las partes delimitaron el objeto de la prueba.

En la demanda (fs. 2/4) y su ampliación (fs. 47/48) el actor indica que en el año 2013 trabajó durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y 4 días en Octubre, fecha en la que dejan de proveerle tareas, pese a que mantuvo su fuerza de trabajo a disposición de la razón social demandada y a pesar que la zafra se extendió hasta el mes de Noviembre; resaltando que tratándose de un trabajador de temporada la obligación del empleador era proveerle tareas durante todo el ciclo,

comunicarle su finalización y abonarle la liquidación final (lo cual no hizo la demandada). Indica que esa situación motivó al actor a intimar a LA PAZ S.A. mediante TCL N° 79247254 de fecha 21/11/13 para que aclare su situación laboral, le otorgue tareas habituales, regularice su registración laboral, lo inscriba en los libros respectivos debidamente y le abone los salarios correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, todo bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido en caso de silencio o negativa de su parte. Que ante la falta de respuesta remite TCL N° 8463945 de fecha 11 de Diciembre de 2013 ratificando todos los términos de TCL anterior, dándose por despedido ante el silencio de la empleadora. Asimismo procedió a iniciar trámite mediante denuncia en la SET en fecha 10/02/2014 originando el expediente N° 036/182/N/14, no compareciendo la accionada a ninguna de las audiencias fijadas, ni abonándole la liquidación final, obligándolo a solicitar archivo de las actuaciones para recurrir a la vía judicial. Indica que la demandada responde mediante CD 237073369 en fecha 04/01/2014 rechazando las misivas anteriores e indicando que el TCL N°79247254 del 21/11/2013 fue respondido en tiempo oportuno mediante CD N° 17213768 cursado al domicilio consignado en ese TCL y que fue devuelto por Correo Argentino por dirección inexistente, indicando que no hubo posición de silencio de su parte y explicando que por la zafra 2013 trabajo por los meses de Julio y agosto, realizando tareas hasta el 31/08/2013 (por finalización de temporada), abonándole dichas tareas conforme a las remuneraciones y escalas salariales vigentes del convenio colectivo de la actividad. Destaca en la demanda que si bien en la mencionada carta documento la firma demandada expone que el señor Nieva Miguel Alberto trabajó hasta el 31/08/2013, ello queda absolutamente desvirtuado con el recibo de haberes Septiembre de 2013. Explica que nunca recibió la carta documento y ello queda corroborado a través del sistema "Track and Trace" de Correo Argentino, el cual arroja como resultado.: "Número inválido de Pieza". El señor Nieva responde su tercer telegrama N°83125126 de fecha 07/02/2014 ratificando TCL anteriormente enviados en todos sus términos y negando haber recibido CD N°17213768. Posteriormente la demandada remite carta documento de fecha 20/02/2014 manteniendo su posición. Finalmente el actor la intima a abonar las indemnizaciones de ley y hacer entrega de certificación de servicios bajo apercibimiento de lo prescripto por el art. 80 L.C.T. mediante TCL de fecha 07/10/15. Indica que del intercambio epistolar resulta que la ruptura de la relación laboral se produjo por despido indirecto por falta de suministro de trabajo para el accionante y el silencio de la demandada ante los requerimientos e intimaciones realizados, lo que configura injuria y conduce a la resolución del vínculo laboral, destacando que de las misivas intercambiadas entre las partes surge inequívocamente la voluntad de prestar servicios por parte del Sr. Nieva, poniendo a disposición de la firma demandada su fuerza de trabajo.

En el responde (fs. 76/80) la razón social demandada indica que en la temporada de zafra del año 2013 el actor prestó servicios efectivos a partir de julio hasta el día 31/08/2013 (época de finalización de la mencionada zafra), indicando que encontrándose en receso por haber terminado la temporada, el señor Nieva mediante TCL N° 79247254 de fecha 21/11/2013 intimó a la firma demandada para que le aclare su situación laboral, le otorgue tareas habituales, regularice su registración laboral con inscripción en los libros respectivos; y le abone jornales adeudados por los meses de septiembre, Octubre y Noviembre, SAC, Vacaciones y Diferencias Salariales. El mencionado telegrama fue contestado por la patronal mediante carta documento N° 372878048 fechada el día 03/12/2013, por medio de la cual se rechazaron sus términos y negando en la misma que no hubiera habido respuesta respecto a la relación de trabajo, siendo que el actor revistaba como trabajador temporario, con ocupación y tareas efectivas durante la zafra azucarera, abonándole las tareas conforme a las remuneraciones y escalas salariales vigentes en el convenio colectivo de la actividad azucarera. Asimismo rechazó que se le pagaba por debajo de los valores vigentes, que se le adeude remuneraciones por los meses de setiembre, octubre y noviembre del año 2013, más salarios caídos y diferencias salariales, etc., dado que no efectuó tareas alguna por esos períodos, menos que se le adeuden salarios familiares por cinco hijos por los cuales no cabe responsabilidad alguna por ese

rubro a LA PAZ S.A. poniendo a disposición del actor la liquidación del 10/09/2013 por finalización de temporada 2013 que incluye vacaciones proporcionales y SAC proporcional. Expone que la mencionada carta documento fue enviada al domicilio del actor en Barrio Santa Emilia S/N – Alto Verde, Tucumán, la que fue devuelta por Correo Argentino informando “desconocido”, indicando que el domicilio anteriormente señalado es el domicilio del actor que figura en sus telegramas obreros remitidos, siendo el mismo que denuncia en su escrito de iniciación de demanda, explicando que no hubo silencio de su parte ante TCL de fecha 21/11/2013 que le permitiera al actor ejercitar la opción del Art. 57 LCT e indica que el accionante mediante TCL N°84963945 de fecha 11/12/2013, invocando una falsa causa y armando una situación de hecho inexistente se dio por despedido en forma indirecta alegando silencio por parte de su mandante, pretendiendo rubros indemnizatorios indebidos. Asimismo refiere que el requerimiento del actor formulado en su TCL del 21/11/2013 fue contestado dentro del plazo legal y razonable por su mandante, por lo que no hubo silencio como así tampoco del telegrama por el cual se da por despedido en forma indirecta, contestando éste último mediante Carta Documento N°237073369 de fecha 04/01/2014, por la cual se le hizo saber que sus requerimientos fueron contestados en tiempo oportuno mediante Carta Documento del 03/12/2013, y que el despido invocado y su causal carece de toda entidad para que se considere injuriado.

2) Del estudio en que cada parte posiciona sus afirmaciones, corresponde merituar las pruebas aportadas en orden a su pertinencia y atendibilidad, conforme artículos 40, 265 inc. 4º, 300 y 302 del CPCC, de aplicación supletoria: Así

2.a) Cuaderno de prueba instrumental (CPA N°1): Consistente recibos de haberes y en misivas intercambiadas entre las partes. De la epistolar resulta que:

-En fecha 21/11/2013 mediante TCL N°CD404361456 (copia autenticada a fs. 191) el actor intima a la demandada a que aclare su situación laboral y le otorgue las tareas habituales, regularice su registración laboral y abone meses adeudados de septiembre, octubre y noviembre del año 2013 bajo apercibimiento en caso de silencio o negativa de considerarse injuriado y despedido por su culpa.

A fs. 15 rola copia del sistema track and trace (originales que tengo a la vista y reservados en caja fuerte del juzgado), el cual permite el seguimiento de la correspondencia a través de la base de datos del correo oficial. Del mismo surge que el mencionado TCL fue entregado a Arévalo Victor el 28/11/2013 (lo que también surge del informe agregado a fs. 195 emitido por el jefe del correo oficial de sucursal Concepción)

-En fecha 11/12/2013 a través de TCL N°CD404361972 (copia autenticada a fs. 192) el actor se considera injuriado dándose por despedido por culpa de la patronal ante su silencio frente a los reclamos realizados.

Mediante copia del sistema de track and trace (originales reservados en caja fuerte del juzgado) que corre agregada a fs. 18 surge que el mismo fue entregado a Prado Jorge y firmado por él en fecha 13/12/2013 (coincidiendo con el informe de fs. 195 emitido por el jefe del correo oficial sucursal Concepción, Nicolás A. Medina).

-En fecha 04/01/2014 la demandada remite carta documento N° CD23707369 en la que indica que el TCL N°79247254 del 21/11/2013 fue respondido en tiempo oportuno mediante CD N°CD17213768 cursado al domicilio consignado en ese TCL, que es el mismo al que se contesta esta misiva y que fue devuelto por Correo Argentino por dirección inexistente, explicando que no hubo en consecuencia silencio de su parte, poniendo a disposición liquidación del 10/09/13 por finalización de temporada (lo cual no se acredita en autos).

A fs. 20 rola copia del sistema track and trace (originales reservados en caja fuerte del juzgado) por medio del cual observo que la carta documento N°CD017213768AR figura como número inválido de

pieza.

-En fecha 07/02/2014 el actor remite a la demandada TCL N°CD404362479 (copia autenticada a fs. 193) mediante la cual reconoce que era trabajador temporario entre los meses de Junio a Diciembre, desde su fecha de ingreso 29/06/2009 en forma continua e ininterrumpida y que en octubre del año 2013 corto sus tareas habituales y sin abonarle las trabajadas en Septiembre y 4 días de Octubre, indicando que su registración laboral siempre fue irregular y falsa ya que figuran solo algunos días de trabajo y no el mes completo, con remuneraciones muy inferior a los valores legales. Asimismo respecto a la respuesta dada en la CD 1N°17213768 que dice la demandada haber remitido, la desconoce y niega todos su términos por improcedente y extemporánea, ya que el Correo Argentino le informa “Número Inválido de Pieza” y mal puede alegar respecto a su dirección como inexistente, cuando no lo es.

A fs. 195 corre agregado informe efectuado por el jefe del correo oficial sucursal Concepción Nicolás A. Medina, que indica que la pieza postal TCL N°CD404362479 fue entregada el 14/02/2014 al señor Arèvalo Hugo, quien firma la misma.

-en fecha 20/02/2014 la demandada mediante CD N° CD258412955 rechaza TCL 83125126 ratifica íntegramente términos de sus anteriores cartas documentos. Indicando que se encuentra debidamente registrado de acuerdo a la actividad realizada y períodos efectivamente trabajados no adeudándosele los rubros que pretende.

-En fecha 7/10/2015 el actor mediante TCL N°CD504780455 (copia autenticada a fs. 194) intima a que le abone la demandada liquidación final, haberes adeudados e indemnizaciones de ley; asimismo que le haga entrega del certificado de trabajo y constancia de haber ingresado aportes y contribuciones de la seguridad social, bajo apercibimiento de reclamar las indemnizaciones del art. 80.

A fs. 195 glosa informe del Jefe del correo oficial sucursal Concepción, Nicolás A. Medina, que indica que el telegrama documento N°CD504780455 fue entregado al señor Prado Jorge, que el aquel que lo firma.

-En fecha 20/02/2014 la patronal remite CD N°CD258412955 mediante el cual rechaza TCL 83125126, ratifica términos de sus cartas documentos anteriores reiterando que el actor se encuentra debidamente registrado de acuerdo a la actividad realizada y períodos efectivamente trabajados, no adeudándole rubros que pretende.

Del mencionado intercambio epistolar concluyo que la relación laboral se extinguió en fecha 11/12/2013 a través de TCL N°CD404361972 en la cual se da por despedido ante el silencio de la patronal, ello considerando que el despido es un acto unilateral que se torna operativo a partir del momento en que llega a conocimiento del destinatario.

2.b) Cuaderno de prueba informativa (CPA N°3): A fs. 325 glosa informe del jefe del correo oficial sucursal Concepción, el que indica que la carta documento N°CD17213768AR responde que no existe dicho número de pieza en sus archivos , por lo tanto es inválido y pieza inexistente según su sistema.

En este sentido es necesario destacar que es propio de las relaciones laborales la existencia de diferentes comunicaciones cursadas entre los que participan del vínculo laborativo. En estas notificaciones pueden darse distintas situaciones que generan dudas diversas –en lo que hace a su envío y recepción-, cuyas respuestas corresponde buscar, primeramente, en la lógica que gobierna la relación entre las partes, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir la relación.

La Ley de Contrato de Trabajo obliga al trabajador y al empleador no sólo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, apreciados con criterios de colaboración y solidaridad, debiendo obrar de buena fe las partes ajustando sus conductas a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador.

Desde el punto de vista normativo, la exigencia genérica de una conducta diligente surge de los artículos 62 y 63 de la LCT .

En tal virtud, dentro de la relación laboral, la buena fe está calificada por las notas de colaboración –en tanto las partes deben actuar cooperando en la obra común de obtención de bienes y servicios-, y solidaridad – en cuanto cada parte debe sentirse responsable en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes-, debiendo cumplirse por medio de la diligencia. Ese actuar leal, sincero, colaborador y solidario se debe traducir en cumplimiento activo, oportuno y eficaz de los deberes.

El principio de buena fe contractual es transversal al Derecho ya que retoma la innata cuestión de la ética, el respeto y al honestidad en los comportamientos mutos de las personas.

Estos aspectos de los deberes de diligencia no constituyen una obligación en sentido estricto, por cuanto su cumplimiento no puede obtenerse compulsivamente. Indica Litterio que tienen la naturaleza jurídica de una “carga”, en el sentido de que el obligado puede no observarlos, pero se perjudicará a sí mismo por la pérdida de ventajas que habría obtenido haciéndolo.

En materia de comunicaciones laborales se derivan del principio de actuación de buena fe los siguientes comportamientos: 1) la carga del trabajador de informar a su empleador los cambios de domicilio. Excepto contadas excepciones, el empleador está obligado a notificar a su empleado en el domicilio que éste denunció y no se le puede exigir que practique diligencias investigativas para restablecer su paradero; 2) obligación de recibir las comunicaciones que, por motivo de la relación laboral, se cursen entre las partes, 3) en principio las comunicaciones que lleven la atestación “rehusadas”, “domicilio cerrado” o “domicilio desconocido” deben considerarse como recibidas, si han sido remitidas al domicilio del lugar de prestación de tareas o al domicilio consignado por el trabajador –a modo de declaración jurada- en su legajo personal, 4) deber de expresarse en las comunicaciones con la mayor claridad, sin reticencias ni ambigüedades, en forma tal que no quede lugar a duda acerca de qué es lo que piden, qué es lo que rechazan, o que es lo que comunican, pues en orden a esas manifestaciones han de requerirse conductas concretas a las partes; 5) aun cuando no se comunique con máxima precisión la causa del despido, éste puede considerarse legítimo a condición de que se respeten los principio de buena fe de los contratantes y la finalidad del artículo 243 de la LCT; 6) Las partes deben evitar todo abuso de derecho y cuidar de no frustrar los valores protegidos legalmente, manteniendo recíproca lealtad; 7) deben actuar teniendo en cuenta siempre la subsistencia del vínculo laboral; 8) no deben guardar silencio frente a los reclamos de la otra parte, 9) en la medida que sea posible, deben acordarse a la otra parte la posibilidad de que se enmiende el error en que pueda haber incurrido o se remedie el daño causado, 10) debe evitarse la aplicación de criterios discriminatorios (discriminación negativa); 11) comunicar a la otra parte todo cambio de domicilio, con el objeto de garantizar la recepción de las comunicaciones.

Como se ve, la buena fe será el prisma bajo el cual se observará el intercambio telegráfico, tantos en sus aspectos formales como materiales.

Así, de las constancias de autos surge que del informe del jefe de correo oficial glosado a fs. 325 resulta que la pieza postal N°CD17213768AR es inválida, no siendo contestado el telegrama N°CD404361456 de fecha 21/11/2013 (copia autenticada a fs. 191 y 195) mediante la cual el actor

intima a la patronal a que le aclare la situación laboral, le otorgue las tareas habituales, regularice su registración laboral, lo inscriba en los libros respectivos y le abone meses adeudados de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2013, ante lo cual se destaca el silencio de la patronal.

En este sentido es necesario determinar que consecuencias acarrea el silencio del empleador guardado frente a un requerimiento fehaciente del trabajador.

La LCT en el artículo 57 instituye el “principio de asentimiento” a los reclamos del trabajador cuando el empleador no contesta la intimación en un plazo razonable, nunca inferior a dos días hábiles.

En primer lugar es dable destacar que, para que se active la presunción del artículo 57 de la LCT, es ineludible que esté presente el presupuesto fáctico de la existencia de un contrato de trabajo o demostrada la prestación de servicios a favor de terceros que haga presumible la relación laboral (art. 23 LCT). Es sólo en este marco que determinadas conductas de las partes –comprensivas de omisiones- pueden ser, a su vez, analizadas como presunciones de otros elementos del vínculo. El silencio, en consonancia con la intención legislativa, puede ser equiparado a la respuesta ambigua, evasiva u oscura, debido a que el espíritu de la norma descansa en la pretensión de otorgar certeza a las posiciones que asuman los sujetos en sus respectivas comunicaciones. Esta obligación de dar claridad a las comunicaciones entabladas entre los sujetos de la relación laboral surge expresamente del artículo 243, LCT.

Dicho ello, y en lo que refiere específicamente al silencio que pudiere guardar el empleador frente a una intimación de su dependiente cabe mencionar que el contenido de una carta documento o telegrama colacionado, aunque no sea contestado, no es suficiente para tener por acreditado –sin más- lo que se afirma en su contenido, pues esto no deja de ser una afirmación unilateral del remitente. No puede derivarse de ello un acuerdo de voluntades por no haber respondido el destinatario el despacho, si no se dan los supuestos en que el silencio es computable como manifestación.

Operado el silencio –o respuesta ambigua/evasiva- del empleador frente al requerimiento fehaciente cursado por su dependiente, dicha omisión podrá tener eficacia rupturista, generando una presunción iuris tantum respecto a las afirmaciones vertidas por el trabajador en su intimación y, por consiguiente, legitimándolo a optar por la disolución del contrato de trabajo en forma indirecta, con presunción de causa. Pero de ese silencio que eventualmente pudiere guardar el requerido no puede colegirse y no implica, sin más, un reconocimiento asertivo y concluyente de los incumplimientos que pudiere denunciar el trabajador en su despacho telegráfico; mucho menos que la presunción legal que origina una consecuencia desfavorable para el empleador se pueda extender a todo lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. En otras palabras, operado el silencio del empleador frente a las intimaciones de su dependiente, generará una presunción en contra de aquél, autorizando al trabajador a considerarse despedido por culpa de su dador de trabajo. Gozará el trabajador, en el juicio laboral, de una presunción iuris tantum en orden a las omisiones denunciadas de su empleador, mas deberá proporcionar los elementos probatorios necesarios para lograr entidad convictiva al material de prueba que pudiere aportar. Y ello, una vez más porque el artículo 57 de la LCT impone al empleador el deber de explicarse frente a un requerimiento expreso de su empleado, creando así una presunción en su contra cuando guarda silencio –que se trasunta en la inversión de la carga probatoria-, en tanto constituye una manifestación tácita de consentimiento respecto del reclamo formulado (art. 263 Código Civil y comercial de la Nación). Esos incumplimientos serán sometidos al juicio de razonabilidad que debe efectuarse en sede judicial.

3) De lo expuesto concluyo que si bien la demandada en su responde indica que en el año 2013 el actor inició la temporada en julio y dejó de prestar servicios al finalizar la misma el día 31/08/2013,

considero importante recordar que en nuestra provincia la temporada de zafra azucarera se extiende alrededor de cinco a seis meses por año. Ello acontece de manera invariable, entre los meses de mayo a octubre de cada año, y como es de público conocimiento comprende ese período no solo la cosecha de la caña de azúcar sino más importante aun todo el proceso de molienda y elaboración de azúcar que llevan a cabo los ingenios. Dicho proceso exige, necesariamente, un período de reparación y alistamiento que es el que precede a cada zafra azucarera y que constituye una nueva temporada de trabajo que se lleva a cabo en todos los ingenios sin excepción y que obviamente exige la contratación de un plantel adicional de trabajadores a fin de dejar en condiciones las maquinarias e instalaciones para la próxima temporada de fabricación. Estas consideraciones constituyen datos objetivos derivados de la realidad que por tratarse de hechos notorios y de público conocimiento no exigen demostración alguna y que esta sentenciante en su apego a la encomiable tarea de buscar la verdad objetiva no puede dejar de tomar en cuenta como marco de la plataforma fáctica que habrá de sustentar el fallo (conf. art. 33 del CPCyC supletorio), a ello cabe destacar que el actor se desempeñaba como peón general bajo la dependencia de la demandada desde el año 2009 desarrollando sus tareas a partir de junio hasta diciembre de cada año, pero que al reclamar el actor en su demanda los salarios hasta noviembre estimo que correspondía que el se abone ese mes en razón de lo considerado ut supra ya que puso su fuerza de trabajo a disposición de la patronal a los fines de continuar la relación laboral, lo que queda corroborado mediante intimación que realiza en fecha 21/11/2013, constituyendo el despido indirecto deviene procedente. En este sentido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia estableció en el fallo Atienza, Ricardo Emilio c/Banco de la Nación Argentina que: “la injuria responde a un criterio objetivo que se refleja en un incumplimiento inmotivado de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo (CSJN, 29/4/2004,A.2107.XXXVIII)

4) Considerando que el despido es una declaración de voluntad unilateral que pone fin a la relación laboral, concluyo que carece de relevancia para resolver esta cuestión las misivas posteriores a la del 11/12/2013.

Por lo tanto la extinción del contrato se produjo:

I) Por la sola voluntad del trabajador ante el silencio de la firma demandada frente a los reclamos que efectúa mediante telegrama de fecha 21/11/2013 por hechos que configuran injuria.

II) Tuvo recepción por parte del empleador el TCL enviado por el trabajador

III) Tuvo carácter extintivo el telegrama de fecha 11/12/2013.

El requisito legal de la certeza de la disolución del vínculo esta dada por el TCL enviado por el trabajador en fecha 11/12/2013, ya que el despido resulta una causa lógica y tiene una razón jurídica cuando ambas partes reconocen que hubo un contrato de trabajo (Cámara Nac. del Trabajo Sala VIII mayo 19/-995 y del DT 1995-B1411).

Se violaron entonces los deberes de buena fe (art. 63 L.C.T.), como se mencionó anteriormente.

5) Los restantes medios probatorios, si bien analizados en su totalidad por esta Juez, no se mencionan puntualmente por no considerarlos dirimientes a efectos de la dilucidación de la cuestión planteada.

6) Las pruebas mencionadas me conducen a la convicción de que la relación laboral existió a partir del 29/06/2009, que se desempeñaba como peón general categoría 1 del convenio colectivo 12/88, laborando como trabajador de temporada, encontrándose deficientemente registrado, extinguiéndose la relación el día 11/12/2013, y que al dejar la patronal de proveerle tareas antes de la finalización de la temporada concluyo que el despido indirecto fue causado por injuria de gravedad suficiente ante el

silencio de la patronal frente a los reclamos del actor, es por ello que existen elementos suficientes para hacer lugar a la demanda correspondiendo al actor la indemnización por daños y perjuicios establecida por el art. 95 de la LCT (conforme lo determinado por los arts. 96 y 97 de la LCT). Y Así lo declaro.

Tercera cuestión: Rubros y montos reclamados.

1.- Pretende la actora la suma total de \$ 102.902,35 (pesos ciento dos mil novecientos dos con 35/100) con más intereses y costas en concepto de:remuneración e integración (art. 233 LCT)noviembre 2013(26 jornales), indemnización art. 232 LCT, indemnización art. 245 LCT, SAC 2013, SAC s/ preaviso, vacaciones proporcionales 2013, indemnización art. 1 y 2 Ley 25.323, remuneraciones Octubre 2013, diferencias remuneraciones 2013, indemnización art. 80 LCT e indemnización de daños y perjuicios (asignaciones familiares 2013).- Conforme lo dispone el artículo 265 inc. 6 del CPCC (supl.) se analizarán por separado cada uno de los conceptos reclamados:

a) Indemnización por antigüedad (por el tiempo efectivamente trabajado, es decir 3 años (al ser 28 meses los trabajados), correspondiente a las temporadas laboradas , las cuales se desarrollaron desde los meses de junio a noviembre de cada año), preaviso, SAC sobre preaviso. El actor tiene derecho a estos rubros en virtud de la conclusión arribada en el tratamiento de la segunda cuestión y de conformidad con lo prescripto por los arts. 232 y 245 de la L.C.T..

b) SAC proporcional: corresponde ser abonado un pago proporcional a los días trabajados, por cuanto la relación laboral se extinguió en fecha 11/12/13.

c) Integración del mes de despido: corresponde ser abonado al haberse extinguido el contrato el día 11/12/13.

d) Vacaciones proporcionales al año 2013: si corresponde ser abonado este rubro.

e) Remuneraciones Octubre 2013: su calculo se encuentra incluído dentro de la indemnización por daños y perjuicios.

d) Diferencias salariales: corresponde por los años 2013.

e) Indemnización del Art. 1 de la Ley 25323. Dicha norma establece que en caso de falta de registración o registración defectuosa se duplicará la indemnización por antigüedad sin requerir ninguna intimación del trabajador... En el caso sub-examine, tal como surge en el tratamiento de la primera cuestión, no se configuran los supuestos contemplados en la norma por lo que al encontrarse acreditada la correcta registración no corresponde acceder al reclamo indemnizatorio establecido en esta norma.

f) Indeminización del Art. 1 de la Ley 25.323: Dicha norma establece que en caso de falta de registración o registración defectuosa se duplicará la indemnización por antigüedad sin requerir ninguna intimación del trabajador... En el caso sub-examine se configuran los supuestos contemplados en la norma, por lo que acreditada que fue la deficiente registración de la relación laboral de la actora, corresponde acceder al reclamo indemnizatorio establecido en esta norma.

h) Indemnización del Art. 2 de la Ley 25.323. El reclamo de este rubro deviene procedente por cuanto se verifica intimación cursada por el trabajador a los fines de reclamar el pago de los rubros indemnizatorios. En tal sentido debemos señalar que resulta criterio sustentado por el Máximo Tribunal de la provincia que, tratándose de una sanción prevista para que el empleador moroso en el pago adecue su conducta -como última oportunidad- a las disposiciones legales y dé cumplimiento con su obligaciones de abonar las indemnizaciones, la intimación exigida por la norma legal debe reunir los siguientes requisitos: debe ser expresa, clara y concreta y debe efectuarse luego de

vencido el plazo de cuatro días hábiles determinados por la LCT (art. 128 y 149) oportunidad en que el empleador recién estará en mora (CSJT, Olea Ana María Vs. Hachem Mónica, sent. N° 292 de fecha 6/08/09, n° 910 del 02/10/2006 y n° 921 del 15/9/2008 entre otras).

i) Indemnización del art. 80 LCT: Corresponde ser abonado. Al reglamentar el art. 80 de la L.C.T. - conf. 45 de la ley 25345- el art. 3 del dec. 146/01 introdujo un requisito temporario para que el actor efectúe la intimación que no surge de la norma reglamentada, a saber: "el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los aps. 2 y 3 del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744, dentro de los treinta días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo". Por lo que en caso de extinguirse el vínculo laboral -por cualquier causa- el empleador tendrá treinta días para confeccionar y poner a disposición del trabajador la constancia documentada y el certificado al que hace referencia el art. 80 LCT, pasados esos treinta días, el trabajador "estará habilitado" a intimar al empleador por dos días hábiles al cumplimiento de dicha norma. En el caso de autos el actor intimó en fecha 11/12/2013 la indemnización del artículo 80.

j) Indemnización de daños y perjuicios: Si bien no es lo que reclama el actor en su demanda (como tal) sino haciendo referencia específicamente a las asignaciones familiares, determino que corresponde abonar las diferencias de los meses hasta la finalización de la temporada (octubre y noviembre), al haberse extinguido el contrato (11/12/2013) habiéndose extinguido el vínculo laboral una vez iniciada la misma, causándole perjuicio al trabajador, conclusión concordante con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en autos "Villafañe Angel Plácido y Otros Vs. Las Pirguas S.R.L. Y Ot. S/ Cobro de pesos", sentencia n° 545 de fecha 09/08/11). Los artículos 97 y 95 de la LCT otorgan la reparación de derecho común, al trabajador de temporada cuyo despido se produjo durante el curso de la prestación de servicios, y no aquel cuyo despido ocurrió antes de reiniciarse la prestación en un nuevo ciclo. Sostiene Julio Armando Grisolia, con cita jurisprudencia, "para que resulte procedente la reparación de los daños y perjuicios probados o estimados, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 95 y 97 LCT, el despido debe tener lugar durante el lapso de la actividad, si ocurre antes de la iniciación del ciclo o de la efectiva incorporación del trabajador a la explotación, la situación debe ser juzgada conforme a las reglas genéricas referentes a las consecuencias del despido (sala 8ª, 6/2/2002 "Volta, Adrián G. v. MyL Catering Service S.R.L.)

Ante la existencia de un contrato con plazo determinado, el daño a resarcir (cuando no se alegue y/o pruebe uno mayor), debe ser el equivalente a los salarios que restaban percibir al dependiente, ya que dicha percepción no era una mera chance, sino que estaba asegurada por la relación contractual oportunamente acordada (CNAT, Sala III, 10/4/01, "López, Néstor A. c. Eliane S.A.").

Doctrinariamente se ha establecido que una proyección concreta y dura del protectorio procesal, que es la posibilidad otorgada por el artículo 56 de la ley 18.345 y el artículo 63 de la LPTCba. de que la sentencia sea dictada ultra petita, claro, según la última norma, "debiendo ajustarse a las disposiciones legales en vigor". La práctica procesal ha instaurado en las demandas una fórmula abierta, algo así como que se deja supeditada la fijación de los montos definitivos a "lo que en más o en menos resulte de la prueba a incorporarse en autos y el derecho de aplicación al caso". Este pedido deja la posibilidad de regular montos cuando expresamente se los somete a prueba, por ejemplo, la información sobre los salarios vigentes según un convenio colectivo de trabajo.

La habilitación para fallar ultra petita no significa, empero, que la parte omita denunciar rubros que pueden aparecer en la relación de los hechos pero no son explicitados en el petitorio concreto. Por ejemplo, se denuncia la existencia de irregularidades registrales en el marco de una controversia en la que se demandan diferencias salariales e indemnizaciones por despido. Difícilmente, pueden

acogerse los ítems que no se indican expresamente como pedidos porque la parte demandada difícilmente se defiende de lo que no se le pide. Es distinta la cuestión del uso por costumbre judicial de la "planilla anexa" a la demanda que resume las peticiones. Puede que se incluyan aquí rubros no mencionados en el cuerpo de demanda y viceversa. Esa contradicción no impide su acogimiento porque la demandada ha podido conocer y defenderse del reclamo. En caso de que los ítems estén enunciados, poco importan los errores o déficits numéricos porque la pretensión básica está expresada. (libro "Derechos Humanos Laborales", César Arese, pág.643)

k) Asignaciones familiares: Las asignaciones familiares son prestaciones de la seguridad social, de naturaleza no remunerativa, que tienen como finalidad cubrir la contingencia social de carga familiar. En el caso traído a análisis determino que el actor no tiene derecho a percibir las, en tanto este instituto de la seguridad social requiere para su procedencia no solo la acreditación de las cargas de familia mediante las respectivas partidas, sino su presentación ante el empleador en el plazo de noventa días de iniciada la relación laboral lo cual no consta en autos recepción por parte de la patronal de certificado de escolaridad faltando en consecuencia uno de los requisitos para su procedencia.

2.- En orden a la petición de sanción por plus petición inexcusable, que plantea la firma demandada, considero que cabe desestimarla, por cuanto considero que no se encuentra configurada en el caso la situación prevista en el art. 275 LCT. Para establecer si se ha configurado la conducta temeraria y maliciosa a la que alude el art. 275 LCT es necesario proceder con suma prudencia y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al sólo hecho que las acciones y defensas hayan sido finalmente desestimadas, ni siquiera que las pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría coartar las garantías constitucionales de defensa en juicio. En este sentido la jurisprudencia ha señalado que: "La sanción por pluspetición inexcusable no puede ser confundida con una sanción aplicada por vencimiento parcial, ya que sólo se configura cuando existe un comportamiento agravante de la parte, o ésta ha actuado con dolo o culpa grave al reclamar, debiendo actuarse con extrema ponderación y suma prudencia al momento de adoptar sanciones que pueden afectar el principio constitucional de defensa en juicio" (CNAT, Sala VII, 18/6/98, DT 1998-B-1845, citado en Contrato de Trabajo, Carlos Alberto Etala, pág. 81).

3.- Para el cálculo de los rubros por los que prospera la presente demanda, se tomará como base la fecha de ingreso conforme surge del tratamiento de la primera cuestión (15/05/2004) y la remuneración asignada para la categoría "peón general de cosecha" del CCT 12/88, con más los adicionales previstos por el mencionado convenio colectivo aplicable a la actividad, considerando el tiempo de prestación de servicios hasta la fecha del distracto conforme emerge de la segunda cuestión, esto es el 15/06/13.

4.- Los créditos declarados procedentes en este fallo, devengarán el interés mensual, correspondiente a la tasa activa promedio que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos comerciales, el que se calculara hasta el efectivo pago, todo conforme los fundamentos dados por esta Sala en los autos: "Vázquez Herrera Verónica del Valle Vs. AybarArgañaraz Julio César", sentencia del 17/10/14; Juárez Silvia Lucrecia vs. Rodríguez Lidia Rosario", "Plaza Cynthia vs. Hernández José Luís y Ferreira María Rita", entre otros a los que me remito *brevitatiscausae* y que deberán ser considerados como parte integrante de esta Sentencia, y a los fines de mantener incólume su contenido habida cuenta de la situación financiera que se vive en la actualidad y que evidencia un incremento en los índices inflacionarios, surgiendo de los mismos la prueba acabada de la insuficiencia de la tasa pasiva, por lo que tratándose de un crédito alimentario, en el presente caso corresponde adoptar la tasa mencionada desde que los créditos fueron exigibles y hasta su efectivo pago, pretendiendo con ello esta Sala que integro ajustarse a la nueva realidad económica a fin de evitar que el deudor obtenga un enriquecimiento indebido por no

cumplir en tiempo con su obligación y que el acreedor resulte perjudicado con la morosidad del primero, teniendo además presente que las tasas bancarias son sólo tasas de referencia.

PLANILLA DE FALLO

TASA	ACTIVA	BANCO	NACION	DEL	11/12/2013	AL
28/02/2018	108,70%	INGRESO	29/06/2009	EGRESO		
(DISTRACTO)11/12/2013ANTIGÜEDAD3AÑOS(28 MESES)CATEGORIA 1 CCT N° 12/88ULTIMA						
REMUNERACION\$	393,90	MEJOR	REMUNERACIÓN\$	6.109,05	(\$228,12x26	DÍAS +
ANTIGÜEDAD)IMPORTE%INTERESIMPORTE ACTUALIZADOINTEGRACION MES DE DESPIDO\$						
3.869,07	108,70%	\$	4.205,68	\$	8.074,74	ANTIGÜEDAD\$
18.327	108,70%	\$	19.921,62	\$	38.248,78	PREAVISO\$
6.109,05	108,70%	\$	6.640,54	\$	12.749,59	SAC/PREAVISO\$
509,09	108,70%	\$	553,38	\$	1.062,47	DIFERENCIAS SALARIALES\$
33.861,26	REF. ANEXO 1\$	33.861,26	SAC (prop. 2013)\$	2.545,44	108,70%	\$
2.766,89	\$	5.312,33	VACACIONES\$	1.529,98	108,70%	\$
1.663,09	\$	3.193,07	ART.1 25323\$	18.327,16	108,70%	\$
19.921,62	\$	38.249	ART.2 25323\$	14.152,64	108,70%	\$
15.383,92	\$	29.537	ART.80 LCT\$	3.151,20	108,70%	\$
3.425,35	\$	6.577	DAÑOS Y PERJUICIOS\$	12.218,11	108,70%	\$
13.281,08	\$	25.499	TOTAL PLANILLA DE CALCULO\$	202.363,34		

DIFERENCIAS	SALARIALES	(ANEXO1)DEBIÓ
PERCIBIRPERCIBIÓDIFERENCIATASA%INTERESIMPORTE	ACTUALIZADOjul-13\$	6.109,05\$
1.050,40\$	5.058,65	115,50%\$
5.842,74\$	10.901,39	ago-13\$
6.109,05\$	1.050,04\$	5.059,01
113,95%\$	5.764,74\$	10.823,75
sep-13\$	6.109,05\$	393,90\$
5.715,15	112,35%\$	6.420,97\$
12.136,12	TOTAL	18.327,152.494,34
15.832,81	18.028,45	33.861,26

Costas

Atento el resultado de la litis, considero ajustado a derecho imponer las costas al demandado por resultar vencido en la contienda (arts. 49 ley 6.204 y 105 del C.P.C.C. aplic. supl.), al resultar infimo el rubro al que no se le hace lugar al actor (asignaciones familiares).

Honorarios

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el artículo 46 inciso "b" de la ley N° 6.204.

PLANILLA ABOGADOSMONTO POR EL QUE PROSPERA LA DEMANDA\$	202.363,34
1-ABOGADA DRA. FAIAD SILVIA ADRIANA APODERADO DE LA PARTE ACTORA, 3 ETAPAS:16%\$	32.378,13
55%\$	17.807,97
3 ETAPAS\$	50.186,11
2-ABOGADO DR. TABOADA JOSE A. APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA, 3 ETAPAS:8%\$	16.189,07
55%\$	8.903,99
3 ETAPAS\$	25.093,05

Atento al resultado arribado en la litis, la complejidad y naturaleza de la misma, es de aplicación en la especie el art. 50 inc. "a" de la precitada ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto condenado que surge de la planilla precedente y que asciende a la suma de \$ 202.363,34 (pesos doscientos dos mil trescientos sesenta y tres con 34/100)

Por lo expuesto y de conformidad con lo normado por los artículos 15, 39, 40 y concordantes de la ley N° 5.480 y 51 del C.P.T., se regulan los siguientes honorarios:

Letrada Silvana Adriana Faiad por su actuación en el doble carácter por el actor en las tres etapas del proceso de conocimiento el 16 % + 55% la suma de \$50.186,11 (pesos cincuenta mil ciento ochenta y seis con 11/100).

Letrado José A. Taboada por su actuación como apoderado de la firma demandada en las tres etapas del proceso de conocimiento, el 8 %+ 55%, se le regula la suma de \$25.093,05 (pesos veinticinco mil noventa y tres con 02/100).

Por ello se:

R E S U E L V E

I) HACER LUGAR A LA DEMANDA promovida por Nieva Miguel Alberto contra de LA PAZ S.A. domiciliada en calle Vélez Sarsfield N°509 de la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán. En consecuencia se condena a ésta última a pagar al actor la suma total de \$202.363,34 (pesos doscientos dos mil trescientos sesenta y tres con 34/100), conforme se discrimina en la planilla inserta en el fallo en concepto de: indemnización por antigüedad, preaviso, SAC sobre preaviso, diferencias de remuneraciones 2013, SAC proporcional, integración des mes de despido, vacaciones, art 2 de la ley 25.323, art. 80 LCT y daños y perjuicios. Los importes condenados deberán pagarse dentro de los 10 (diez) días de quedar firme la presente sentencia, bajo apercibimiento de ley, conforme a lo considerado.

II) COSTAS, como se consideran.-

III) HONORARIOS, según lo tratado se regulan los siguientes:

Letrada Silvana Adriana Faiad la suma de \$50.186,11 (pesos cincuenta mil ciento ochenta y seis con 11/100)

Letrado José A. Taboada la suma de \$25.093,05 (pesos veinticinco mil noventa y tres con 02/100).

V) PRACTIQUESE y repóngase planilla fiscal en la etapa procesal correspondiente (art. 13 Ley 6.204).-

VI) REGISTRESE y oportunamente archívese.-

VII) COMUNIQUESE a la Caja de Previsión y Seguridad Social para abogados y procuradores de Tucumán.

H A G A S E S A B E R

ANTE MIPP

Actuación firmada en fecha 26/03/2018

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.

Expediente: **398/15**

Carátula: **NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ LA PAZ S.A S/ DESPIDO**

Unidad Judicial: **JUZGADO DEL TRABAJO I C.J.C.**

Tipo Actuación: **LEX**

JUZG. LABORAL IFOLIO

JUICIO:NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ LA PAZ S.A S/ DESPIDO – Expte. N° 398/15

Conciliación y Trámite la. NominaciónCENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN R E G I S T R A D O
Sentencia N°Fecha:28/03/2018

Concepción, 28 de marzo de 2018

AUTOS Y VISTOS:

Estos autos que se encuentran a despacho para resolver, y

CONSIDERANDO:

Que por un involuntario error, en el considerando al tratar la tercera cuestión, de la Sentencia N°55 de fecha 26/03/2018; en el punto 1.e no se hace lugar a la indemnización del art. 1 de la Ley 25.323 y en el punto 1.f corresponden los mismos. Asimismo en la parte resolutive no se menciona la procedencia del art. 1 de Ley 25.323, la cual deviene procedente conforme a la planilla adjuntada al Fallo.

Que haciendo uso de las disposiciones de los arts. 41 y 276 del C.P.C. y C. y 119 del C.P.L. se aclara la sentencia del 26/03/2018, en el considerando y su parte resolutive, en el sentido de hacer lugar a la procedencia del art. 1 de la ley 25.323 y así lo declaró.

Por ello

RESUELVO:

I°) ACLARAR la sentencia de fecha 26/03/2018 en el considerando en cuanto corresponde hacer lugar a la aplicación del artículo 1 de la ley 25.323 y su parte resolutive punto I°) haciendo lugar al mismo, por lo considerado.

HAGASE SABER:

ANTE MÍ.

PPA

Actuación firmada en fecha 28/03/2018

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.

Expediente: 398/15

Carátula: NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ LA PAZ S.A S/ DESPIDO

Unidad Judicial: JUZGADO DEL TRABAJO I C.J.C.

Tipo Actuación: LEX

JUICIO: NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ LA PAZ S.A S/ DESPIDO EXPTE 398/15

VISTOS: En la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, Argentina, a los 19 días de diciembre de 2018, se reúnen en acuerdo los señores Vocales de esta Cámara de Apelaciones del Trabajo, doctores Pedro Patricio Stordeur y Malvina María Seguí para conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en los autos caratulados "NIEVA MIGUEL ALBERTO VS. LA PAZ S.A. S/DESPIDO" - Expte. 398/15. Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de la votación (artículo 113 C.P.L.), dio el siguiente resultado: doctores Pedro Patricio Stordeur y Malvina María Seguí. Integrado el tribunal, y

CONSIDERANDO

El señor vocal Pedro Patricio Stordeur, dijo:

Vienen a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el letrado José Taboada, en representación de la demandada La Paz S.A., en contra la sentencia definitiva N° 55 de fecha 26/03/2018 (fs. 335/348) y su aclaratoria sentencia N° 59 de fecha 28/03/2018 la cual condena al recurrente.

El recurso fue interpuesto a fs. 353 y concedido mediante providencia del 31/05/2018 glosada a fs. 361. La parte demandada expresó agravios a fs. 363/369, los que fueron respondidos por la parte actora a fs. 373/374.

Elevadas las actuaciones a fs. 376, se integra el Tribunal y se llaman los autos para sentencia mediante proveído de fecha 03/10/2018 (fs. 377), el que se encuentra firme, por lo que el recurso de apelación ha quedado en condiciones de ser resuelto.

1-Antecedentes del caso:

Sostiene el actor al demandar que ingresó a prestar servicios como trabajador jornalizado de temporada, para la firma demandada, en sus fincas de Alto Verde y Monte Rico en fecha 29/06/2009 de manera continua e ininterrumpida entre los meses de junio a diciembre de cada año, en la categoría de peón general, realizando tareas de acondicionada y descolada de caña de azúcar, limpieza, plantada y riego de plantas de limón y/o caña de azúcar; manejo tractor interno, etc. Que normalmente laboraba de lunes a sábados (8 horas diarias) pero cuando se regaba caña y limón lo hacía de lunes a lunes, en turnos rotativos de 8 hs. con cinco compañeros. Que se encontraba irregularmente registrado, percibiendo una remuneración inferior a la que le correspondía (ya que al no saber el actor leer ni escribir, la accionada se aprovechó de esa situación para pagarle a veces por tanto, a veces por jornal) y entregándole de vez en cuando recibos pero figurando solo algunos días en el mes, en especial los correspondientes a los últimos trabajados, siendo la última remuneración percibida la suma de \$15 por 100 kgs.; afirma que se vio privado de percibir la asignación familiar correspondiente a sus 5 hijos menores. Que en el año 2013, trabajó durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y en Octubre 4 días, fecha en la que dejan de proveerle tareas, (a pesar que la zafra se extendió hasta el mes de Noviembre y que mantuvo su fuerza a disposición de la razón

social demandada) y que tratándose de un trabajador de temporada, la obligación del empleador era proveerle tareas durante todo el ciclo, comunicarle su finalización y abonarle la liquidación final (lo cual no hizo la demandada). Que esa situación, motivó a que intimara a La Paz S.A., mediante TCL N° 79247254, de fecha 21/11/2013, a que en el plazo de 48 hrs. aclare su situación laboral y le otorgue tareas habituales en horarios y lugar habitual y le abone los salarios caídos, todo bajo apercibimiento en caso de silencio o negativa de considerarse injuriado y despedido por exclusiva culpa de su empleadora. Que ante la falta de respuesta, remite TCL N° 8463945 de fecha 11/12/2013 ratificando todos los términos de su TCL anterior, dándose por despedido ante el silencio de la empleadora. Que asimismo procedió a iniciar trámite mediante denuncia en la SET en fecha 10/02/2014 originando el expediente N° 036/182/N/14, no compareciendo la accionada a ninguna de las audiencias fijadas, ni abonándole la liquidación final y obligándolo a solicitar archivo de las actuaciones para recurrir a la vía judicial. Que la demandada responde mediante CD 237073369 de fecha 04/01/2014, el TCL 84963945 rechazando sus términos, pretensiones y alcances por improcedentes e infundados e indica que el actor trabajó hasta el 31/08/2013, lo que queda desvirtuado con el recibo de haberes Septiembre de 2013. Que nunca recibió la carta documento y ello queda corroborado a través del sistema “Track and Trace” de Correo Argentino, el cual arroja como resultado: “Número inválido de Pieza”. Que responde en su tercer TCL N° CD83125126, en fecha 07/02/2014, en el que ratifica ambos TCL anteriormente enviados en todos sus términos y niega haber recibido CD N° 17213768. Que posteriormente la demandada remite carta documento de fecha 20/02/2014 manteniendo su posición. Que finalmente intima a la accionada a abonar las indemnizaciones de ley y hacer entrega de certificación de servicios bajo apercibimiento de lo prescripto por el art. 80 L.C.T. mediante TCL de fecha 07/10/15. Concluye que, del intercambio epistolar resulta que la ruptura de la relación laboral se produjo por despido indirecto por falta de suministro de trabajo para el accionante y el silencio de la demandada ante los requerimientos e intimaciones realizados, lo que configura injuria y conduce a la consecuente resolución del vínculo laboral, destacando la inequívoca voluntad de prestar servicios por su parte, poniendo a disposición de su ex empleadora su fuerza de trabajo, solicitando la regularización de la debida registración laboral en cuanto al tiempo real trabajado y su remuneración, conforme a la escala salarial vigente. Que amplía demanda, indicando: a) que fue trabajador jornalizado de temporada dedicado a la plantación y cosecha de caña de azúcar y limón desde fecha 29/06/2009, desde junio hasta diciembre inclusive, b) que perdió el derecho a percibir las asignaciones familiares por sus 5 hijos por el fraude laboral en que incurría la demandada al registrarle una cantidad menor a los días efectivamente trabajados (entre 8 y 11 días al mes), reclamando en consecuencia una indemnización por daños y perjuicios, equivalente al monto de las asignaciones familiares que el actor se vio privado de percibir de la seguridad social por defectuosa registración, especificando que mediante decreto 614/13 se fijaron los nuevos importes correspondientes a las asignaciones familiares que paga el ANSES (hijo \$ 460, ayuda escolar anual \$170), debiéndose calcular las diferencias de las remuneraciones que se reclaman en base a las remuneraciones vigentes para el personal de la industria azucarera, comprendidos en el CCT 12/88, multiplicada por los 26 días trabajados en el mes, c) que intimó reiterada y fehacientemente la entrega de certificación de servicios y pago de las indemnizaciones de la LCT, mediante TCL del 21/12/2013, que suspendió automáticamente por un año el curso de la prescripción; y que posteriormente con los TCL del 07/02/2014 y 07/02/2015, se dio cumplimiento con las intimaciones requeridas por los art. 2 de la ley 25.323 y 3 del decreto 146/01; d) que percibió en el último mes liquidado (Septiembre 2013) 3 jornales \$ 39, un escalafón del 10% \$390 y un importe no remunerativo de \$90. Total \$393,90.

La parte accionada, al contestar demanda sostiene que el actor se encontraba correctamente registrado desde el inicio de la relación laboral (29/06/2009) como trabajador de temporada en la actividad azucarera en sus fincas, revistiendo la categoría de peón general (jornalero), desarrollando sus tareas en horarios normales de lunes a viernes y sábados al mediodía, gozando de los

descansos correspondientes, no excediendo en ningún momento las jornadas de las ocho horas diarias y percibiendo las remuneraciones registradas en los recibos de sueldos y documentación de la demandada (los que eran recibidos en forma mensual pero liquidados por jornales efectivamente trabajados, todo ello conforme al convenio azucarero). Niega invocaciones del actor de que haya existido aprovechamiento de su condición de no saber leer ni escribir y que por ello se le pagaba a veces por tanto, y a veces por jornal, y que se le entregaban recibos figurando solo algunos días trabajados. Manifiesta que en la temporada de zafra del año 2013 prestó servicios efectivos a partir de julio hasta el día 31/08/2013 (época de finalización de la misma), indicando que encontrándose en receso por haber terminado la temporada, el actor mediante TCL N° 79247254 de fecha 21/11/2013 intimó a la firma demandada para que le aclare su situación laboral, le otorgue tareas habituales, regularice su registración laboral con inscripción en los libros respectivos; y le abone jornales adeudados por los meses de septiembre, Octubre y Noviembre, SAC, Vacaciones y Diferencias Salariales. Que el mencionado telegrama fue contestado por la patronal mediante carta documento N° 372878048 fechada el día 03/12/2013, por medio de la cual se rechazaron sus términos; que no hubo respuesta respecto a la relación de trabajo habida, siendo que el actor revistaba como trabajador temporario, con ocupación y tareas efectivas durante la zafra azucarera, todo ello de acuerdo a las registraciones obrantes en poder de su mandante e indica que en la zafra 2013 trabajó los meses de Julio y Agosto inclusive, realizando tareas hasta el día el 31/08/13, abonándole las mismas conforme a las escalas salariales vigentes en el convenio colectivo de la actividad azucarera; finalmente rechazó que se le adeude remuneraciones por los meses de setiembre, octubre y noviembre del año 2013, más salarios caídos y diferencias salariales, etc., dado que no efectuó tarea alguna por esos períodos, así también niega que le adeuden salarios familiares por cinco hijos por los cuales no cabe responsabilidad alguna por ese rubro a La Paz S.A. poniendo a disposición del actor la liquidación del 10/09/2013 por finalización de temporada 2013 que incluye vacaciones proporcionales, SAC proporcional, certificación de servicios y remuneraciones. Refiere que, la mencionada carta documento fue enviada al domicilio del actor en Barrio Santa Emilia S/N -Alto Verde, Tucumán, siendo devuelta por Correo Argentino informando “desconocido”, indicando que el domicilio anteriormente señalado es el domicilio del actor que figura en sus telegramas obreros remitidos, resultando el mismo que denuncia en su escrito de inicio de demanda, no habiendo en consecuencia silencio de su parte ante TCL de fecha 21/11/2013 que le permitiera al actor ejercitar la opción del Art. 57 LCT. Que con respecto a las asignaciones familiares, indica que la antigüedad computable del actor dado su carácter de trabajador de temporada es de 10 meses y 9 días (un año) conforme certificación de servicios y remuneraciones y que en cuanto al recibo emitido en el mes de septiembre de 2013 a favor del actor, corresponde al pago de diferencias de haberes por la temporada y/o zafra 2013. Que el actor mediante TCL N°84963945 de fecha 11/12/2013, invocando una falsa causa y armando una situación de hecho inexistente se dio por despedido en forma indirecta alegando silencio por parte de su mandante, pretendiendo rubros indemnizatorios indebidos.

2- A continuación se reseñan los motivos de la apelación interpuesta por la accionada.

El primer agravio expresa que en la sentencia apelada se dispone hacer lugar a la demanda por todos los rubros reclamados, con más indemnización de daños y perjuicios, siendo que este último no fue objeto de reclamo en la demanda. Que para llegar a esta conclusiones el a-quo considera aplicable el principio de relevancia de la prueba, por el cual solo considera aquellas que entiende tengan relevancia para la solución del litigio, señalando que existen elementos suficientes para hacer lugar a la demanda y que le corresponde al actor la indemnización por daños y perjuicios del art. 95 LCT. Que resuelve ultra petita.

Asimismo expresa que, el actor en su demanda reclamó asignaciones familiares. Que al contestar la demanda rechazó su procedencia en razón que el actor no se encontraba legitimado para reclamar y formular ese rubro, no siendo el obligado a su pago.

Reitera que la indemnización de daños y perjuicios que le reconoce la sentencia no fue reclamada por el actor.

Que por el reclamo de un rubro como las asignaciones familiares, no puede derivarse la sustentabilidad de una indemnización por daños y perjuicios del art. 95 LCT, atribuyéndole legitimación para este último rubro

Que respecto del reclamo de asignaciones familiares, la sentencia señala que no tiene derecho a percibir las, pues no se ha acreditado con las partidas de nacimiento o carga de familia ni con los certificados de escolaridad su recepción por su parte en los plazos legales, para generar aquel beneficio.

Pero que no puede admitirse la procedencia de indemnización de daños y perjuicios del art. 95 LCT cuando la parte demandada no ha tenido la oportunidad para defenderse de lo que no se pide.

Que los términos como quedó trabada la litis no generan la expectativa involucrada en los supuestos regulados por los arts. 95, 96 y 97 LCT.

Que no se trata de un tema de planilla anexa donde se incluyen rubros no mencionados en la demanda, sino que se trata de distinta caracterización o fundamento de uno y otro en lo que se refiere a asignaciones familiares y por supuestos daños y perjuicios, por lo que corresponde revocar la sentencia por este rubro infundadamente reconocido.

Asimismo manifiesta que la sentencia reconoce indemnización del art. 80 LCT por la falta de entrega de la Certificación de Servicios y Remuneraciones. Destaca que su parte al contestar demanda adjuntó como documentación integrativa de la misma la Certificación de Servicios del actor.

Que está demostrado con la documentación acompañada por su parte y recibos de sueldo adjuntados al contestar la demanda que el actor trabajó los meses de junio, julio y agosto de 2013, por lo que no cabe reconocerle remuneraciones por periodos no trabajados como son septiembre, octubre y noviembre 2013, por todo lo cual debe revocarse la sentencia apelada.

En el segundo agravio sostiene que la sentencia recurrida señala que hubo una deficiente registración laboral por su parte.

Señala que de las constancias de autos surgen los informes de AFIP de fs. 199/200 y 201, donde expresamente se registra a través de las Altas Tempranas formalizadas con el trabajador, que estuvo debidamente registrado con su fecha de ingreso y categoría de peón general de las actividades que desarrollaba. Que no hubo ocultamiento alguno, ni elusión ni evasión de la relación laboral habida.

Que sin embargo, en la sentencia se lo señala como trabajador deficientemente registrado, para hacerlo encuadrar en el art. 1º Ley 25323.

Que si bien en la sentencia, el Sr. Juez considera la aplicabilidad del principio o juicio de relevancia de la prueba, tal principio no exige que solamente se vea una determinada prueba cuando el plexo arrojado a la causa demuestra lo contrario.

Destaca que, la sentencia pone de relieve, y así se encuentra acreditada las remuneraciones según el CCT aplicable de la actividad azucarera. Ello, al sostener como auténticas tablas salariales adjuntadas por el actor a fs. 40/42 en fotocopias, concluyendo que el actor percibió una suma inferior a la que le correspondía.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88, inc 1) CPL, en oportunidad de contestar la demanda, se formuló la negativa de esa documentación como su autenticidad y oposición de su

parte, y se rechazó y negó la remuneración que manifiesta que debía percibir, por lo que le correspondía al actor acreditar la autenticidad de esas fotocopias, lo cual no ocurrió.

Que también se hace mención del expediente administrativo de la SET que fue agregado a la causa en el periodo de prueba, con lo que habría de corroborar lo sostenido en la demanda, cuando esas actuaciones solo hacen referencia a reclamo administrativo que no ha tenido tramitación ni conclusión administrativa alguna.

Asimismo refiere que en la sentencia recurrida se menciona que el actor trabajaba de lunes a sábados. Afirma que esto no es lo que surge de las constancias de autos. Que de los propios recibos adjuntados por el actor, como los acompañados por su parte al contestar la demanda, surge que al actor se le pagaba sus remuneraciones de acuerdo a los días efectivamente trabajados en función de lo cual se efectuaban sus liquidaciones, como correspondía a un trabajador jornalero. Que no se le pagaba por tanto o a destajo.

Aclara que no es que se trabajaba durante las 25 o 26 jornadas del mes. Que solamente se trabajaba cuando había tareas a realizar, lo cual está reflejado en los recibos acompañados, y de allí no puede seguirse que se encuentre deficientemente registrado. Cita principio de buena fe del art. 63 LCT.

Por otra parte expresa que, también en la demanda se hace mención que el trabajador se le pagaba a veces por tanto y otras veces por jornadas, lo cual no está acreditado con ninguna prueba; que solo son afirmaciones de la demanda.

Manifiesta que en la sentencia se le da relevancia y credibilidad a la prueba testimonial rendida, cuando el Aquo pone de resalto que, para la eficacia de la prueba testimonial, los testigos deben dar detalle preciso y concreto sobre el conocimiento de los hechos discutidos o de lo que exponen. El valor de la prueba testimonial reside precisamente en la circunstancia, modo, tiempo y lugar que los testigos refieren en apoyo de sus versiones por los hechos que dicen conocer y saber, y toda afirmación despojada de una explicación circunstanciada que permita establecer porqué el testigo sabe o conoce respecto de determinados hechos, resulta irrelevante como elemento de comprobación.

Refiere que todo esto señala el Aquo en su sentencia y sin embargo, le da relevancia a esa prueba testimonial, todo lo cual denota una contradicción evidente, pues, por un lado, afirma que los testimonios no son suficientemente claros para tener por acreditado que el actor se encontraba deficientemente registrado, y por otro lado, de un solo testimonio, el vertido por Sánchez Carlos Alberto concluye que el actor trabajaba todas las jornadas laborales del mes, o sea por 25 o 26 días, al cotejarlo a esa declaración con los recibos de haberes. Que esos recibos de haberes demuestran que el actor trabajaba determinados días del mes, que puede haber sido de lunes a sábados cuando había provisión de tareas a realizar.

Que en conclusión, de la prueba rendida en autos no surge acreditada la afirmación dogmática de la sentencia apelada, respecto a la deficiente registración.

En un tercer orden de agravios el recurrente expresa que, en la sentencia recurrida se señala que del informe del Jefe del Correo Oficial obrante a fs. 325, resulta que la pieza postal CD 17213768 AR s inválida, no siendo contestado el telegrama N° CD 404361456 de fecha 21/11/2013 con copia a fs. 191 y fs. 195, mediante el cual el actor intima a la patronal a que le aclare la situación laboral, otorgue tareas habituales, regularice registración laboral, inscriba en libros respectivos y abone meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2013, ante lo cual se destaca el silencio de la patronal.

Afirma que contestó este TCL y señala que, cuando contestó la demanda se adjuntaron las cartas documento que su mandante le cursó al actor en contestación a sus reclamos. Que tales respuestas

corren de fs. 85 a 91, en especial la obrante a fs. 85/86 de fecha 03/12/2013. Que todas estas cartas documento, se deben dar por reconocidas por la parte actora por aplicación de los términos del art. 88, inc. 2) CPL, en que el actor en oportunidad de la audiencia de conciliación del art. 69 CPL que se llevó a cabo el 14/10/2016 corriente a fs. 151, debió haber expresado su reconocimiento o negativa bajo apercibimiento de darlo por reconocido en caso de silencio. Que el actor en dicha oportunidad, nada expresó sobre las referidas cartas documento. Que a ello cabe agregar para corroborar la autenticidad de esas cartas documentos que todas ellas fueron dirigidas, cursadas y diligenciadas al mismo domicilio que el actor registraba en sus propias misivas.

Destaca que en la CD de fecha 04/01/2014 emitida por su parte, que corre a fs. 89 se menciona el nº CD17213768, por una equivocación. Que este número corresponde al formulario del Correo Oficial Argentino según se lo visualiza en la CD obrante a fs. 85, pero el número real de esa CD, la obrante a fs. 85, es CD 372878048 de fecha 03/12/2013 por medio de la cual se rechazaron los términos y alcances de las pretensiones del actor formuladas en su TCL de fecha 21/11/2013.

Que el Aquo resuelve librar como medida para mejor proveer oficio al Correo Oficial de la República Argentina con copia de la CD que rola a fs. 88/89, para que informe si lo indicado en el estado de la pieza correspondiente a la CD del 04/01/2014 como número inválido de pieza es veraz, e informe si dicha Carta Documento fue entregada el destinatario. Que se observa que las copias acompañadas el oficio, una corresponde a la pieza postal del 04/01/2014 de fs. 88, y la otra, sea la segunda copia acompañada con el oficio resulta un documento o instrumento que no se corresponde a la de fs. 89 como ordenada la medida para mejor proveer.

Que lo que se quiere significar es que el TCL del actor 79247254 de fecha 21/11/2013, fue contestado por su partes por la CD de fs. 85 con aviso de recepción de fs. 86, donde claramente se ve en su ángulo superior derecho un número de formulario que es el que equivocadamente se consignó en la CD del 04/01/2014, la que corresponde sea tenida por reconocida y auténtica por la actora en virtud de la aplicación del art. 88, inc. 2) CPL.

Que todo ello demuestra que no hubo silencio del empleador a esa intimación o reclamo del actor, por lo que no corresponde la aplicación del art. 57 LCT.; que tampoco hubo respuesta ambigua o evasiva por lo que no cabe la presunción que contiene esa normativa.

Que la sentencia apelada señala que ese silencio del demandado importa incumplimiento a la carga de explicarse o contestar, generando consecuencias desfavorables para el empleador, una presunción en su contra. Que según los términos de la sentencia apelada, se limita a analizar dogmáticamente los términos de la intimación formulada por el actor mediante el TCL del 21/11/2013, pero ese silencio respecto a esos reclamos no crean una presunción iuris et de iuris, pues se trata de una presunción iuris tantum, susceptible de prueba en contrario.

El cuarto agravio expresa que la sentencia apelada señala que en nuestra provincia la temporada o zafra azucarera se extiende alrededor de cinco o seis meses por año.

Que no está acreditado en autos que el actor hubiera realizado labores desde junio hasta diciembre de cada año, como se concluye en la sentencia y de la cual hace surgir 28 meses trabajados, cuando en realidad según recibos acompañados por ambas partes, resulta una antigüedad computable de 10 meses y 9 días, o sea un año, corroborado por la certificación de servicios y remuneraciones acompañada al contestar demanda la demanda, la que tampoco ha sido rechazada por el actor.

Que los testigos han declarado sobre un hecho que no conocen en absoluto.

Que también se da como acreditado que el actor no sabía leer ni escribir y que en la prueba confesional de fs. 252/254 el absolvente cuando contesta este punto, dice que su respuesta es

contradictoria, el absolvente dijo no conoce si sabe leer o escribir y después dijo no es verdad, firmaba los recibos pero no conoce si sabe leer o escribir; que los testigos tampoco pueden dar mención de esta circunstancia o particularidad del actor.

Que de todas las constancias de autos y pruebas arimadas puede señalarse, sin duda alguna, que el despido indirecto invocado por el actor careció y carece de toda entidad y no existió causa para invocación o reconocimiento en la sentencia.

2.3 A su turno, la parte actora contesta el traslado de la expresión de agravios (fs. 373/374) solicitando el rechazo del recurso intentado y en consecuencia se confirme la sentencia dictada en la causa, con costas.

3- El recurso interpuesto cumple con los requisitos de tiempo y forma exigidos por los artículos 122 y 124 del C.P.L., por lo que corresponde su tratamiento.

En primer lugar cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan sólo aquellas conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Cf., por todos, CS Fallos, 258:304; 262: 222; 263:30; y Santiago Carlos Fassi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado", t. I, Astrea, Bs. As. 1971, pp. 277/278).

Asimismo se debe tener presente que, conforme el artículo 127 del citado digesto ritual, la expresión de agravios hecha por el apelante fija los límites del Tribunal respecto de la causa, ya que ésta no está facultada constitucionalmente para suplir el déficit argumental o las quejas no deducidas. El Tribunal sólo puede conocer en los específicos agravios propuestos al fundar la apelación, estándole vedado el examen de aspectos que han quedado consentidos por las partes por no ser incluidos en el catálogo de las críticas al fallo (conforme art. 717 in fine CPCC; Podetti J. R., Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, "Tratado de los Recursos", p. 152; Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – Explicado y Anotado jurisprudencial y bibliográficamente", T. 6, pp. 421/422).

4. Corresponde abordar el tratamiento y resolución de los agravios esgrimidos por el apelante.

Por razones metodológicas abordaremos en primer lugar el agravio referido al supuesto silencio en el que incurrió el demandado al no contestar el TCL enviado por el actor en fecha 21-11-13, en razón de que el Correo informó que no existía la pieza postal indicada –numéricamente- por el demandado. Por un lado considero que el mero error en la transcripción del numero postal no puede llevar a tener por incontestada aquella misiva. En efecto, se desprende de la copia de CD obrante a fs 85 (no negada en forma categórica y particular por el accionante), que efectivamente la patronal si contestó el mencionado TCL, mediante CD del 3-12-13, que fuera enviado a la misma dirección que consigna el actor en su TCL del 21-11-13 (fs 14). Ahora bien, al mismo tiempo, puede apreciarse que el empleador no cumplió con la carga impuesta por el art 57 LCT, esto es, contestar en un plazo no mayor a 2 días hábiles. En efecto, conforme constancia agregada en autos a fs 15, la demandada recibió la intimación de su empleado el día jueves 28-11-13, teniendo plazo para contestar hasta el día lunes 2-12-13, haciéndolo recién el día 3-12-13.

Así las cosas, si bien el empleador contestó la misiva (aunque no fue entregada según constancia obrante en copia a fs 84), lo hizo en forma extemporánea, lo que habilita la aplicación de la presunción prevista en ese artículo. En consecuencia, lo manifestado por el actor en su TCL del 21-11-13 se presume como cierto, hasta tanto sea desvirtuado mediante prueba en contrario que deberá

producir el demandado.

En ese sentido, el agravio es receptado en cuanto a que considero que es equivocada la aserción contenida en la sentencia en crisis de que la primera misiva del empleado no fue contestada; sin embargo, la presunción del art 57 LCT se activa igualmente, por cuanto la respuesta a aquella misiva fue extemporánea.

En cuanto al agravio referido a que la sentencia en crisis hizo lugar indebidamente al rubro “daños y perjuicios”, no habiendo sido este un reclamo incluido en la demanda, adelanto que considero que asiste razón al apelante. En efecto, la parte actora, tanto en su presentación a fs. 2 como a fs. 47, en ningún momento incluye en su reclamo el mencionado rubro (previsto por el art 95 LCT), sino que peticiona una indemnización por daños y perjuicios que encontraría fundamento en la falta de pago de las asignaciones familiares, rubro que ha sido rechazado en la sentencia de primera instancia (fs 347 vta), quedando firme tal rechazo. Así las cosas, este Tribunal de Alzada no puede abocarse al tratamiento ni de la indemnización “por falta de pago de asignaciones familiares”, ni tampoco a la prevista por el art 95 LCT. En este último caso, abordar tal cuestión implicaría fallar extra petita, lo que está vedado a los magistrados por el principio dispositivo. En consecuencia, se hace lugar al agravio referido.

En cuanto al segundo agravio que se refiere a que la sentencia del Aquo determina que el trabajador se encontraba deficientemente registrado, cabe efectuar las siguientes consideraciones.

-Las partes coinciden en que la relación de trabajo se enmarcaba dentro del contrato de trabajo de temporada.

-El actor señala que trabajaba de lunes a sábados en jornadas de 8 horas, y a veces de lunes a lunes en turnos rotativos.

-A su vez, el demandado señala que el actor era jornalero, por ende, se le abonaba los días efectivamente trabajados. De allí la diferencia de remuneraciones de un mes a otro, y que la antigüedad computada por la patronal difiera sustancialmente de la sostenida por el accionante. Para explicar la remuneración abonada al empleado, el demandado sostiene que se le abonaba porque “solamente se trabajaba cuando había tareas a realizar”.

Advierte este sentenciante que lo que la demandada sostiene es que solamente se le abonaba remuneración al trabajador cuando “había tareas para realizar”, (y en su expresión de agravios, a fs 365, manifiesta que se trabajaba determinados días del mes, “cuando había provisión de tareas a realizar”) lo que implica, en los hechos, supeditar a la voluntad del empleador –o al riesgo empresarial- la dación de trabajo y por ende el pago de la remuneración al trabajador, convirtiendo a éste, en consecuencia, en sujeto que debe soportar las circunstancias o la coyuntura que pueda atravesar el emprendimiento empresarial, lo que claramente colisiona con el principio de ajenidad. De ningún modo puede la empleadora trasladar sus riesgos o sus pérdidas provocadas –o falta de trabajo- por una situación económica adversa al trabajador, por aplicación del principio de ajenidad al riesgo económico que impone el Derecho del Trabajo. En efecto, el trabajador debe permanecer ajeno a la situación empresarial –salvo circunstancias excepcionales, en las cuales intervienen organismos administrativos o judiciales- pues justamente el trabajador ha entregado al empleador, por adelantado, los frutos de su trabajo personal, a cambio de la remuneración. Como contrapartida a tal ajenidad “anticipada”, el trabajador goza del principio de indemnidad, es decir, su remuneración debe ser íntegra y respetada por la patronal, más allá de los vaivenes que esta última atraviese en su economía. Al respecto enseña Montoya Melgar: “La ajenidad en la utilidad del trabajo es característica de la relación laboral: el trabajador acepta su extrañamiento frente a la utilidad patrimonial de su propio trabajo en la medida en que es compensado con un salario”. Además la

jurisprudencia ha sostenido: “...Como es sabido, la asunción de riesgos por parte de quien presta un servicio es definitoria de una actividad por cuenta propia; y, por el contrario, la ajenidad en los riesgos de quien ejecuta una determinada tarea es una nota definitoria de una relación subordinada...” (CNAT Sala II Expte N° 6403/05 Sent. Def. N° 95.719 del 25/4/2008 “Rosiello, Luis Antonio c/Comisión Nacional de Comunicaciones s/despido” (Pirolo – Maza)

Asimismo, el artículo 103 LCT dispone: “A los fines de esta ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital y móvil. El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque este no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel”.

De acuerdo a este artículo, el empleador debe al trabajador su remuneración –respetando los mínimos legales y convencionales- por la sola circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición, y no constituye causal de excepción a dicho principio el hecho de que “no haya tareas”, tal como lo sostiene el accionado.

Hasta aquí, entonces, no solamente opera la presunción del art 57 LCT a favor del trabajador, sino que de la propia argumentación defensiva del accionado surge que no se ha respetado el pago íntegro de la remuneración debida al trabajador, por cuanto el demandado ni siquiera ha invocado –ni mucho menos probado- que el actor no haya puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. En referencia el mentado artículo 103 LCT, la doctrina sostiene: “...Pero también el contrato de trabajo es una relación de cambio trabajo- remuneración, según las prestaciones típicas de las partes, que se prolonga en el tiempo, en la cual el trabajador se asegura un ingreso por la prestación de su trabajo, más allá del alea o riesgo sustancial...”; “... en cambio el trabajador lo hace por una remuneración porque en la generalidad de los casos es un ser necesitado de medios materiales para su subsistencia y la de su familia, como bien lo reconoce el art 6 del PIDESC, “para ganarse la vida...”; “... la prestación del trabajo dependiente constituye el medio de vida de la clase social más numerosa e hiposuficiente, motivo por el cual resulta razonable la protección de su remuneración, dado –además- el carácter alimentario y vital del salario para el trabajador, el que por lo común está destinado a proveer la subsistencia del trabajador y su familia...”: “... la referencia normativa a la “puesta a disposición” del trabajador respecto del empleador se relaciona con los arts 21 LCT (contrato de trabajo) y 197 LCT (jornada) y con el art 510 CC, y quiere decir –como expresa Fernández Madrid- que “ el trabajador tiene voluntad de trabajar y existe un impedimento imputable al empleador para no hacerlo. En ese caso hay mora del acreedor. Si el empleador no da trabajo, no permite al trabajador tomar ocupación efectiva en la categoría contractualmente convenida, debe tener alguna justificación fundada normativamente, por ejemplo arts 220 y 221 LCT. De lo contrario debe abonar los salarios...” (“Régimen de Contrato de Trabajo Comentado”, Miguel Ángel Maza, La Ley, Bs As, 2012, págs. 361/366- 382). Al respecto también Fernández Madrid sostiene: “...El salario desde el punto de vista jurídico laboral es el pago (percepción económica) a que el trabajador tiene derecho con motivo de la prestación de su trabajo o aunque no preste tareas si se pone a disposición del empleador...” (“Tratado Practico de Derecho del Trabajo”, 3 edición, Tomo II, pág. 1328, Fedye, Bs As, 2007), al tiempo que De Diego sostiene que la remuneración es “una contraprestación que se devenga por el transcurso del tiempo en disponibilidad, que es la compensación por haber puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo...” (“La remuneración: concepto, alcances, naturaleza jurídica y diferenciación con otras prestaciones”, en “Remuneración y otros beneficios” (García Vior Andrea), pág. 17, Errepar, Bs As 2011).

Ahora bien, sin perjuicio de que, como se señalara, el demandado no indica cuales han sido las causas por las que “no hubo tareas”, cabe tener presente lo dispuesto por el CCT 12/88 en su artículo 33: “Si por dificultades del terreno el obrero en las tareas de cultivo no pudiera en una jornada legal y

con trabajo normal, obtener el importe del jornal básico establecido para el obrero agrícola, se reajustara el precio unitario fijado para esa tarea, de manera que le permita obtener dicho salario”.

A su vez, el artículo 34 de la ley 26727 (no aplicable al caso de autos, pero es ley análoga), dispone: “Remuneración mínima por rendimiento del trabajo. Salario mínimo garantizado. La remuneración por rendimiento del trabajo se determinará en la medida del trabajo que se haya efectuado, pero en ningún caso podrá ser inferior, para una jornada de labor y a ritmo normal de trabajo, a la remuneración mínima que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario fije para la actividad y para esa unidad de tiempo. En los casos de actividades cuyas remuneraciones no hayan sido fijadas o actualizadas conforme lo previsto en la presente ley, se aplicarán las dispuestas con carácter general. La remuneración mínima sustituirá a la que por aplicación del sistema de rendimiento del trabajo pudiere corresponder cuando el trabajador, estando a disposición del empleador y por razones no imputables al primero, no alcanzare a obtener ese mínimo y aun cuando ello ocurriera a causa de fenómenos meteorológicos que impidieran la realización de las tareas en la forma prevista o habitual.”

Es criterio de este sentenciante, que las antedichas disposiciones, así como las similares de la LCT, relativas al ingreso mínimo a garantizarse en el caso de liquidación por rendimiento de trabajo, no tienen su correlato en una disposición semejante para el trabajo remunerado por tiempo, porque justamente al remunerarse por tiempo el trabajador sabe de antemano cuánto percibirá en esa unidad. Es decir, para la unidad de trabajo remunerado por tiempo no ha considerado el legislador que el trabajador no llegue a los mínimos. Razón que refuerza la interpretación armónica que se ha asignado a las disposiciones pertinentes asignada al presente caso.

En el caso de los salarios fijados por tiempo, el trabajador conoce de antemano y con precisión cuál ha de ser el monto a percibir al finalizar el lapso en que se pactó el pago; en cambio en el pago por rendimiento de labor, la suma a cobrar es imprecisa pues está supeditada a la cantidad de piezas realizadas o vendidas en el tiempo computado. Por esta razón, en estos últimos supuestos, en algunos casos se incluye un salario mínimo garantizado que constituye parte de la remuneración total calculada para el tiempo de trabajo y la que varía es aquella que depende de la cantidad de labor realizada. (Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Mario Ackerman, tomo II, pag. 28, Rubinza Culzoni año 2016). Vale decir que conforme a esta interpretación, si la ley no ha explicitado que para un trabajo por tiempo corresponde un salario mínimo garantizado es porque consideró que no es preciso ello puesto que en dicho caso el salario se halla garantizado al trabajador.

De acuerdo a lo expuesto, y teniendo en cuenta la referida postura defensiva del demandado, queda claro que el agravio debe ser rechazado, y confirmarse la sentencia en cuanto al punto bajo análisis, sin perjuicio de que en esta sentencia se adicionan nuevos argumentos para sostener la postura asumida por la Sra Juez Aquo.

Además de lo expresado, la parte actora, a más de contar con la presunción a su favor del art 57 LCT, produce prueba para acreditar sus dichos acerca de los días trabajados en el mes, mediante la prueba testimonial, que si bien el demandado impugna y pretende quitarle todo valor en su expresión de agravios, la considero si bien no concluyente pero si coadyuvante para llegar a la conclusión que el agravio debe ser desestimado. En tal sentido considero de relevancia el testimonio brindado por el testigo Armando David Rodríguez (fs 225), cuando dice en respuesta 3 “.... Sé que trabajaba para la finca “La Paz” porque desde que estoy en el Barrio en Alto Verde yo realizaba tarea de instalaciones de agua y de gas en Aguilares, Los Ríos y La Cabaña, por lo tanto pasaba en diferentes horarios por el camino aledaño...”, para agregar en su respuesta 4 “... Lo vi al Sr Nieva realizando tareas de cosecha de caña, acondicionamiento, descolado, en el periodo de junio hasta que terminaba la cosecha (...); Lo que porque pasaba para ir al trabajo por ahí en diferentes horarios todos los días...”. Asimismo a fs 227 el testigo Sánchez dijo “... lo sé porque yo trabajo en la finca que le sigue a la finca

“La Paz” más o menos 200 mts después, por eso es que yo lo veía a la mañana, a la tarde trabajando todos los días...”.

Así las cosas, considero que el agravio debe ser rechazado, y que efectivamente, el actor recibía una remuneración inferior a la que le correspondía, por lo que se encontraba deficientemente registrado, pues precisamente los registros del empleador muestran una forma de remuneración diferente a la que correspondía ser abonada, apareciendo el trabajador con un salario muy inferior. A su vez, el hecho de que el trabajador haya guardado silencio en relación a la documentación laboral en la que aparece percibiendo una remuneración menor, no puede ser invocado en su contra, ello por cuanto esta Vocalía entiende que continúa vigente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emanada del Fallo “Padín Capella Jorge c/ Litho Formas”. Al respecto, en el Tratado de Derecho del Trabajo de Mario Ackerman, Tomo I, Página 369, Edición 2005, se señala: “...El otro supuesto se configuraría cuando el empleador implementa por sí solo la mutación contractual, sin requerir la opinión del obrero, y éste guarda silencio y continúa desarrollando el vínculo en las nuevas condiciones.” “...esta situación es evaluada por el máximo tribunal en la causa Padín Capella, Jorge c/ Litho Formas, y lo hace desechándola como forma válida de novación de las condiciones de trabajo. En efecto afirma que pretender la existencia de una novación objetiva con apoyo en el silencio del trabajador conduce a admitir la presunción de renuncia de derechos derivados del contrato de trabajo, en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los artículos 12, 58 y concordantes de la LCT.” Resulta aplicable entonces, a la luz del principio protectorio y de los Tratados Internacionales que consagran el principio de progresividad (Pacto San José de Costa Rica), el artículo 58 LCT, que dispone que en ningún caso se presumirá renuncia de derechos en caso de silencio del empleado, y que los pagos recibidos se consideraran “a cuenta” (art 260 LCT). Tampoco debe soslayarse que el trabajador es “sujeto de tutela preferente” conforme la Declaración Universal de Derechos Humanos, Tratado con rango constitucional (Art 75 inc. 22 Constitución Nacional), lo cual impone al Juzgador apreciar con carácter restrictivo una renuncia de derechos por parte del trabajador, máxime cuando la misma pretende inferirse del silencio y se refiere a un elemento esencial de la relación laboral como es la remuneración.

En cuanto al agravio de que la sentencia en crisis ha tenido por auténticas las tablas salariales de fs 42, considero que la resolución de la cuestión es inoficiosa, por cuanto habiendo las partes identificado –y coincidido- en que el CCT aplicable al caso de autos es el 12/88 –lo cual también resulta corroborado por la descripción de las actividades de la empresa-, ello habilita al magistrado a aplicar el correspondiente convenio con sus escalas salariales correspondientes. Así las cosas, la aplicación del convenio y sus tablas salariales resulta obligatoria en el caso de autos, aun en el caso de no haber existido en la causa las mencionadas tablas, las cuales son meramente indicativas. Con respecto a la aplicación de los convenios colectivos nuestra CSJT sostiene que “Las Convenciones Colectivas de Trabajo no son leyes aplicables de oficio, sino instrumentos normativos emanados de la autonomía privada colectiva que deben ser expresamente invocados ante el juez de grado por quienes intentan valerse de sus disposiciones (CNTrab., Sala VI, abril 29-992.- Centeno Raúl c/Intersec S.A. s/ Despido: SD, 36.843). Tanto el artículo 8 de la LCT como el fallo plenario 104 (DT, 167-28) exigen para la aplicación de las convenciones colectivas de trabajo que las mismas sean individualizadas con precisión (cfrme. CNAT Sala X, sent. del 31/10/1996, DT 1997-A, 1128). En este sentido, se dijo que ‘De acuerdo al art. 8 de la LCT, para que los tribunales puedan aplicar un convenio colectivo las partes han de invocarlo aunque no lo acompañen, ya que el juez carece de atribuciones para utilizar de oficio este tipo de norma, que no se reputa conocida y se circunscribe a una determinada situación’ (CNAT, Sala VI, sent. del 04/02/2000, in re “Díaz Alcaraz, Alejandro vs. Equilab S.A., s/ Despido”, cit. en Grisolia Pedro Armando, Régimen indemnizatorio en el contrato de trabajo, pág. 142)” (CSJT, “Paz, Alfonso Segundo y otros vs. S.A. San Miguel AGIC y F y otro s/ Indemnizaciones”, sentencia Nº 5 del 04/02/2005; Díaz, Orlando José vs. Frem Bestani, Alberto José

s/despido”, sent. n° 468, 21/5/2014).“...Es claro que los jueces no quedan obligados a conocer la existencia ni el contenido de los convenios, pero basta con la invocación e individualización de la norma colectiva para que resulte aplicable en el proceso” (OJEDA, Raúl Horacio –Coordinador–, Ley de Contrato de Trabajo comentada y concordada, Segunda edición actualizada, Tomo I, ps. 109/110, Rubinzal Culzoni Editores). La expresión "debidamente individualizadas" contenida en el art. 8 de la L.C.T. exige que la convención sea identificada en juicio por su número de registración o de un modo claro que resulte inequívoco "pues los jueces no pueden, por la regla de la congruencia judicial y el respeto del derecho de defensa, verse en el brete de tener que determinar la aplicación al caso de un convenio colectivo distinto a aquel o aquellos que las partes plantearon en la causa, ya que en este plano no rige la regla iura novit curia (el tribunal conoce el derecho). Si la convención es debidamente individualizada, no se requiere probar su existencia y texto" (cfr. Ob. y tomo citados, p. 23).

También sostiene el apelante que no ha quedado demostrado que el actor haya laborado de junio a diciembre –es decir, durante la temporada correspondiente a la actividad-. Sin perjuicio de que era el demandado quien debía probar que tal hecho no ocurrió –por aplicación del art 57 LCT-, lo cierto es que en el trabajo de temporada el periodo de labores lo determina justamente la naturaleza de la actividad, y no la mera voluntad del empleador. Si el actor no trabajó durante la temporada completa, también pesaba sobre el demandado la prueba y justificación de tal hecho. Al respecto: “... En cuanto a la duración del lapso de trabajo efectivo, cabe tener en cuenta que este variara según las necesidades de la empresa o explotación, las cuales no estarán impuestas por la voluntad de las partes, con esto queremos decir que no podrá fijar el empleador arbitrariamente el inicio y la finalización de la temporada sino que dependerá exclusivamente de la naturaleza de la actividad...” (“Ley de Contrato de Trabajo”, Miguel Ángel Maza, Ed La Ley, 2008, págs. 178/9). A esto se suma el hecho de que, como ya se estableciera supra, el empleador ni siquiera invocó –ni mucho menos probó- que el trabajador no haya puesto a disposición su fuerza de trabajo durante la temporada de trabajo.

En cuanto al agravio referido a la procedencia de la multa prevista por el art 80 LCT, debemos considerar que conforme surge de TCL en copia a fs 17, el día 11-12-13 el actor extingue el vínculo laboral, y reclama la entrega de certificación de servicios. Posteriormente, con fecha 7-10-15, el actor reitera la intimación (ver TCL fs 23). Por su lado, el demandado en su expresión de agravios reconoce haber adjuntado la documentación solicitada recién al contestar demanda, que fuera proveída el día 31 de mayo de 2016.

Conforme lo prescripto por este artículo (80), modificado por la ley 25.345, resuelto el vínculo laboral por cualquier causa, nace la obligación en cabeza del empleador de hacer entrega al trabajador de los certificados exigidos por los párrafos segundo y tercero del citado artículo. Si el empleador no lo hiciera dentro de los dos días hábiles computados a partir de la recepción del requerimiento fehaciente que a tal efecto le formulare el trabajador, será sancionado con la multa equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si este fuere menor. Por su parte el artículo 3 del decreto reglamentario N° 146/01 establece que: “El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. por Decreto N° 390/76) y sus modificatorias, dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo.” Puede observarse en consecuencia como el actor intima a la empleadora a la entrega del certificado de servicios y remuneraciones habiendo pasado con holgura el plazo legal que tenía el empleador para hacerlo, y el actor cumple con la intimación por dos días hábiles. La entrega de los certificados, así, con la contestación de la demanda, es extemporánea, vencidos ya los plazos para hacerlo, por lo que la multa es procedente y el agravio debe ser

rechazado.

No escapa a esta Vocalía que el demandado al contestar demanda, sostuvo que no era procedente la multa pues se había notificado al actor mediante CD que los certificados se encontraban a disposición. En ese sentido, observamos que en la CD del 23-10-15, el demandado sostiene que los certificados estarán a disposición en el plazo de ley, pero con esta misiva estaba contestando la intimación cursada por el actor en fecha 6-10-15, es decir, agotado el plazo de 2 días hábiles que tenía para la entrega pertinente de la certificación. Nótese que no indica que estuvieren a disposición (aun así, sería extemporánea la respuesta). Y, aun en el caso de que la demandada hubiere contestado en término poniendo a disposición los certificados, si el actor no se presentaba a retirarlos, debía la patronal probar tal circunstancia, y recurrir a la consignación de la mencionada documentación. En tal escenario, correspondía al empleador procurar los medios para la efectiva recepción de la misma, y si el actor no se presentaba a retirarlos, debía haberla consignado ante autoridad administrativa o judicial (en el mismo sentido: "...La entrega de los certificados de trabajo (art. 80 de la LCT) al dependiente en oportunidad de la extinción de la relación laboral es una obligación del empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación, esto es en el tiempo que razonablemente puede demorar su confección. Y tal obligación no depende de que el propio trabajador se apersona en la sede de la empresa, toda vez que si ello no ocurre, el empleador, previa intimación, puede consignarlos judicialmente..." (CNAT, Sala III, Expte. nº 7058/01, sentencia nº 83170, 11/2/02 – Fraza, María vs. Storto, Silvia y Otro s/ despido. "...En otros términos, no basta que la empleadora argumente que los certificados estuvieron a disposición del actor, sino que es necesario que arbitre los medios para que, ante la falta de retiro de los mismos por parte del actor, aquélla cumpla con su obligación consignándolos judicialmente..." – CNAT, Sala IX, Expte. nº 27135/02, sentencia nº 11597, 25/6/04, - Cejas, Edgardo vs. CM Administradora SRL s/ despido).

Por todo lo expuesto, propongo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por la parte demandada únicamente en cuanto al agravio referido a la admisión del rubro "daños y perjuicios". Así voto.

Atento lo resuelto, deberá efectuarse nueva planilla, en la cual se excluya el mencionado rubro.

Planilla

Datos

*Ley de Contrato de Trabajo

Planilla de fs. 347

Rubros que progresan al 28/02/2018Importe

- 1 - Integración mes de despido \$ 8.074,74
- 2 - Indemnización por antigüedad \$ 38.248,78
- 3 - Indemnización sustitutiva de preaviso \$ 12.749,59
- 4 - SAC s/preaviso \$ 1.062,47
- 5 - Diferencias salariales \$ 33.861,26
- 6 - SAC proporcional \$ 5.312,33
- 7 - Vacaciones \$ 3.193,07

8 - Art 1 Ley 25323 \$ 38.249,00

9 - Art 2 Ley 25323 \$ 29.537,00

10 - Art 80 LCT \$ 6.577,00

Total de la planilla al 28/02/2018 \$176.865,24

Honorarios de primera instancia: habiéndose modificado el monto de condena, corresponde adecuar los honorarios de los letrados intervinientes, tomándose como base regulatoria el nuevo monto de condena, y manteniéndose la imposición de costas (atento que la demanda progresa casi en su totalidad), y las alícuotas fijadas a los letrados.

Letrada Silvia Adriana Faiad, por su actuación en doble carácter durante las tres etapas como apoderada parte actora, el 16% más el 55%, la suma de \$43.862,58 (pesos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y dos con cincuenta y ocho centavos).

Letrado José A. Taboada, por su actuación en el doble carácter durante las tres etapas como apoderada parte demandada, el 8% más el 55%, la suma de \$ 21.931,29 (pesos veintiún mil novecientos treinta y uno con veintinueve centavos).

Costas segunda instancia

Atento el resultado del recurso intentado, que ha progresado parcialmente, estimo justo imponer las costas del mismo en un 80% a la parte demandada, y en un 20% a la parte actora.

Honorarios segunda instancia

Conforme art 46 inc 2 CPL, corresponde regular los honorarios generados en esta instancia.

Letrada Silvia Adriana Faiad, el 30% de los honorarios fijados por su actuación en primera instancia, la suma de \$ 13.158,77 (pesos trece mil ciento cincuenta y ocho con setenta y siete centavos).

Letrado Jose A Taboada, el 25% de los honorarios fijados por su actuación en primera instancia, la suma de \$ 5.482,82 (pesos cinco mil cuatrocientos ochenta y dos con ochenta y dos centavos).

La SRA VOCAL MALVINA MARIA SEGUI, dijo:

Que estando de acuerdo con los fundamentos del voto del Sr. Vocal Preopinante, voto en el mismo sentido.

Por los fundamentos expuestos, se

RESUELVE:

I-HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto a fs 353 por el demandado “La Paz SA”, por lo considerado. En consecuencia se revoca parcialmente la sentencia 55 del 26-3-2018 dictada por el Juzgado del Trabajo Nro 1, dictándose en sustitutiva lo siguiente: I- HACER LUGAR PARCIALMENTE A LA DEMANDA promovida por Miguel Alberto Nieva, de las condiciones personales que obran en autos, en contra de “La Paz SA”, y se condena a esta última a pagar al actor la suma total de \$ 176.865,24 (pesos ciento setenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco con

veinticuatro centavos) conforme planilla inserta en el fallo, en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, Sac sobre preaviso, diferencias de remuneraciones 2013, Sac proporcional, integración mes de despido, vacaciones, arts 1 y 2 ley 25323 y art 80 LCT. Se absuelve al demandado del rubro “daños y perjuicios”, sustituyéndose la planilla de fallo de la sentencia N° 55 de fecha 26-3-18. II) COSTAS, como se consideran. III) HONORARIOS, según lo tratado se regulan los siguientes: Letrada Silvia Adriana Faiad, la suma de \$43.862,58 (pesos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y dos con cincuenta y ocho centavos). Letrado Jose A Taboada, la suma de \$ 21.931,29 (pesos veintiún mil novecientos treinta y uno con veintinueve centavos).

II-COSTAS de segunda instancia, conforme lo considerado.

III: REGULAR HONORARIOS de segunda instancia:

Letrada Silvia Adriana Faiad, la suma de \$ 13.158,77 (pesos trece mil ciento cincuenta y ocho con setenta y siete centavos).

Letrado José A Taboada, la suma de \$ 5.482,82 (pesos cinco mil cuatrocientos ochenta y dos con ochenta y dos centavos).

HAGASE SABER

PEDRO PATRICIO STORDEUR MALVINA MARIA SEGUI

.- ETI

Actuación firmada en fecha 19/12/2018

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.

Expediente: **398/15-I4**
Carátula: **NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ LA PAZ S.A S/ DESPIDO**
Unidad Judicial: **JUZGADO DEL TRABAJO I C.J.C.**
Tipo Actuación: **DECRETOS**

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN

Juzgado del Trabajo I C.J.C.

ACTUACIONES N°: 398/15-I4



H20901433269

VLE

JUICIO:NIEVA MIGUEL ALBERTO c/ LA PAZ S.A s/ DESPIDOEXPT:398/15-I4.-

CONCEPCION,29 de junio de 2022

Agréguese los instrumentos acompañados. Téngase presente. En análisis del presente, surge que se pretende introducir en la litis a personas que hasta ahora no tomaron parte en la misma, y por lo cual ante estas actuaciones revisten el carácter de terceros. Al respecto, el Art. 90 del C.P.C. y C. de aplicación supletoria al fuero, es claro en cuanto a la oportunidad para citar a terceros, que es con la demanda o con la contestación de la misma, si lo piden las partes, mientras que el art. 93 C.P.C. y C. otorga la facultad al juez, siendo el momento hasta la apertura a prueba.

En autos, como lo reconoce el propio incidentista, ya se ha dictado sentencia, por lo cual, la oportunidad para citar terceros ha precluido, razón por la cual el pedido de la parte actora debe ser rechazado por extemporáneo. Como consecuencia: Devuélvase el escrito de fecha 01-06-2022 al presentante. Atento la modalidad del SAE, procédase por Secretaría a reservar el mencionado escrito a fin de que no sea tenido en cuenta. Personal.-

Actuación firmada en fecha 30/06/2022

Certificado digital:
CN=ROBLEDO Guillermo Alfonso, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20142264286

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.

Expediente: **398/15-I4**
Carátula: **NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ LA PAZ S.A S/ DESPIDO**
Unidad Judicial: **JUZGADO DEL TRABAJO I C.J.C.**
Tipo Actuación: **DECRETOS**

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN

Juzgado del Trabajo I C.J.C.

ACTUACIONES N°: 398/15-I4



H20901438477

VLE

JUICIO:NIEVA MIGUEL ALBERTO c/ LA PAZ S.A s/ DESPIDOEXPT:398/15-I4.-

CONCEPCION, 06 de julio de 2022

A lo solicitado por la letrada Silvia Adriana Faiad: 1) A la revocatoria planteada, encontrándose en un todo ajustado a derecho, no ha lugar. 2) A la apelación, no ha lugar atento lo normado por el Art. 151 del C.P.L. A la oficina.-

Actuación firmada en fecha 06/07/2022

Certificado digital:
CN=ROBLEDO Guillermo Alfonso, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20142264286

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.

INICIO TERCERIA DE DOMINIO.

Sr. JUEZ DEL TRABAJO DE TURNO.

**JUICIO: ARBOL SOLO S.R.L. C/ NIEVA MIGUEL ALBERTO, FAIAD
SILVIA ADRIANA Y LA PAZ S.A. S/ TERCERIA DE DOMINIO.**

IGNACIO JOSE SILVETTI, abogado, con domicilio en calle Gral. Paz 576, piso 8, oficinas 1 y 2, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, constituyendo domicilio digital en CUIT 20284766521, me apersono ante V.S. y respetuosamente digo:

1) Personería.

Como lo acredito con copia de escritura pública que adjunto, soy apoderado general para juicios de ARBOL SOLO S.R.L., cuyas demás condiciones personales surgen del instrumento referenciado, el cual declaro se encuentra vigente y es copia fiel de su original.

En el carácter invocado comparezco ante V.S y solicito se me de intervención de ley.

II) Objeto.-

Cumpliendo instrucciones impartidas por mi mandante, vengo a iniciar tercería de dominio en los términos del art. 94 CPCC en contra de **MIGUEL ALBERTO NIEVA**, DNI 17.537.072, con domicilio Barrio Santa Emilia s/n, localidad de Alto Verde; de **LA PAZ S.A.**, con domicilio legal en calle Velez Sarsfield 509, de la ciudad de Aguilares (ambos sujetos pasivos según el art. 95 CPCC) y de la Dra. **SILVIA ADRIA FAIAD, M.P. C.A.S. 170**, con domicilio en calle Italia 1397, de la ciudad de Concepción, la legitimación pasiva de la Dra. Faiad deriva de las sentencias de fechas 26/06/2019 y 01/10/2019 en donde la designación de los bienes y la traba del embargo se dispusieron “*bajo la absoluta responsabilidad de la Dra. Silvia Faiad*”, quién además prestó personalmente la caución juratoria por las resultas de la medida que solicitaba.

Con fundamento en las cuestiones de hecho y de derecho que a continuación expondré vengo a solicitar a V.S. que ordene el levantamiento del embargo dispuesto por sentencia de fecha 01/10/2019, llevado a cabo del día 27/12/2019.

III) Conexidad.-

Denuncio que la cuestión planteada tiene relación e incide en lo que pueda resolverse en los autos caratulados **“NIEVA MIGUEL ALBERTO C/LA PAZ S.A. S/ DESPIDO. EXPTE 398/15”** y su incidente promovido por el Sr. Miguel Alberto Nieva, , Expte 398/15-II que tramitan ante el Juzgado del Trabajo de la Primera Nominación del Centro Judicial de Concepción.

Sin embargo, y a pesar de la conexidad denunciada, no debe procederse a la remisión de esta tercería atento a que aquel magistrado ya se ha expedido sobre el asunto al rechazar nuestro pedido de levantamiento de embargo sin tercería mediante la sentencia de fecha 12/08/2020 y en su ampliación de fecha 19/08/2020 que en copia simple acompaño.

En la sentencia denegatoria el Juez de la Primera Nominación interpretó que mi mandante no logró acreditar la posesión de los bienes muebles ni la identidad de los bienes embargados con los bienes cuya documentación se acompañaba, a pesar de haber acompañado las escrituras de dominio del inmueble donde fueron embargados, que el Sr. Juez de Paz consignó que en el inmueble se encontraba Árbol Solo S.R.L. (lo que acredita posesión del inmueble), que se acompañó las facturas de compra de los bienes embargados y de lo dispuesto por el art. 1985 Cód. Civil y Comercial.

IV) Fundamentos de la Tercería.-

Tal como surge de la copia certificada de la escritura traslativa de dominio n° 99 ARBOL SOLO S.R.L. es legítimo propietario y poseedor de los inmuebles matriculas Z-5686 y Z-5685 ubicados en Monte Rico, Dpto. Chicligasta, que en conjunto V.S. ha denominado Finca Monte Rico Alto Verde y en donde ordenó se trabe el embargo de bienes muebles que sean propiedad del demandado, según surge de la sentencia de fecha 01/10/2019.

En efecto, el 17/03/2003 ARBOL SOLO SRL. celebró un contrato de compraventa con la demanda La Paz S.A. por el cual se transfería la propiedad de los mencionados inmuebles.

Ahora bien, mi mandante ha tomado conocimiento de una medida de embargo que se habría dictado en estos autos sobre bienes muebles de propiedad del demandado que aparentemente se encontrarían depositados en la denominada “Finca Monte Rico Alto Verde” y que comprende a los inmuebles adquiridos por mi mandante. Esta medida de embargo efectivamente se llevó a cabo el día 27/12/2019 sobre una cisterna de agua de 4.000 Lts. con tanque de acero inoxidable, mangueras

y bomba montado sobre un chasis de dos ejes de color verde, un tractor marca Fiat de color naranja, una máquina fumigadora de un eje y dos ruedas, con tanques de 400 Lts. cada uno con sus respectivas bombas, un tanque de acero de 1.500 Lts de capacidad y dos ruedas, una podadora y máquina abonadora marca AUDI con dos tanques color amarillos montados sobre dos ruedas y un carro volquete sobre un eje de cuatro ruedas.

En efecto, todos los bienes muebles que se encuentran en la finca son de exclusiva propiedad de Árbol Solo S.R.L.. En este caso, cabe aplicar los alcances del Art. 1895 del Código Civil y Comercial que establece que la posesión de buena fe de bienes muebles es suficiente para adquirir el dominio sobre ellos. Cualquier prueba en contrario debe recaer sobre la parte sobre el Sr. Nieva, la Dra. Faiad y La Paz S.A.

Sin perjuicio de esta disposición legal y como prueba de la propiedad de los bienes muebles embargados se acompañan las facturas de fechas 10/09/2003 y 19/12/2003 que acreditan la compra de los bienes realizada por ARBOL SOLO S.R.L. a Agrícola Ruivel S.R.L.

Vale recordar que la inscripción registral de estos bienes no es necesaria (y por lo tanto no es constitutiva de derechos ni hace a la oponibilidad a terceros) de acuerdo a lo dispuestos por las Disposición 1255/99 (modificado por la Disposición 285/2002) de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.

Por tal motivo, se solicitó el levantamiento de embargo sin tercería, en los términos del art. 99 del CPCC para que se ordene el levantamiento del embargo, y se abstenga de practicar cualquier medida de secuestro sobre los bienes muebles que se encuentran en el inmueble, y que son de exclusiva propiedad de ARBOL SOLO SRL., pedido que fue errónea y arbitrariamente rechazado por la Sra. Juez de la Primera Nominación por sentencia de fecha 12/08/2020.

En el presente caso, corresponde citar el fallo dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Sala A el 8/3/1991 en autos "Dirección Nacional de Recaudación Previsional c. Restaurant Don Angelo S.R.L.", según el cual "Probada la posesión de los bienes muebles embargados corresponde hacer lugar al levantamiento sin tercería si el incidentista tiene a su favor la presunción de propiedad sobre ellos, a tenor del art. 2412 del Cod. Civil".

IV.1. La sentencia que rechazó el levantamiento de embargo errónea y arbitraria.

A continuación, desvirtuaremos los argumentos utilizados por la sentencia de fecha 12/08/2020 para rechazar el levantamiento del embargo.

En esta sentencia se ha argumentado que:

“Ahora bien, al tratarse de bienes no registrables, la prueba requerida se reduce a la acreditación de la posesión, pues la misma -siempre que sea de buena fe-, es suficiente para presumir la propiedad de la cosa (art. 1895 C.C.C.N.), la posesión de buena fe de una cosa mueble crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella. Se establece no sólo una presunción irrefragable de propiedad a favor del poseedor de cosas muebles, sino también de la legitimidad de ella y de la buena fe de quien posee, extremos que se presumen iuris tantum y pueden ser objeto de prueba en contrario (Salas - Trigo Represas, López Mesa, Código Civil Anotado, T. 4 B, pág. 21).

En este caso, el tercero intenta demostrar por un lado la propiedad sobre los bienes embargados a través de las facturas de compra (las que fueron descriptas ut supra, y se encuentran agregadas en copias en la presente incidencia), sin embargo, el detalle en su descripción no llega a ser suficiente para establecer con certeza que las cosas embargadas son, efectivamente, aquellas a las que refieren estos documentos.

Por otro lado, sería suficiente que el tercero demuestre que al momento de la traba del embargo se encontraba en posesión de los bienes, con este fin es que este se vale de la escritura descripta anteriormente. No obstante, cabe destacar que, tal como lo describe la Dra. Faiad ha quedado establecido en la sentencia de fondo, que la demandada LA PAZ S.A. explotaba esas fincas cuando el actor trabajó en las mismas entre 2009 a 2013, es decir con posterioridad a las supuestas adquisiciones de los bienes inmuebles y muebles, por lo que, de ninguna manera ARBOL SOLO S.R.L. está acreditando que se encontraba en posesión de esas fincas y de los bienes muebles embargados al momento de la traba del embargo. Con este razonamiento, la letrada arroja sombras sobre el argumento del tercero, pues este solo conseguiría probar la propiedad sobre el inmueble, no así su efectiva posesión.

De las constancias de autos, y del estudio de la documentación presentada en la presente incidencia, es dable concluir que, en este caso particular, no es posible afirmar con la seguridad necesaria para ordenar el levantamiento del embargo que le asista razón al tercero ÁRBOL SOLO S.R.L., requiriendo la cuestión un análisis más extenso que el contemplado por el art. 99 del C.P.C.C invocado por el letrado Silveti. Por lo que corresponde no hacer lugar al levantamiento de embargo sin tercería solicitado, debiendo ocurrir por la vía y forma que corresponda”.

En primer lugar, debemos decir que la posesión del inmueble en donde se realizó la medida de embargo se acreditaba con las propias constancias del juicio principal y del incidente. En efecto, en el juicio se ha reconocido que el actor prestaba servicios en fincas de terceros. Lo que no implica que con su servicio encomendado por un tercero el propietario de esos inmuebles perdiera la posesión de ellos.

Aún en el caso de la firma de un contrato de arriendo a favor de La Paz S.A., ello no le da la posesión sino la mera tenencia del inmueble. Estos errores conceptuales de derecho, y que derivan en el rechazo del levantamiento del embargo, tornan arbitraria la sentencia.

Peor aún invocar una prestación de servicios en inmueble ajeno desde el año 2009 al 2013, no puede hacer nacer la presunción de la existencia de una posesión vigente siete años después por parte de La Paz S.A.. El actor debía probar que la finca continuaba en posesión (no en tenencia) de su antiguo empleador, más aún cuando tenía la posibilidad de dirigir su embargo en el domicilio legal de la sociedad empleadora. Nada de esto sucedió.

Las “sombras” que arrojara la Dra. Faiad tampoco pueden ser causal de rechazo del levantamiento, más cuando la letrada era personalmente responsable de embargar bienes de propiedad de La Paz S.A. La Dra. Faiad jamás acreditó imposibilidad de realizar la medida en el domicilio social de La Paz S.A. ni que los bienes embargados sean propiedad de la empleadora y mucho menos que ésta estuviese en posesión (y no en tenencia) del inmueble en donde se encontraron los bienes muebles embargados.

Es increíble que debamos recordar que mi mandante es un tercero ajeno al juicio donde se ordenó el embargo y que, tanto esa sentencia como la de fondo, le resultan inoponibles. En consecuencia, el criterio restrictivo en la interpretación de la prueba debe recaer sobre quien ha solicitado el embargo en un domicilio que no le pertenece a ninguna de las partes del proceso.

La reversión de la carga de la prueba y de las presunciones viola lo dispuesto por el art. 2.414 Cód. Civil y Comercial “*La presunción de propiedad no puede ser invocada por la persona que se encuentre en virtud de un contrato o de un acto lícito o ilícito obligada a la restitución de la cosa*”. Es decir que, si La Paz S.A. no podía invocar la posesión del inmueble, tampoco podía hacerlo el Sr. Nieva, la Dra. Faiad ni la Sra. Juez. Mucho menos después de que tuvieron conocimiento previo de que el inmueble no le pertenecía a La Paz S.A. (informe del Sr. Juez de Paz de Alpachiri de fecha 17/10/2019).

La sentencia también se excede en cuanto a la prueba requerida para acreditar la titularidad de los bienes. El art. 99 CPCC sólo requiere la presentación de los títulos, requisito que se cumplió acompañando las facturas de compra.

En el expediente laboral no se ha probado que La Paz haya sido la propietaria del inmueble en el que se realizó la medida y se ha reconocido y probado que el Sr. Nieva prestaba servicios en fincas de terceros. En consecuencia, no se puede presumir que La Paz S.A. hubiese tenido la posesión de la finca y que ésta se conservase luego de siete años.

IV.2. Prueba del dominio y posesión del inmueble.

Como ya dijimos, el día 17/03/2003, mediante escritura traslativa de dominio n° 99 ARBOL SOLO S.R.L. adquirió la propiedad y posesión de los inmuebles matriculas Z-5686 y Z-5685 ubicados en Monte Rico, Dpto. Chicligasta, que en conjunto V.S. se ha denominado Finca Monte Rico Alto Verde y en donde ordenó se trabase el embargo de bienes muebles que sean propiedad del demandado, según surge de la sentencia de fecha 01/10/2019.

En ejercicio del derecho de propiedad y en una clara muestra de la posesión del inmueble, Árbol Sólo SRL arrendó la finca a La Paz S.A. mediante contrato de arriendo de fecha 16/04/2007. Contrato que finalizó el día 30/09/2016.

Este contrato es un claro acto de posesión y por él sólo se transfería a La Paz S.A. la tenencia del inmueble. Y, en esto debemos ser claros, se transfiere sólo la tenencia del inmueble ya que el así se desprende de la definición del derecho de tenencia realizada por el art. 1910 del Cód. Civil y Comercial y por la definición de la posesión a través de tercero del art. 1909 del mismo Código.

Por lo tanto, La Paz S.A. jamás puede considerarse legalmente un poseedor del inmueble y mucho menos que de los muebles que existan allí. Tampoco puede considerarse que por la celebración de este contrato de arriendo Árbol Solo SRL hubiese perdido la posesión ya que ello contraría lo dispuesto por los arts. 1929 y 1930 del Cód. Civil y Comercial.

De todas maneras, el contrato de arriendo sobre la Finca Monte Rico Alto Verde terminó el día 30/09/2016, procediéndose a la restitución del inmueble.

Como propietaria y poseedora del inmueble, en fecha 12/12/2016, celebró con S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. un contrato de compraventa de la fruta producida en la Finca Monte Rico Alto Verde. El plazo de este contrato es hasta el 31/12/2021. Esto demuestra que, a la fecha en que se llevó a cabo la medida de embargo, la Finca se encontraba en posesión de Árbol Sólo SRL.

IV.3.- Prueba del dominio y la posesión de los bienes muebles embargados.

La inscripción registral de los bienes embargados no es necesaria (y por lo tanto no es constitutiva de derechos ni hace a la oponibilidad a terceros) de acuerdo a lo dispuestos por las Disposición 1255/99 (modificado por la Disposición 285/2002) de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.

Como prueba de la propiedad de los bienes muebles embargados se acompañan las facturas de fechas 10/09/2003 y 19/12/2003 que acreditan la compra de los bienes realizada por ARBOL SOLO S.R.L. a Agrícola Ruivel S.R.L.

Por aplicación de lo dispuesto por el art. 1145 del Cód. Civil y Comercial la factura de compra es el título de propiedad de las cosas muebles y es la prueba formal de su existencia (art. 1020 Cód. Civil y Comercial). Las facturas acompañadas son los títulos de propiedad que exige el art. 99 CPCC.

Por su parte, según el art. 1903 del Cód. Civil y Comercial, se presume que la posesión inicia en la fecha del justo título.

De la misma manera, el art. 1914 del Cód. Civil y Comercial dispone que *“Si media título se presume que la relación de poder comienza desde la fecha del título y tiene la extensión que en él se indica”*.

Es decir que, por ambas disposiciones legales, la posesión de los bienes por parte de Árbol Solo SRL se presume que inició en las fechas de las facturas. Es decir que la posesión inició con anterioridad a la relación laboral entre el Sr. Nieva y La Paz S.A.

Por último, esta posesión de los bienes se presume legítima y de buena fe y que es continua desde su adquisición (arts. 1916, 1919 y 1930 del Cód. Civil y Comercial). En consecuencia, para mantener la medida cautelar los ahora demandados deberán producir la prueba en contrario tanto del inicio de la posesión como de su ilegitimidad, su calidad de mala fe y de su interrupción o pérdida.

IV.4. Imposibilidad de presumir la posesión por parte de La Paz S.A.

Como ya dijimos, La Paz S.A. fue arrendataria de la Finca Monte Rico Alto Verde.

Según el art. 2.414 Cód. Civil y Comercial “*La presunción de propiedad no puede ser invocada por la persona que se encuentre en virtud de un contrato o de un acto lícito o ilícito obligada a la restitución de la cosa*”. Es decir que, si La Paz S.A. no podía invocar la posesión del inmueble, tampoco podía hacerlo el Sr. Nieva, la Dra. Faiad ni la Sra. Juez. Mucho menos después de que tuvieron conocimiento previo de que el inmueble no le pertenecía a La Paz S.A. (informe del Sr. Juez de Paz de Alpachiri de fecha 17/10/2019).

Entonces, si La Paz S.A. no era poseedora ni podía presumirse la propiedad del inmueble, tampoco hay razón legal que permita presumir que era propietaria de los bienes muebles ubicados dentro del inmueble.

Toda prueba en contrario recae sobre la parte que solicitó la medida.

IV.5.- Miguel Alberto Nieva y la Dra. Silvia Adriana Faiad conocían la situación del inmueble donde solicitaron la medida.

El Sr. Juez de Paz de Alpachiri, el día 17/10/2019, puso en conocimiento de la Sra. Juez y de las partes que la medida de embargo no podía realizarse en el inmueble porque era de propiedad de Árbol Solo SRL.

Nada impedía a los embargantes indagar sobre el estado de dominio y posesión del inmueble, más cuando eran responsables de que la medida de embargo recayera sobre bienes de propiedad de La Paz S.A. como expresamente se indicaba en las sentencias que concedían la cautelar.

Este obrar negligente y consciente de los embargantes ha dado origen a ambas presentaciones y deberán cargar con las costas de este proceso, el cual se ha iniciado dentro del plazo prescripto por el art. 96 CPCC.

IV.6.- La falta de concordancia entre las facturas de compra y los bienes detallados en el acta de embargo.

El Sr. Nieva y la Dra. Faiad, al contestar el traslado del pedido de levantamiento de embargo, argumentaron “*Que de dicha documental no resulta indubitable que exista identidad entre los bienes detallados en el acta de embargo y los de las facturas, cuya autenticidad, además están desconocidas*”.

El defectuoso detalle de los bienes embargados no puede ser imputado a mi mandante y menos como argumento del rechazo del levantamiento de embargo o como defensa a esta acción de tercería de dominio.

Según la sentencia de fecha 01/10/2019, la Dra. Faiad estaba autorizada a denunciar los bienes. Es decir que a ella le correspondía identificar debidamente los bienes que embargaba para que luego puedan ser debidamente identificados tanto como para realizar el secuestro y posterior subasta de los bienes.

Si el embargante no identifica correctamente los bienes también torna imposible la tarea de los terceros que tengan derechos sobre esos bienes. Por lo tanto, como toda medida cautelar debe realizarse sin perjuicio de terceros, y para ello se presta la caución, debe extremar los recaudos y obrar con toda la diligencia que el acto requiere.

Entonces, como la Dra. Faiad no ha detallado los bienes indicando por ejemplo número de chasis, de motor, colores, dominio, etc. o bien tomado el recaudo de tomar fotografías de los bienes que permitan su posterior identificación, entonces no puede luego invocar su propia torpeza como fundamento de su defensa.

V) Reserva de reclamar daños y perjuicios.

En caso de que se ordene el secuestro y/o remate sobre los bienes que son de propiedad de mi mandante, reservamos de accionar por daños y perjuicios contra la Dra. Silvia Adriana Faiad ya que en las sentencias de fechas 26/06/2019 y 01/10/2019 ya que la designación de los bienes y la traba del embargo se dispusieron *“bajo la absoluta responsabilidad de la Dra. Silvia Faiad...”* .

La Dra. Faiad tenía conocimiento que la “Finca Monte Rico –Alto Verde” no era de propiedad de la demanda La Paz S.A., sino de mi representada ya que así fue puesto de manifiesto en la primera medida que se intentó realizar en fecha 17/10/2019 y que se vió frustrada por tal motivo.

Por otra parte, la misma Dra. Faiad voluntariamente se ha negado a realizar la medida de embargo en el domicilio legal de la demanda argumentando que ese domicilio se encontraría “cerrado constantemente” (fs. 10 del incidente de embargo que tramita por cuerda separada). La Letrada no ha acreditado tal circunstancia, limitándose a devolver el mandamiento sin diligenciar y a pesar de que en el mandamiento se habilitaba la utilización de la fuerza pública y el allanamiento del domicilio.

Es decir, que la Dra. Faiad tenía a su alcance todos los medios de hecho y de derecho para trabar la medida en el domicilio legal de la demandada condenada y

optó por realizar la medida en el domicilio de un tercero y conociendo que los bienes que allí se encontraban no pertenecían a La Paz S.A.

Esta reserva incluye los honorarios, gastos y demás costas que se deban abonar como consecuencia del rechazo del levantamiento de embargo sin terceraía dispuesto por sentencia de fecha 12/08/2020 y su ampliatoria de fecha 19/08/2020. Se deja constancia que esta parte no consiente ninguna de las sentencias y que se ha visto impedida legalmente de impugnarlas ya que el art. 99 del CPCC dispone que son inapelables.

Esta reserva se extiende al Sr. Miguel Alberto Nieva para el caso de que no se allane a la presente demanda y nos obligue a continuar litigando.

VI.- Prueba.-

A) Documental:

1. Las constancias de autos del expediente caratulado “NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ LA PAZ S.A. S/ DESPIDO. EXPTE 398/15” y de su incidente i1 que tramitan ante el Juzgado del Trabajo de la Primera Nominación del Centro Judicial Concepción. Desde ya solicito se requiera su oportuna remisión.

2. Copia certificada de la escritura de dominio n° 99 de fecha 17 de marzo de 2003 y folios reales que acreditan la inscripción de la escritura en el Registro Inmobiliario.

3. Factura n° 0001-00000180 de fecha 19/12/2003 emitida por Agrícola Ruivel S.R.L. por la venta a ARBOL SOLO S.R.L. de la desmalezadora, de los tanques cisternas de 400 Lts., del carro volcador y de la máquina pulverizadora embargadas.

4. Factura n° 0001-00000162 de fecha 10/09/2003 emitida por Agrícola Ruivel S.R.L. por la venta a ARBOL SOLO S.R.L. del Tractor Fiat 650, la abonadora marca AUDI, el tanque cisterna de 4.000 Lts. y un equipo de riego embargadas.

5) Copia certificada del contrato de arriendo celebrado entre Árbol Solo SRL y La Paz S.A..

6) Copia certificada del contrato de compra de fruta celebrado entre Árbol Solo SRL y S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.

7) Copia de los formularios de declaración jurada 931 de AFIP que demuestran que Árbol Sólo SRL es una sociedad en actividad y que entre sus empleados no se encuentra el Sr. Nieva Miguel Alberto.

B) Testimonial:

Solicito se cite como testigos a:

1) JORGE ALBERTO BALBI, DNI 11.425.584, con domicilio en calle Balcarce 411, de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

2) GUILLERMO JUAN JAUREGUIBERRY, DNI 11.668.780, con domicilio en calle Lamadrid 412, piso 2, dpto B, de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Para que expongan conforme al siguiente cuestionario:

- 1) Por las generales de la ley.
- 2) ¿Conoce la Finca denominada Monte Rico Alto Verde?
- 3) ¿A quién le pertenece?
- 4) ¿Quién realiza actos posesorios sobre el inmueble?
- 5) ¿Desde hace cuanto tiempo que realiza esos actos posesorios?
- 6) ¿En qué consisten esos actos posesorios?
- 7) ¿De qué elementos se vale el poseedor para realizar esos actos posesorios?
- 8) De público y notorio.

C) Documental en poder de terceros:

El expediente caratulado “NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ LA PAZ S.A. S/ DESPIDO. EXPTE 398/15” y de su incidente 11 que tramitan ante el Juzgado del Trabajo de la Primera Nominación del Centro Judicial Concepción. Desde ya solicito se requiera su oportuna remisión.

VII.- Medida previa. Se requieran copias digitales del expediente.

Atento a las medidas de aislamiento social, a la atención restringida a los profesionales dentro de Tribunales, a las limitaciones para desplazarse entre las jurisdicciones impuestas a la sociedad y a la implementación del trabajo remoto en los Juzgados me resulta imposible obtener las copias del expediente “NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ LA PAZ S.A. S/ DESPIDO. EXPTE 398/15” dentro del plazo para iniciar la presente demanda.

Por tal motivo solicito se libre oficio al Juzgado del Trabajo de la Primera Nominación del Centro judicial Concepción para que remita copias digitales de la demanda, contestación de demanda, sentencia de primera instancia y de segunda y de Corte en caso de corresponder. Además, solicito se requiera copias íntegras del incidente de embargo iniciado por el Sr. Nieva (incidente n°1).

El envío de las copias digitales se realiza sin perjuicio de que en la etapa oportuna se requiera la remisión completa de los expedientes físicos.

VIII.- Reserva del caso federal.

Mi parte hace expresa reserva del caso federal y del Recurso Extraordinario para el hipotético caso de que no se admitiera el planteo de inconstitucionalidad formulado en esta presentación. Porque se violarían los derechos y las garantías consagradas expresamente por la Constitución de la Nación (art. 17, 18, 31 y cdtes. CN), por la Constitución de la Provincia de Tucumán y por los Tratados Internacionales, apartándose de ellas sin fundamento alguno, ya que de los extremos invocados en la demanda, no surgen elementos que permiten dejar de aplicar el criterio legal señalado a lo largo de esta presentación. Es así que la reserva del caso federal que se realiza, se debe a que en este estado ya puede afirmarse que las normas que se atacan son abiertamente inconstitucionales y arbitrarias, como se ha sostenido a lo largo de toda esta presentación.

IX) Petitorio.-

Por lo expuesto a V.S. pido:

- 1) Se tenga por iniciada la presente Tercería de Dominio, me tenga por presentado, se me dé intervención en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal.
- 2) Por ofrecida la prueba documental y por acompañados los títulos de dominio.
- 3) Por ofrecida la prueba testimonial.
- 4) Por realizada la reserva de daños y perjuicios.
- 5) Por realizada la reserva del caso federal.
- 6) Se haga lugar a la medida previa y se soliciten las copias digitales.
- 7) Se corra traslado de la demanda y oportunamente se haga lugar a la misma.
- 6) Con costas a los demandados.

Provea de conformidad,

JUSTICIA

FORMULARIO PARA EL INGRESO DE CAUSAS (Acordada 72/2001)

DATOS A INCORPORAR – MESA DE ENTRADAS CIVIL

EXPTE. N°				
-----------	--	--	--	--

		DESCRIPCIÓN		
1.-	OBJETO DEL JUICIO	Terceria de dominio		

		DESCRIPCIÓN		
2.-	MODO DE PROCESO	Incidental-Sumario		

3.- DATOS ABOGADO/S					
Apellido/s y Nombres		P/A*	Domicilio/s Constituidos	Localidad	Casillero
Silvetti Ignacio José			20284766521		

* Patrocinante / Apoderado

4.-	DEFENSORIA	Nro.:
-----	------------	-------

5.– ACTORES, PETICIONANTES O CAUSANTES					
Apellido/s y Nombres		Domicilio Real o Contractual	Localidad	Tipo y Nº de Doc.	Nº de CUIT
Árbol Solo S.R.L		Monte Rico	chicligast a		30707426809

6.– DEMANDADOS (Datos Conocidos)					
Apellido/s y Nombres		Domicilio Real o Contractual	Localidad	Tipo y Nº de Doc.	Nº de CUIT
Nieva Miguel Alberto		B° Santa Emilia s/n	Alto Verde	17.537.072	
La Paz S.A.		Velez Sarsfield 509	Aguilares		30597072356
Faiad Silvia Adriana		Italia 1397	Concepci on		

7.-	FUERO DE ATRACCIÓN
JUZ.	EXPTE. CONEXO X
Trabaj o 1° Nom. Conce pcion	398/15

8.-	OFICIOS LEY 22.172
Juez oficiante:	
Juzgado y Fuero:	
Jurisdicción:	

9.-	MONTO DEL JUICIO	
\$	USD	IMPORTE

10.-	TASA de JUSTICIA	
	Abona Tasa mínima:	
	Abona Tasa íntegra:	
	Exenta de pago	

11.-	BONOS PROF.	
	ADJUNTA	
	NO ADJUNTA	

-12-	LEY 6.059	
	ABONA	
	NO ABONA	

LOS DATOS CONSIGNADOS REVISTEN EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

03/09/2020
FECHA

.....
FIRMA Y SELLO DEL LETRADO DECLARANTE

El presente formulario deberá completarse con letra legible (en forma manual o imprenta). Toda raspadura o enmienda deberá ser salvado previo a la firma del profesional.-

El número de expediente será completado en forma manual al momento de la asignación.



01002 01405216-M



ACTUACION NOTARIAL



N 01405216
CE UN CU CE CI DO UN SE

PODER GENERAL PARA JUICIOS y TRAMITES ADMINISTRATIVOS, OTORGA: ÁRBOL

SOLO S.R.L. Favor de Dr. IGNACIO JOSE SILVETTI y Otros; ESCRITURA NUMERO:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE.- (199).- En la Ciudad de Yerba Buena, Departamento Yerba

Buena, Provincia de Tucumán, República Argentina, a veinte días del mes de Noviembre del año

Dos Mil Diecinueve, ante mí: **MARIA CRISTINA ZALDARRIAGA DE NAVARRO**, Escribana

Pública Titular del Registro número Ciento Cuatro, comparece El señor: MARCOS SIMON

PADROS, Documento Nacional de Identidad número treinta millones ochocientos cuarenta y tres

mil quinientos sesenta y dos, CUIL: 20-30843562-9, argentino, soltero, nacido el 24 de Febrero de

1984, domiciliado en calle Fermín Carliola n° 1435, de esta ciudad de Yerba Buena, Departamento

Yerba Buena, Tucumán; persona a quien identifico de acuerdo al artículo 306, inciso "B", del

Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe. Viene por este acto en nombre y representación y

en el carácter de socio gerente de la razón social que gira bajo la denominación de " ARBOL

SOLO S.R.L.", CUIT: 30-70742680-9, con domicilio social y legal en la localidad de Monte Rico

Viejo, Departamento Chicligasta, provincia de Tucumán, con facultades suficientes para este acto,

personaría que justifica con: Texto Ordenado, de fecha 12 de Julio de 2017, inscripto en el Registro

Público de Comercio bajo el n° 16, fojas 191/197, tomo XXXIII del Protocolo de Contrato Sociales

del año 2017, con fecha 4 de Septiembre de 2017, instrumento que para este acto he tenido a la

vista y copia se encuentra anexado a la escritura número 12 de fecha 6/02/2018, pasada por ante

mí, en el Protocolo del correspondiente año de este Registro a mi cargo, doy fe. Y en el carácter

invocado y acreditado EXPONE: Que confiere **PODER GENERAL PARA JUICIOS y TRAMITES**

ADMINISTRATIVOS a favor de los Doctores IGNACIO JOSE SILVETTI, D.N.I. 28.476.652,

Matricula Profesional 5733, MARIA SOFIA COUREL, D.N.I. 33.139.522, Matricula Profesional

7906, MARIA CONSTANZA PEINADO, D.N.I. 34.186.523, Matricula profesional 8517, MANUEL

ALBERTO COUREL, (H) D.N.I. 24.553.944, Matricula profesional 4233, DIEGO MARTIN

COUREL, D.N.I. 26.684.015, Matricula Profesional 5206, MANUEL ALBERTO COUREL, D.N.I.

N 01405216
CE UN CU CE CI DO UN SE

8.067.160, Matricula Profesional 1418 y/o ARTURO FORENZA, D.N.I. 30.442.224, Matricula Profesional 6516, abogados que actúan en el foro de esta Provincia, para que actuando ya sea en forma conjunta, separada o alternativa, en nombre y representación de la mandante, intervengan en todos sus asuntos de orden administrativos y judicial que al presente tenga pendiente la mandante o los que en el futuro se le susciten o lleguen a ofrecer como actora o demandada. Al efecto los faculta para: que se presenten ante las autoridades administrativas del orden Nacional, Provincial o Municipal, Instituciones Autárquicas, Ministerios, Secretarías, sus oficinas y dependencias, entidades privadas, Tribunales Judiciales, Contenciosos Administrativo, del Trabajo y/u Ordinarios de la Nación, Municipal, Obras Sanitarias y demás oficinas y autoridades públicas y privadas, Cámaras, Cortes, Jueces y demás autoridades competentes; instituciones crediticias de esta República, sea en bancos oficiales, privados, compañías aseguradoras. Asimismo los facultan para que realicen toda clase de gestiones, reclamos y recursos, presentando escritos, escrituras, documentos, testigos y cuantas probanzas procedieran, pudiendo entablar demandas y contestar las interpuestas, decir de nulidad y simulación, poner y absolver posiciones, tachar, recusar, celebrar arreglos, conciliaciones, transacciones, prorrogar o declinar de jurisdicción, desistir de estos derechos, reasumirlos, renunciar a ellos; nombrar y proponer toda clase de peritos, síndicos y demás funcionarios; comprometer las causas en juicios de árbitros o arbitradores, solicitar embargos preventivos y definitivos, inhibiciones y sus levantamientos, desalojos, lanzamientos, dar o exigir fianzas y cauciones; asistir a juicios verbales, proponer agrupamientos y clasificación de acreedores, efectuar propuestas de acuerdo preventivos y avenimientos, celebrar acuerdos preventivos extrajudiciales, en general intervenir en procesos concursales, verificaciones y graduaciones de créditos, verificar especialmente créditos de concursos de acreedores y demás audiencias de cualquier clase que se dicten o celebren, practicar inventarios, balance y compulsas de libros, pedir la apertura del concurso preventivos de acreedores, sus propias quiebras o la de sus



ACTUACION NOTARIAL



N 01405217
CE UN CU CE CI DO UN SI

1 deudores, la venta de los bienes de los mismos o su adjudicaciones en pago, solicitar
2 indemnizaciones de daños y perjuicios, concertar arreglos pactando formas, condiciones y
3 modalidades, abonar sellados, gastos, derechos o cualquier suma de dinero que bajo otro
4 concepto corresponda y se les exigieran, dar o exigir recibo, diligenciar exhortos, mandamientos,
5 oficios intimaciones y citaciones; como así también para participar en procesos de mediación
6 con amplias facultades para acordar y/o transar y/o mediar. Y en fin a realizar cuantos más
7 actos gestiones y diligencias sean conducentes al mejor desempeño del presente mandato. Leída
8 y ratificada firma el compareciente por ante mí, doy fe. Sellos M 01248749 y M 01248753. Hay
9 una firma ilegible. Esta mi Firma y Sello Notarial. CONCUERDA: Con su escritura matriz que paso
10 por ante mí y lleva el numero ciento noventa y nueve del Protocolo del año en curso de este
11 Registro a mi cargo. Para la sociedad mandante expido este PRIMER TESTIMONIO que firmo y
12 sello en el lugar y fecha de su otorgamiento. *Sellos de Actuación Notarial N01405-*

216 y N01405217.-

[Firma manuscrita]
Escribana Zulma Lago de Navarra
ESCRIBANA PUBLICA
TIT. REGISTRO N° 104 - TUCUMAN

AGRICOLA RUIVEL S.R.L.

DON BOSCO 1885
4000 San Miguel de Tucumán

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA

N° 0001 - 00000162

FECHA: 10/09/2003

CUIT N° 30-7078189-2

Ing. Buenos N° 30-7078189-2 - Inscrit. Art. 01/12/2001

Señor(es): Arbol Solo srl

Domicilio: Monte Rico Viejo, Dpto. Chidigasta, Tucumán

I.V.A. Resp. Inscripto ☒ Resp. No Inscripto ☐ CUIT N° 30-7078189-2

Condiciones de Venta: CONTADO ☐ CTA.CTE ☒ Remito N°

DETALLE	IMPORTE
Por venta de las siguientes maquinarias:	
- Tractor Fiat 650	15.000
- Tanque Sistema 4.000 litros	1.000
- Una abanadora marca Audi	500
- Tractor Deutz	15.000
- Equipo de riego	2.500

DHS de Yolanda M. de Sayago - Av. Pellegrini 1531
CUIT 27-13338928-3 / N° Hab. 848371
100x2 del 0001-00000101 al 200
Impreso Julio/2003

SUB-TOTAL \$ 34.000,00
IMPUESTOS \$
SUB-TOTAL \$
I.V.A. Inscripto 21 % \$ 7.140,00
I.V.A. No Inscripto % \$
TOTAL \$ 41.140,00

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

C.A.I. N° 23942125825364
Vencimiento: 17/07/2005

AGRICOLA RUIVEL S.R.L.

DON BOSCO 1885
4000 San Miguel de Tucumán

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA

N° 0001 - 00000180

FECHA: 19/12/2003

CUIT N° 30-7078189-2

Ing. Buenos N° 30-7078189-2 - Inscrit. Art. 01/12/2001

Señor(es): Arbol Solo srl

Domicilio: Monte Rico Viejo, Dpto. Chidigasta, Tucumán

I.V.A. Resp. Inscripto ☒ Resp. No Inscripto ☐ CUIT N° 30-7078189-2

Condiciones de Venta: CONTADO ☐ CTA.CTE ☒ Remito N°

DETALLE	IMPORTE
Por venta de las siguientes maquinarias:	
- Desmalezadora	1.000
- Dos tanques sistema de 4000 litros	2.000
- Cuatro carros volcadores tipo Jara	3.200
- Una rastra de disco de 22 discos	2.500
- Un equipo de 4 paquetes	800
- Una maquina pulverizadora hechizo sin marca	1.000

DHS de Yolanda M. de Sayago - Av. Pellegrini 1531
CUIT 27-13338928-3 / N° Hab. 848371
100x2 del 0001-00000101 al 200
Impreso Julio/2003

SUB-TOTAL \$ 10.500,00
IMPUESTOS \$
SUB-TOTAL \$
I.V.A. Inscripto 21 % \$ 2.205,00
I.V.A. No Inscripto % \$
TOTAL \$ 12.705,00

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

C.A.I. N° 23942125825364
Vencimiento: 17/07/2005



ACTUACION NOTARIAL

Eduardo Wilde
Escribano
Tucumán



N 00103401

1 ESCRITURA NUMERO NOVENTA Y NUEVE.----- En la
2 VENTA: Realizada por LA PAZ S.A. a favor de -/ Ciudad
3 ARBOL SOLO S.R.L.- Por \$ 90.000. (Av. Fiscal -/ de San
4 cal: \$ 126.766.-----/ Miguel
5 de Tucumán, Capital de la Provincia de Tucumán,
6 Republica Argentina, a diecisiete dias de Marzo del año
7 dos mil tres, ante mi, EDUARDO WILDE, Escribano
8 Autorizante Titular del Registro Nº 9, COMPARECEM, por
9 una parte, doña SILVINA MARIA LOPEZ VILLAGRA DE SIMON
10 PADROS, Documento Nacional de Identidad Nº 10.682.096,
11 casada, vecina de esta Ciudad, y por la otra parte, don
12 JORGE HERNAN SIMON PADROS, Documento Nacional de
13 Identidad Nº 8.064.420, casado, vecino de esta Ciudad;
14 ambos comparecientes son argentinos, mayores de edad,
15 de mi conocimiento, doy fé: concurriendo a este acto la
16 primera nombrada en representación de "LA PAZ S.A.",
17 C.U.I.T. Nº 30-59707235-6, con domicilio legal en Velez
18 Sarfield Nº 583 de la Ciudad de Aquilares de esta
19 Provincia, en su calidad de apoderada de la misma, en
20 virtud del Poder General Amplio conferido por escritura
21 Nº 87, de fecha 21 de Febrero de 1.983, que en
22 testimonio inscripto bajo el Nº 49, desde Fojas 162
23 hasta Fojas 168 del Tomo 25º del Protocolo de Poderes y
24 Autorizaciones, Año 1983, del Juzgado de Comercio de
25 esta Provincia, tengo para este acto a la vista y de la
que agrego fotocopia autenticada por cabeza de la
presente escritura, doy fé.- y don JORGE HERNAN SIMON
PADROS, concurre a este otorgamiento en representación
de "ARBOL SOLO S.R.L.", C.U.I.T. Nº 30-70742680-9, con

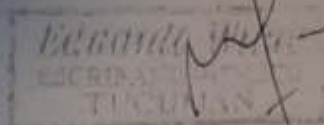


N 00103401

domicilio legal en la localidad de Monte Rico Viejo, Departamento Chiriquista de esta Provincia, en el carácter de Socio Gerente de la misma, acreditando la existencia legal de la Sociedad y la personería invocada con el respectivo Contrato Social celebrado por instrumento privado de fecha 19 de Septiembre del 2.000, de donde surge su designación para el cargo que ocupa, y que en su original tengo para este acto a la vista y del cual agregó fotocopia autenticada por cabeza de esta escritura, de lo que también doy fe.- Y doña SILVINA MARIA LOPEZ VILLAGRA DE SIMON PADROS, en el carácter acreditado, EXPONE: Que VENDE a "ARBOL SOLO S.R.L.", dos inmuebles de legítima propiedad de su representada, "LA PAZ SOCIEDAD ANONIMA", con todo lo en ellos edificado, cercado, plantado y demás adherido al suelo, ubicados en "Monte Rico", Departamento Chiriquista de esta Provincia, señalados en el plano de fraccionamiento respectivo como FRACCIONES "A" y "1-b", a saber: PRIMERO: FRACCION "A": Compuesto según títulos de las siguientes medidas perimetales: Puntos A-B: 971,09 metros; Puntos B-C: 136,84 metros; Puntos C-D: 253,76 metros; Puntos D-E: 86,94 metros; Puntos E-F: 711,92 metros; Puntos F-J: 55,91 metros; Puntos J-K: 51,17 metros; Puntos K-L: 13,38 metros; Puntos L-M: 49,07 metros; Puntos M-N: 50,03 metros; Puntos N-O: 44,99 metros; Puntos O-O' : 3 metros; Puntos O'-H: 282,79 metros; Puntos H-I: 147,43 metros, y Puntos I-A, de partida: 79,20 metros, lindando: al Norte, Fracción B, herederos de Rosalia



ACTUACION NOTARIAL



N 00103404

Bulacio y otros, camino de por medio: al Sud. Maria L. V. de Luccardi; al Este, Faustino Fernández y Francisco Vargas y al Oeste, Monte Rico S.R.L.- Y SEGUN INFORME DE VERIFICACION practicado por el Agrimensor don Juan Pablo Frias Silva, aprobado por Catastro Parcelario el 23 de Enero del 2.002 en Expediente Nº 492-F.S.-02, el inmueble de referencia mide: Puntos A-B: 971.09 metros: Puntos B-C: 136.84 metros: Puntos C-D: 253.76 metros: Puntos D-E: 86.94 metros: Puntos E-F: 711.92 metros: Puntos F-G: 55.91 metros: Puntos G-H: 51.17 metros: Puntos H-I: 16.38 metros: Puntos I-J: 49.07 metros: Puntos J-K: 50.03 metros: Puntos K-L: 44.09 metros: Puntos L-M: 282.79 metros: Puntos M-N: 147.43 metros, y Puntos N-O: 79.20 metros.- Esta propiedad está atravezada de Norte a Sud por el Arroyo Muro, el que está compuesto de las siguientes medidas: Puntos A'-B': 3.40 metros: Puntos B'-C': 22.76 metros: Puntos C'-D': 50.41 metros: Puntos D'-E': 45.89 metros: Puntos E'-F': 31.39 metros: Puntos F'-G': 50.03 metros: Puntos G'-H': 46.06 metros: Puntos H'-I': 3 metros: Puntos I'-J': 45.31 metros: Puntos J'-K': 50.03 metros: Puntos K'-L': 31.38 metros: Puntos L'-M': 44.79 metros: Puntos M'-N': 50.41 metros, y Puntos N'-O', de partida: 24.56 metros, lindando: al Norte, camino público y Adrián Fernández; al Sud, Ramón Benito Zuccardi; al Este, Adrián Fernández, Arroyo Muro y Agropecuaria Monte Rico S.R.L., y al Oeste, La Paz S.A. y Arroyo Muro.-
SUPERFICIE: 39 Hectáreas 6613 metros cuadrados;
SUPERFICIE ARROYO MURO: 748 metros cuadrados.-



IDENTIFICACION CATASTRAL: "Padrón: 52.7071 Matricula N° de Urgent 20799/24; Circunscripción: I; Sección: F; Manzana o Lámina: 528; Parcela: 459A1. (459a. según Registro Inmobiliario); Valuación: \$ 32.979.- y

SEGUNDO: FRACCION 1-b: Compuesto según títulos de las siguientes medidas perimetrales: Puntos 15-16: 418,01 metros; Puntos 16-17: 50 metros; Puntos 17-18: 50 metros; Puntos 18-19: 605,83 metros; Puntos 19-20: 272,63 metros; Puntos 20-21: 20,54 metros; Puntos 21-22: 31,12 metros; Puntos 22-23: 1.141,30 metros; Puntos 23-24: 234,30 metros; Puntos 24-25: 48,75 metros; Puntos 25-26: 99,25 metros; Puntos 26-27: 236,40 metros; Puntos 27-28: 124,07 metros; Puntos 28-11: 255,04 metros, y Puntos 11-15: 971,39 metros, lindando: al Norte, terrenos de la S.A. Azucarera Argentina C. & I., camino vecinal de por medio; al Sud, Río Medinas; al Este, parte lote 12 de Vicente Bustamante y en parte lote 2 de José Moreno, y en parte con herederos de Rosalia Bulacio, camino de por medio, y al Oeste, en parte con José Antonio Maldonado y en parte con José Moreno, camino de por medio.- y SEGUN PLANO DE MENSURA practicado por el Agrimensor don Juan Pablo Frias Silva, aprobado por Catastro Parcelario el 23 de Enero del año 2.002 bajo el N° 37.760, Expediente N° 491-F.8.02, el inmueble de referencia, mide: Puntos 1-2: 272,63 metros; Puntos 2-3: 50,99 metros; Puntos 3-4: 1.141,97 metros; Puntos 4-5: 109,20 metros; Puntos 5-6: 197,05 metros; Puntos 6-7: 99,25 metros; Puntos 7-8: 236,40 metros; Puntos 8-9: 124,07 metros; Puntos 9-10:



ACTUACION NOTARIAL

Eduardo M. [Firma]
Escribano
TUCUMÁN



N 00103403

253.04 metros; Puntos 10-11: 971.39 metros; Puntos 11-12: 418.01 metros; Puntos 12-13: 50 metros; Puntos 13-14: 50 metros, y Puntos 14-1, de partida: 605.83 metros. Esta propiedad se encuentra atravesada de Norte a Sud-Este por el Arroyo Muro, que tiene las siguientes medidas: Puntos 16-17: 88.58 metros; Puntos 17-18: 106.57 metros; Puntos 18-19: 175.64 metros; Puntos 19-20: 150.23 metros; Puntos 20-21: 129.21 metros; Puntos 21-3: 77.06 metros; Puntos 3-22: 3.31 metros; Puntos 22-23: 76.58 metros; Puntos 23-24: 128.12 metros; Puntos 24-25: 150.03 metros; Puntos 25-26: 176.28 metros; Puntos 26-27: 107.38 metros; Puntos 27-28: 89.06 metros, y Puntos 28-16, de partida: 3.40 metros, lindando: al Norte, camino público y Escuela Nº 17; al Sud, Río Medinas; al Este, con Escuela Nº 17, camino público, Arroyo Muro, La Paz S.A. y Ramón Benito Zuccardi y al Oeste, en parte con Emilio Fauvarque, camino público de por medio, Arroyo Muro, Genoveva Maldonado de Buades y Dolores Moreno de Maldonado.- SUPERFICIE ARROYO MURO: 2.386.2158 metros cuadrados; SUPERFICIE NETA: 107 Hectáreas, 9.912,1922 metros cuadrados.- IDENTIFICACION CATASTRAL: "Padrón: 55.027; Matricula Nº de Orden: 29264/39 (29.264/34, según Registro Inmobiliario); Circunscripción: 1; Sección: F; Manzana o Lámina: 528; Parcela: 337C; Valuación: \$ 93.789".- TITULOS: Corresponde a la Sociedad vendedora los inmuebles precedentemente descriptos, por compra realizada mediante escritura Nº 172, de fecha 21 de Mayo de 1.984, pasada ante el Escribano Alejandro



N 00103403

Agustín Terán, cuyo testimonio se inscribió en las Matriculas Z-5686 y Z-5685.- CERTIFICADOS

ADMINISTRATIVOS: De los Certificados que archivo, resultar que la Sociedad Anónima, vendedora no está inhibida para disponer de sus bienes, y que los inmuebles relacionados, cuyo dominio consta a su nombre en la forma expresada, no se encuentran hipotecados ni embargados, conforme a las Certificaciones N°s: 12686 y 12687, de fecha 5 de Marzo del 2.003, producidas por el Registro Inmobiliario.- En este estado las partes contratantes dejan constancia que la parte vendedora se obliga a abonar lo que los inmuebles objeto de esta escritura estuvieren adeudando al día de la fecha por Impuesto Inmobiliario, servicios de Riego y por tasas y servicios Comunales, siendo en adelante a cargo de la Sociedad compradora.- PRECIO: Esta venta se realiza por el precio de PESOS NOVENTA MIL (\$ 90.000), importe que doña Silvina María López Villagra de Simón Padros declara lo tiene íntegramente recibido su representada de la Sociedad compradora, con anterioridad a este acto, en dinero efectivo y a su entera satisfacción, por lo que y por la representación que inviste le otorga por la presente escritura, recibo y carta de pago en forma, transmitiéndole todos los derechos de propiedad, posesión y dominio que su representada tiene sobre los inmuebles relacionados, para que disponga de ellos como legítima dueña, obligándola a responder por evicción y saneamiento, conforme a derecho.- ACEPTACION: El Señor JORGE HERNÁN SIMÓN PADROS, acepta



ACTUACION NOTARIAL



N 00103402

esta venta a favor de su representada "ARBOL SOLO
S.R.L.".- RETENCION IMPOSITIVA: En mi carácter de
agente de retención y/o percepción del impuesto a las
Ganancias, establecido por la Dirección General
Impositiva, dejo constancia que a la Sociedad vendedora
no retengo suma alguna en virtud de manifestar su
representante que la misma afecta el producido de esta
venta al reemplazo de bienes de uso, Artículo 67 de la
Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias.- En su
testimonio, previa lectura que les di, ratifican su
contenido y firman los comparecientes, por ante mi, doy
fé.- SELLUS M 00079687 a 00079690.- S. M. V. DE SIMON
PADROS.- J. SIMON PADROS.- EDUARDO WILDE.- Hay un
sello.- CONCUERDA: Con su matriz que pasó por ante mi
en el Protocolo del año en curso del Registro Nº 9, a
mi cargo, doy fé.- Para LA COMPRADORA, expido esta
primera copia que firmo y sello, dejando constancia que
el Folio de Seguridad de esta escritura es el Nº
0037409.-

Eduardo Wilde
ESCRIBANO PUBLICO
TUCUMAN



Dirección Reg. Inmobiliaria Tucumán

Nro: 21843

15/04/2003 12:08:25

REAL



2410021343503300010140 888V

N 00103402

MINISTERIO DE GOBIERNO EDUCACIÓN Y JUSTICIA
DIRECCION DE REGISTRO INMOBILIARIO
SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 15 DE Abril DE 2003.-

El presente documento ha sido asentado en el DIARIO de

21843 / 03.-

EN LA MATRICULA 2-5686 y 2-5685.-

REGISTRADO COMO: compra (Fede Seg. N° 37409)

[Handwritten signature]
FEDERICO GARCIA
SECRETARIO DE REGISTRO INMOBILIARIO

*Dirección de Registro Inmobiliario
de la
Provincia de Tucumán*

folio de seguridad

Corresponde al PRIMER

Testimonio de la Escritura N° 99

(NOVENTA Y NUEVE)

de fecha 17

del mes de MARZO

del año 2.003

Acto jurídico: VENTA

Formalizada en 4

fojas de Actuación notarial N° N 00103401,

00103404, 00103403 y 00103402.-



Eduardo Wilke
ESCRIBANO PUBLICO
TUCUMÁN

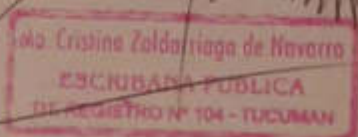

VERIFICADO
DIVISION DE REGISTRO INMOBILIARIO

N° 0037409

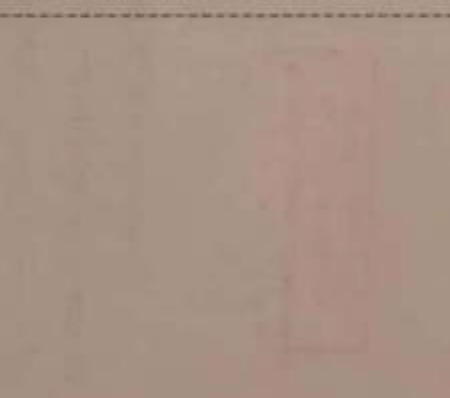
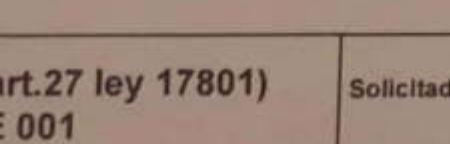



Registro Notarial N° 009

La presente es impresión fiel del archivo adjunto del mail enviado por el Registro Inmobiliario de Tucuman, desde la página informesregistro@dime.gov.ar sobre informe dominial de Matricula Registral Z-05685, solicitada por mi, en forma online. CONSTE.-----

En la Ciudad de Yerba Buena, Departamento Yerba Buena, Provincia de Tucumán, a veintiún días del mes de Agosto del año dos mil veinte.-

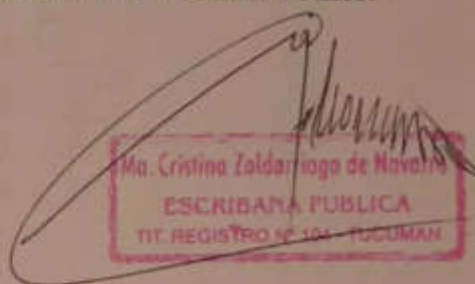


Cristina Zaldarriaga de Navarro
ESCRIBANA PUBLICA
DE REGISTRO N° 104 - TUCUMAN

01-MATRICULA (Folio Electrónico)		02-UBICACION DEL INMUEBLE			
2-05686 (Chicligasta)		Fraccion A Monte Rico			
03-NOMENCLATURA CATASTRAL	circunscrip.	sección	manz/lám.	parcela	subparcela
	I	F	528	459A1	000
PADRON INMOBILIARIO N° 52707.- MATRICULA CATASTRAL N° 28799/24.-					
04-MEDIDAS, LINDEROS Y SUPERFICIE Por covid19 deben sumarse 59 días a los plazos (DTR 01/2020) S/Titulo:A-B, 971,09 M. B-C: 136,84 M. C-D: 253,76 M. D-E: 86,94 M. E-F: 711,92 M. F-G: 55,91 M. G-H, 51,17 M. H-I, 16,38 M. I-M. 49,07 M. M-N, 50,03 M. N-O, 44,99 M. O-O', 3 M. O'-H, 282,79 M. H-I: 147,43 M. I-A: 79,20 M. * LINDA: AL N. FRACCION B, HROS. DE ROSALIA BULACIO Y OTROS, CAMINO DE POR MEDIO AL S. MARIA L. V. DE ZUCCARDI AL E. FAUSTINO FERNANDEZ Y FRANCISCO VARGAS AL O. MONTE RICO S.R.L. * SEGUN INFORME DE VERIFICACION N° 492/FS/02. CONSTA DE IGUALES MEDIDAS Y * LINDA: AL N. CAMINO PUBLICO Y ADRIAN FERNANDEZ. S. RAMON BENITO ZUCCARDI, E. EN PARTE CON ADRIAN FERNANDEZ, ARROYO MURO Y AGROPECUARIA MONTE RICO S.R.L. O. LA PAZ S.A. Y ARROYO MURO. * SUP: 39 HAS. 6613 M2.					
PLANO:					
05- ANTECEDENTE DOMINIAL: FRC:2-05686. T°19 F°153 S/C.-					
6-TITULARIDAD DEL DOMINIO		%	7- OTROS DERECHOS REALES, GRAVAMENES, RESTRIC. e		8-CANCELACIONES
1)ARBOL SOLO S.R.L.;CUIT:30-70742680-9;Monte Rico Viejo/ --Dpto: Chicligasta//////////////////////////////////// *COMPRA*Esc. N°95 del 17/03/2003*Reg:9*Entró:21843*Fecha :15/04/2003*Insc.:cbo*Verif.:dva.- - - - -		100			
					
					
					
					
Informe(art.27 ley 17801) INFORME 001		Solicitado por: Apellido: ZALDARRIAGA Nombres: CRISTINA D.N.I.: 12414222			Dirección Registro Inmobiliario  8150541883763016382241 30/06/2020 09:15:25 No 30804 reg

La presente es impresión fiel del archivo adjunto del mail enviado por el Registro Inmobiliario de Tucuman, desde la página informesregistro@dime.gov.ar sobre informe dominial de Matricula Registral Z-05686, solicitada por mi, en forma online. CONSTE.-----

En la Ciudad de Yerba Buena, Departamento Yerba Buena, Provincia de Tucumán, a veintiún días del mes de Agosto del año dos mil veinte.-



Ma. Cristina Zaldarriaga de Navarrete
ESCRIBANA PUBLICA
TIT. REGISTRO Nº 104 - TUCUMAN

7C \$ 16,20

Escritura Pública
Trib. Registral N° 104 - TUCUMAN

21 JUL 2018

809161220952
\$ 14.306,30

Escritura Pública
Trib. Registral N° 104 - TUCUMAN

Escritura Pública
Trib. Registral N° 104 - TUCUMAN

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FRUTA

Entre ARBOL SOLO S.R.L, CUIT N° 30-70742680-9, representada en el acto por el señor JORGE HERNAN SIMON PADROS, DNI. N° 8.064.420, en su carácter de Gerente de la misma, con domicilio en calle Fermín Cariola N° 1435 de la ciudad de Yerba Buena, Dpto. Tafi Viejo, Provincia de Tucumán (en adelante la VENDEDORA), y por la otra parte la empresa S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.Iy F., con domicilio legal en calle Lavalle N° 4001, de la ciudad de San Miguel de Tucumán (en adelante la COMPRADORA), representada para este acto por el Sr. MARTIN ANDRES CARIGNANI DNI. N° 20.200.121, y el señor SEBASTIAN TORRES POSSE, DNI: N° 13.417.332, en su carácter de apoderados con facultades suficientes para suscribir el presente contrato de compraventa de fruta sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes: _____

ARTICULO PRIMERO: ARBOL SOLO S.R.L. (la VENDEDORA), se obliga a VENDER a S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.Iy F. (la COMPRADORA), el 100% de su producción anual, cuya producción anual media se estima en MIL TONELADAS (1.000.-) o lo que en definitiva surja de cada cosecha de limón calidad industria y empaque durante los años de vigencia del presente contrato y se compromete y obliga entregar en exclusividad y en forma intensiva e ininterrumpidamente la totalidad de su producción y LA COMPRADORA se obliga a recibir fruta proveniente de fincas citricolas de su libre disponibilidad hasta la cantidad de toneladas ó lo que resulte de fruta indicada de manera precedente, ubicadas en esta Provincia, e identificadas de la siguiente forma: a) Inmueble sito en ALTO VERDE, MONTE RICO, DEPARTAMENO DE CHICLIGASTA de esta PROVINCIA, identificado con padrón N° 253.213, con una superficie total según plano N° 42.027/ 04, de 15 Has. Con 6451,8358 m2, inscripto en la matrícula Z-10-075 y b) inmueble sito en LA PAZ, departamento de CHICLIGASTA de esta Provincia, identificado con padrón N° 55.027, con una superficie total según plano N° 37.760/02, y título de 108 has. Con 1.998 m2, inscripto en la matrícula Z-

SUJETO A REAJUSTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5685.-La fruta comprometida en venta, podrá variar en más ó en menos en un veinte (20%) por ciento anual.-A estos efectos las partes realizarán un control de las fincas y estimación de producción en forma previa al inicio de cada cosecha.-----

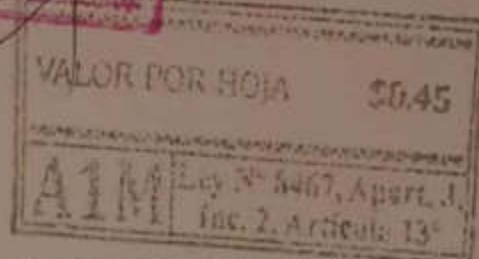
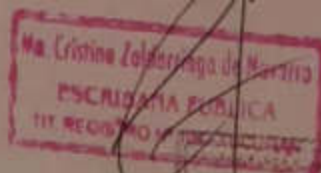
ARTICULO SEGUNDO.-PLAZO.- El presente contrato se suscribe por el plazo de cinco (5) años, a contar desde el día 01 de Diciembre de 2016 hasta el día 31 de Diciembre de 2021. En el caso de que la campaña del último año de vigencia del presente se extienda más allá del mes de Septiembre seguirán en curso de aplicación las normas del presente contrato en la medida que la compradora, mantenga en funcionamiento su planta de procesamiento.-----

ARTICULO TERCERO.- La VENDEDORA, deberá entregar en cada caso, fruta tipificada ya sea para industria, empaque ó exportación, lo que será determinado por las partes en cada caso de común acuerdo.- La fruta debe ser puesta en fábrica o empaque de S.A. SAN MIGUEL con corte, flete y todo otro gasto, a su exclusivo cargo, o bien cosechada y transportada por la COMPRADORA quien procederá al descuento de dicho servicio. S.A. SAN MIGUEL se hará cargo de la cosecha y del flete, debiendo establecerse previamente el valor de dichos trabajos, lo que será descontado de cada liquidación por fruta que abone la sociedad compradora. -----

Asimismo las partes acuerdan como fecha límite de corte de cosecha el 15 de Julio de cada zafra, salvo la última que podrá extenderse hasta el 30 de Septiembre de ese año.-----

ARTICULO CUARTO.- PRECIO.- LAS PARTES acuerdan que el precio por la provisión de la fruta limón calidad "INDUSTRIA Y EMPAQUE" se establecerá de conformidad con lo que a continuación se establece: San Miguel hará la liquidación de ingresos de fruta de manera mensual, con un precio de referencia provisorio que será determinada por San Miguel de acuerdo a las condiciones del mercado.-----

A la finalización de la temporada, San Miguel elaborará una liquidación final ("La liquidación final de Temporada") en la que informará al productor el precio de referencia provisorio y la



determinación de la diferencia que exista entre las liquidaciones parciales realizadas con precio de referencia provisorio y la liquidación de ajuste final de Temporada. En dicha oportunidad se practicarán los ajustes correspondientes a los fines del pago de la diferencia por la parte que resulte obligada a hacerlo.- El valor de la fruta calidad exportación, será pactado por las partes en cada campaña de acuerdo a los valores de mercado.- El precio de la fruta será pactado en dólares estadounidenses, tomando la cotización del dólar tipo comprador Banco de la Nación Argentina con el cual S.A. SAN MIGUEL liquide sus exportaciones de productos industriales, y será abonado en pesos, en cheques mediante liquidaciones mensuales.- Una vez practicada cada liquidación la misma estará a disposición de LA VENDEDORA, el día posterior al cierre de cada quincena, en el domicilio de calle Lavalle N° 4001 de esta ciudad, o donde oportunamente lo indique la sociedad COMPRADORA, por medio fehaciente.-----

ARTICULO QUINTO.- La COMPRADORA, se reserva el derecho de rechazar la fruta en caso que la misma no sea adecuada para su destino industrial según la calidad que requieren los mercados internacionales para los subproductos de la misma.- LA VENDEDORA se obliga a informar a LA COMPRADORA los productos usados en los tratamientos sanitarios de la fruta, al igual que los fertilizantes aplicados al suelo, como de todos los productos químicos aplicados en las fincas sujetas al presente contrato.-En todos los casos, los productos utilizados deben ser de aceptación en los mercados a donde se destinan los subproductos que se elaboren con la fruta. El incumplimiento de estas obligaciones dará derecho a la COMPRADORA a aplicar el rechazo previsto en el párrafo anterior e incluso resolver el presente conforme los términos del artículo Décimo Sexto pudiendo exigir LA COMPRADORA el total del saldo deudor del crédito vigente a la fecha de la resolución con más los intereses, costos y accesorios devengados a dicha fecha.- Sobre estas obligaciones LA COMPRADORA, tiene los más amplios derechos de inspección en los inmuebles de propiedad de la VENDEDORA.-----

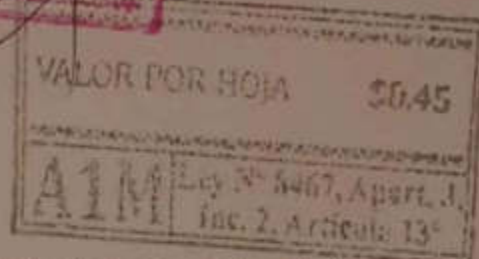
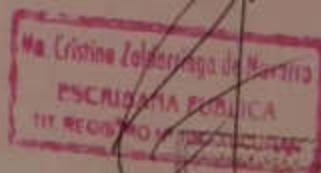
116
Escuela
Nº 1000

ARTICULO SEXTO.- A solicitud de LA VENDEDORA y para facilitar a esta firma sus labores de mantenimiento general de las plantaciones y cosecha y cualquier otra estrictamente relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente, LA COMPRADORA otorgará un anticipo financiero a partir de la fecha del presente, de hasta la suma de Dólares Estadounidenses Ciento Cincuenta Mil (U\$S 150.000.-) de acuerdo a las necesidades de LA VENDEDORA y conforme ésta lo solicite (de manera indistinta los "Anticipos Financieros" o el "Crédito"). LA VENDEDORA devolverá los Anticipos Financieros conforme lo establecido en el artículo Décimo Tercero del presente. El Crédito será cancelado parcial o totalmente con la fruta cosechada en las campañas 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.-LA COMPRADORA descontará a LA VENDEDORA hasta el 20 % (veinte por ciento) del valor neto de las liquidaciones mensuales por entrega, hasta cubrir los montos totales del crédito otorgado como toda otra cuenta pendiente.-La SOCIEDAD VENDEDORA, se reserva el derecho de cancelar anticipadamente el ó los anticipos recibidos.-----

ARTICULO SEPTIMO.- La circunstancia de que LA COMPRADORA, en alguna liquidación de pago, por el motivo que fuera, no hubiera descontado o lo hubiera hecho solo parcialmente los valores consignados en la cláusula anterior no implica pérdida de este derecho, que podrá ejercer durante todo el lapso de este contrato. Los Adelantos Financieros estarán garantizados conforme los términos de la garantía hipotecaria aquí otorgada y de acuerdo a los intereses aquí pactados.-----

ARTICULO OCTAVO.- Los sellados y gastos del presente contrato son a cargo de ambas partes al cincuenta por ciento cada una. A este fin se deja constancia que la tonelada de fruta tiene un valor promedio de \$1.200 (Pesos mil doscientos) la tonelada.-----

ARTICULO NOVENO.- Las Partes expresamente acuerdan que los Anticipos Financieros que LA COMPRADORA otorgue a LA VENDEDORA conforme los términos de la presente serán dentro del marco de la relación comercial de provisión de fruta de LA VENDEDORA y



determinación de la diferencia que exista entre las liquidaciones parciales realizadas con precio de referencia provisorio y la liquidación de ajuste final de Temporada. En dicha oportunidad se practicarán los ajustes correspondientes a los fines del pago de la diferencia por la parte que resulte obligada a hacerlo.- El valor de la fruta calidad exportación, será pactado por las partes en cada campaña de acuerdo a los valores de mercado.- El precio de la fruta será pactado en dólares estadounidenses, tomando la cotización del dólar tipo comprador Banco de la Nación Argentina con el cual S.A. SAN MIGUEL liquide sus exportaciones de productos industriales, y será abonado en pesos, en cheques mediante liquidaciones mensuales.- Una vez practicada cada liquidación la misma estará a disposición de LA VENDEDORA, el día posterior al cierre de cada quincena, en el domicilio de calle Lavalle N° 4001 de esta ciudad, o donde oportunamente lo indique la sociedad COMPRADORA, por medio fehaciente.-----

ARTICULO QUINTO.- La COMPRADORA, se reserva el derecho de rechazar la fruta en caso que la misma no sea adecuada para su destino industrial según la calidad que requieren los mercados internacionales para los subproductos de la misma.- LA VENDEDORA se obliga a informar a LA COMPRADORA los productos usados en los tratamientos sanitarios de la fruta, al igual que los fertilizantes aplicados al suelo, como de todos los productos químicos aplicados en las fincas sujetas al presente contrato.-En todos los casos, los productos utilizados deben ser de aceptación en los mercados a donde se destinan los subproductos que se elaboren con la fruta. El incumplimiento de estas obligaciones dará derecho a la COMPRADORA a aplicar el rechazo previsto en el párrafo anterior e incluso resolver el presente conforme los términos del artículo Décimo Sexto pudiendo exigir LA COMPRADORA el total del saldo deudor del crédito vigente a la fecha de la resolución con más los intereses, costos y accesorios devengados a dicha fecha.- Sobre estas obligaciones LA COMPRADORA, tiene los más amplios derechos de inspección en los inmuebles de propiedad de la VENDEDORA.-----

116
Escuela
Nº 1000

ARTICULO SEXTO.- A solicitud de LA VENDEDORA y para facilitar a esta firma sus labores de mantenimiento general de las plantaciones y cosecha y cualquier otra estrictamente relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente, LA COMPRADORA otorgará un anticipo financiero a partir de la fecha del presente, de hasta la suma de Dólares Estadounidenses Ciento Cincuenta Mil (U\$S 150.000.-) de acuerdo a las necesidades de LA VENDEDORA y conforme ésta lo solicite (de manera indistinta los "Anticipos Financieros" o el "Crédito"). LA VENDEDORA devolverá los Anticipos Financieros conforme lo establecido en el artículo Décimo Tercero del presente. El Crédito será cancelado parcial o totalmente con la fruta cosechada en las campañas 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.-LA COMPRADORA descontará a LA VENDEDORA hasta el 20 % (veinte por ciento) del valor neto de las liquidaciones mensuales por entrega, hasta cubrir los montos totales del crédito otorgado como toda otra cuenta pendiente.-La SOCIEDAD VENDEDORA, se reserva el derecho de cancelar anticipadamente el ó los anticipos recibidos.-----

ARTICULO SEPTIMO.- La circunstancia de que LA COMPRADORA, en alguna liquidación de pago, por el motivo que fuera, no hubiera descontado o lo hubiera hecho solo parcialmente los valores consignados en la cláusula anterior no implica pérdida de este derecho, que podrá ejercer durante todo el lapso de este contrato. Los Adelantos Financieros estarán garantizados conforme los términos de la garantía hipotecaria aquí otorgada y de acuerdo a los intereses aquí pactados.-----

ARTICULO OCTAVO.- Los sellados y gastos del presente contrato son a cargo de ambas partes al cincuenta por ciento cada una. A este fin se deja constancia que la tonelada de fruta tiene un valor promedio de \$1.200 (Pesos mil doscientos) la tonelada.-----

ARTICULO NOVENO.- Las Partes expresamente acuerdan que los Anticipos Financieros que LA COMPRADORA otorgue a LA VENDEDORA conforme los términos de la presente serán dentro del marco de la relación comercial de provisión de fruta de LA VENDEDORA y

VALERIE HOLZ 10-45
Apt 2, Artich 13

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Los desembolsos de los Anticipos Financieros se efectuarán a requerimiento de LA VENDEDORA, previa aprobación de LA COMPRADORA, mediante cheques en pesos por los dólares estadounidenses equivalentes, convertidos a moneda nacional a la cotización del tipo de cambio comprador del dólar estadounidenses establecida por el Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior al

de la fecha del anticipo financiero, con más los gastos que pudieren generarse, a los que LA VENDEDORA presta su expresa conformidad.-----

ARTICULO DECIMO TERCERO.- LA VENDEDORA se obliga a devolver las sumas debidas es decir, el crédito a LA COMPRADORA en cinco (5) cuotas anuales consecutivas de capital de hasta Dólares Estadounidenses Treinta Mil (u\$s 30.000) cada una, con más los intereses, costos y gastos que se devengaren sobre el saldo total de capital debido a cada fecha de pago, en Pesos a la cotización del tipo de cambio comprador del dólar estadounidenses establecida por el Banco de la Nación del día anterior a la fecha de pago, con vencimiento la primera de ellas con fecha 31/07/2017, salvo que a la fecha de pago de alguna de las cuotas el saldo del crédito no alcanzará dicha suma, para lo cual LA VENDEDORA abonará el saldo del crédito existente a dicha fecha con más los intereses, costos y gastos que se devengaren sobre el saldo de capital debido a dicha fecha. Se deja constancia que a los efectos de determinar el Estado, se considerarían los descuentos parciales realizados en los términos del ARTICULO SEXTO. Sin perjuicio de lo establecido en la presente, al momento de cancelar la última de las cinco (5) cuotas, LA VENDEDORA se obliga a cancelar en dicha oportunidad el saldo total del capital adeudado con más los intereses devengados sobre saldos a dicha fecha ello conforme el Estado a dicha fecha, ello de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo. En definitiva, al vencimiento del plazo del Crédito LA VENDEDORA deberá cancelar todo saldo de capital remanente, más interés, aranceles y cargos de toda índole que para este fin se capitalizarán -----

Todos los pagos deberán verificarse en la calle Lavalle N° 4001, domicilio de LA COMPRADORA, o donde éstos más adelante lo indiquen por medios fehacientes.-----

ARTICULO DECIMO CUARTO.- El crédito generará a cargo de LA VENDEDORA un interés anual vencido, cuya tasa nominal anual será del seis por ciento (6%) sobre saldo en

Ala Cristina Zaldarriaga de Navarro
ESCRIBANA PUBLICA
TIT. REGISTRO N° 104 - TUCUMAN

de Navarro
PUBLICA
TUCUMAN

VALOR FOLIO 1045
A 1988, Apart. J.
lec. 2, Artículo 13°

Dólares Estadounidenses, sobre los anticipos dinerarios no aplicándose dicho interés sobre las entregas en productos químicos, por cada año.-----

ARTICULO DECIMO QUINTO.- En garantía del fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de LA VENDEDORA, ya sean principales, accesorias, directas o indirectas, emergentes del crédito y de sus eventuales prórrogas o renovaciones totales o parciales y sin perjuicio de la responsabilidad ilimitada y solidaria que contraen con todos sus bienes presentes y futuros, la SOCIEDAD VENDEDORA se compromete y obliga a constituir derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio a favor de S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I.F., por la suma de CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES sobre el inmueble de su legítima propiedad, con todo lo en el edificado y demás adherido al suelo, ubicado en el lugar denominado ALTO VERDE, MONTE RICO, departamento de CHICLIGASTA de esta Provincia, con una superficie total de QUINCE HECTAREAS, con 6451,8358 m2, identificado con padrón N° 2253.213, inscripto en el Registro Inmobiliario a su nombre en la matrícula Z-10.075.-----

ARTICULO DECIMO SEXTO.- La mora se producirá de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna por incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.- Asimismo provoca la mora de pleno derecho la presentación de LA VENDEDORA en concurso civil o comercial, pedido de propia quiebra o pedida por terceros no levantada en la primera oportunidad posible, el incumplimiento de LA VENDEDORA ante otras obligaciones contraídas con LA COMPRADORA o con terceros, el embargo de bienes de LA VENDEDORA no levantado en la primera oportunidad posible, la falsedad de LA VENDEDORA en su manifestación de bienes o datos considerados en su evaluación crediticia, el desvío de fondos o la negativa a informar sobre el mismo. LA COMPRADORA podrá exigir el cumplimiento o declarar la resolución del presente y ejecutar la hipoteca u

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

otras garantías, en todos los casos con derecho a ajustes monetarios e intereses compensatorio y punitivos.-----

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Los saldos deudores de LA VENDEDORA, amortizaciones, intereses compensatorios y punitivos, aranceles, y cualquier otro concepto que adeude LA VENDEDORA, se liquidarán anualmente en las fechas indicadas en el artículo Décimo Tercero y se exhibirá en un estado de cuenta ("Estado") cuyo saldo deudor importará la deuda líquida de LA VENDEDORA por el respectivo periodo, considerando a los fines de determinar dicho Estado los descuentos parciales realizados a lo largo del periodo correspondiente en los términos del ARTICULO SEXTO. La deuda exigible en cada vencimiento indicado se conforma de la siguiente forma: a) con el monto indicado para ser cancelado en cada uno de los vencimientos conforme el Artículo Décimo Tercero; b) intereses compensatorios y punitivos sobre el total del capital adeudado; c) aranceles y cargos accesorios que puedan corresponder. La deuda exigible en cada liquidación deberá cancelarse a la fecha de vencimiento expresada en el Estado. Al vencer cada una de las cuotas del crédito se emitirá el Estado cuyo saldo deudor importará en total la deuda líquida y exigible pagadera a su vencimiento con más los ajustes e intereses que se generen desde el vencimiento hasta el pago efectivo y cancelatorio.-----

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las partes convienen en que la cancelación anticipada de las obligaciones asumidas en ésta, no generará ningún estipendio adicional.-----

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Las partes se someten a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Miguel de Tucumán o la de los Tribunales correspondientes a la localidad del lugar convenido para el pago del Crédito, o la del lugar en donde se encuentra situado el bien hipotecado, o la del lugar del domicilio de LA VENDEDORA e hipotecante a opción exclusiva de LA COMPRADORA, constituyendo domicilios especiales y legales en los consignados al comienzo de la

Cristina Zaldarriaga de Nisero
ESCRIBANA PUBLICA
TUCUMAN

VALER PERITO
15/15
Nº 2407, art. 3,
art. 13

presente, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y citaciones, judiciales o extrajudiciales que se practiquen.

ARTICULO VIGESIMO.- Las partes manifiestan que tienen pleno conocimiento de las disposiciones de la Ley 25.246 y de la Resolución Nº 52/2012 y sus modificatorias de la Unidad de Información Financiera y que en los términos de la misma dejan constancia de que los datos personales consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad, y que no se encuentran incluidos o alcanzados dentro de la nómina de funciones y cargos de personas expuestas políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera, que se encuentra contenida en el art. 1º de la Resolución UIF citada y que han leído. Asimismo que asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca, dentro de los treinta días de ocurrida, mediante la presentación de nueva declaración jurada.

LUGAR Y FECHA.- De conformidad en la ciudad de SAN MIGUEL DE TUCUMAN, provincia DE TUCUMAN, se firman del presente contrato tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los doce días del mes de Diciembre de dos mil dieciséis.

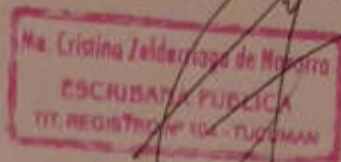
[Three handwritten signatures]

FIRMA/S CERT. HOJA ACT. NOT. Nº 220706132

HECTOR A. COLOMBRES (M.)
ESCRIBANO PUBLICO
* TUCUMAN *



ACTUACION NOTARIAL PARA
CERTIFICACION DE FIRMAS



M 02206132
CE DO DO CE SE UN TR DO

01005 02206132-M

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 12 de Diciembre de 2.016.- En mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO TITULAR DEL REGISTRO N° 30 y en uso de las atribuciones, deberes y facultades, que me confieren las leyes y reglamentaciones vigentes, CERTIFICO:

PRIMERO: que la/s FIRMA/S que antecede/n, y obra/n en el documento al cual se anexa el presente, ha/n sido puesta/s en mi presencia por los señores SEBASTIAN TORRES POSSE, D.N.I. N° 13.417.332; MARTIN ANDRES CARIGNANI, D.N.I. 20.200.121; y JORGE HERNAN SIMON PADROS, D.N.I. N° 8.064.420, a quien/es identifico de conformidad al artículo 306 inciso a), del Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe.-

SEGUNDO: dicha/s persona/s manifiesta/n, actuar de la siguiente manera: los señores SEBASTIAN TORRES POSSE y MARTIN ANDRES CARIGNANI lo hacen en nombre y representación y en su carácter de apoderados de la firma S.A. SAN MIGUEL A.G.L.C.I. y F., C.U.I.T. 30-51119023-8, con domicilio en ésta ciudad en calle Lavalle número 4.001, según lo acreditan con: 1) Testimonio del Estatuto Social inscripto en el R.P.C. bajo el N° 33, de fs. 381/453, Tomo VII del Protocolo de contratos sociales con fecha 09/05/1997.- 2) Acta de Transcripción del expediente N° 700/211-S-11 correspondiente a la reforma estatutaria de SOCIEDAD ANÓNIMA SAN MIGUEL AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA inscripto en el R.P.C. bajo el N° 1, de fs. 1/7, Tomo X del Protocolo de contratos sociales con fecha 17/05/2.012.- 3) El señor SEBASTIAN TORRES POSSE con Poder General de Administración otorgado a su favor mediante escritura número 218 de fecha 20 de Abril de 2015; y el señor MARTIN ANDRES CARIGNANI con Poder General de Administración otorgado a su favor mediante escritura número 826 de fecha 19 de Octubre de 2015; ambas pasadas ante el Escribano ENRIQUE IGNACIO MASCHWITZ (H), de la Ciudad de Buenos Aires; y el señor JORGE HERNAN SIMON PADROS lo hace en nombre y representación y en su carácter de gerente de la firma ARBOL SOLO S.R.L.



ACTUACION NOTARIAL PARA
CERTIFICACION DE FIRMAS



M 02206132
CE DO DO CE SE UN TR DO

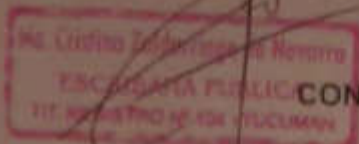
CUIT. 30-70742680-9, con domicilio en calle Fermín Cariolla número 1435, departamento Yerba Buena, de esta provincia, según lo acredita con a) contrato social por instrumento privado de fecha primero de Septiembre de 2.000, inscripto en el Registro Público de Comercio bajo el número 17, desde fojas 93 a 98, del tomo XVI, del protocolo de contratos sociales del año 2.000, con fecha 26 de Octubre de 2.000; b) con la cesión de cuotas por instrumento privado de fecha veintiocho de Marzo de 2.016, y c) con la reunión de socios, cesión de cuotas sociales, designación de gerentes, modificación de cláusula quinta, por escritura número doscientos ochenta y seis, de fecha dos de Junio de dos mil dieciséis, pasada ante la Escribana ELENA MARIA WILDE, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el número 19, desde fojas 266 a 272, del tomo XVIII, del protocolo de contratos sociales del año 2.016, con fecha 14 de Junio de 2.016, documentación que he tenido a la vista para este acto, con facultades suficientes, doy fe.- TERCERO; que el/los requerimiento/s respectivo/s ha/n quedado formalizado/s simultáneamente, por medio de ACTA N° 169, FOLIO N° 169, LIBRO N° 60.- CUARTO; Documento presentado: contrato compraventa de frutas.- Fecha de Expedición: 07 de Marzo de 2.017.



HECTOR A. COLOMBRES (M.)
ESCRIBANO PUBLICO
TUCUMAN

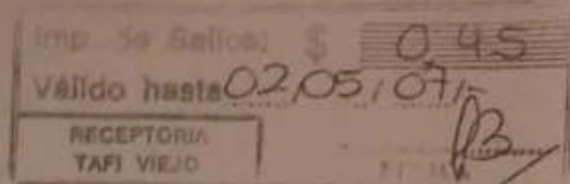
Certifico: que la presente fotocopia es 01 (1/1) fojas,
es fiel a su original que he tenido a la vista. Doy Fe. Conste.-
Yerba Buena - Tuc. 16 de Agosto de 2020

Escritura Pública de Notaría
ESCRIBANIA PUBLICA
DE REGISTRO N° 17 - TUCUMAN



CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO RURAL

SUJETO A REAJUSTE



Entre ARBOL SOLO S.R.L., con domicilio en Monte Rico Viejo, Monte Rico, Departamento Chicligasta, Tucumán; en adelante denominada "la arrendadora" por una parte, representada en este acto por Silvina López Villagra, D.N.I. N° 10.682.096, en su carácter de apoderada, lo que acredita con copia del respectivo Poder, y por la otra LA PAZ S.A., con domicilio en calle Vélez Sarsfield N° 509, Aguilares, Tucumán, en adelante denominada "la arrendataria", representada en este acto por Jorge Hernán Simón Padrós, D.N.I. N° 8.064.420, en su carácter de Apoderado, lo que acredita con copia del respectivo Poder, de común acuerdo resuelven celebrar el presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RURAL, el cual se registrará por las cláusulas y condiciones que a continuación se detallan:

PRIMERA: La arrendadora cede a la arrendataria en arrendamiento los inmuebles rurales de su exclusiva propiedad, que se identifican a continuación:

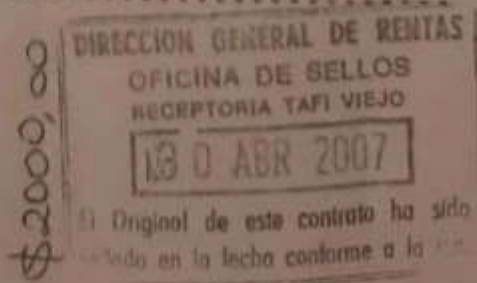
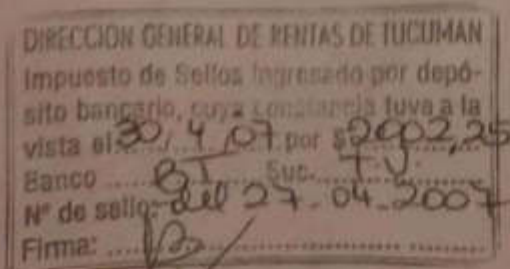
- Un inmueble ubicado en el departamento Chicligasta, provincia de Tucumán, identificado con el Padrón N° 52.707, con una superficie total de 39,66 has.
- Un inmueble ubicado en el departamento Chicligasta, provincia de Tucumán, identificado con el Padrón N° 55.027, con una superficie total de 107,96 has.
- Un inmueble ubicado en el departamento Chicligasta, provincia de Tucumán, identificado con el Padrón N° 253.213, con una superficie total de 15,64 has.

SEGUNDA: La arrendataria, que acepta el inmueble en el estado en que se encuentra, destinará el predio arrendado a la explotación agrícola ganadera, en cualquiera de sus variantes.

TERCERA: El precio del presente arriendo se fija en un porcentaje del diez por ciento (10%) sobre el total de la producción que obtenga la arrendataria en la explotación del inmueble arrendado. Dicho precio será acordado el día 31 de mayo de cada año, pudiendo ser abonado en especie o en dinero en efectivo, a opción de la arrendadora, para lo cual se tomará el valor de mercado de los productos producidos vigentes a esa fecha o el día hábil siguiente, neto de gastos de comercialización y flete.

El precio establecido deberá ser abonado, si el pago fuera en efectivo, o la mercadería entregada si el pago fuera en especie, antes del 31 de Diciembre del respectivo año.

CUARTA: El plazo del presente arriendo se establece en diez (10) años, contados a partir del día 1° de octubre de 2006, fecha a la cual las partes retrotraen los efectos de este contrato, venciendo en consecuencia el 30-09-2016.

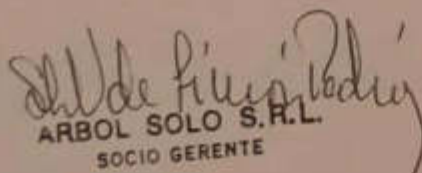


QUINTA: A todos los fines del presente contrato, las partes constituyen domicilio especial en los arriba indicados, donde se considerarán perfectamente válidas todas las intimaciones y/o notificaciones que por cualquier motivo se cursaren. -----

SEXTA: Por cualquier controversia que surgiera con motivo del incumplimiento, ejecución y/o interpretación del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Centro Judicial Concepción, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles. -----

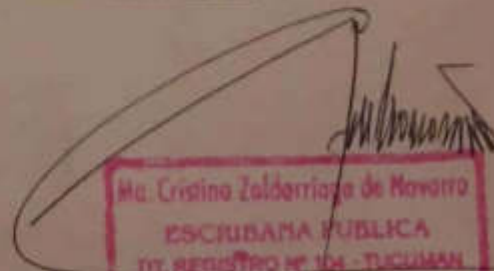
SEPTIMA: Las partes, de común acuerdo, fijan el valor del presente contrato en la suma de \$ 100.000.- (pesos cien mil) a efectos de su sellado, el que será soportado íntegramente por la **arrendataria**. --

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor en la ciudad de Aguilares, Provincia de Tucumán, República Argentina, a los 16 días del mes de Abril de 2007.


ARBOL SOLO S.R.L.
SOCIO GERENTE


A. PAZ S.A.
APODERADO

Certifico: que la presente fotocopia en 005/1 fojas,
es fiel a su original que he tenido a la vista. Day Fa. Conste.-
Verba Buena - Tuc. 18 de Agosto de 2007


Ma. Cristina Zalderriga de Navarro
ESCRIBANA PUBLICA
NT. REGISTRO Nº 104 - TUCUMAN

Expediente: 67/20

Carátula: ARBOL SOLO S.R.L. C/ NIEVA, MIGUEL ALBERTO Y OTROS S/ ESPECIALES (RESIDUAL)

Unidad Judicial: JUZGADO DEL TRABAJO I C.J.C.

Tipo Actuación: SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN

Juzgado del Trabajo I C.J.C.

ACTUACIONES N°: 67/20



H20901452352

LES

JUICIO:ARBOL SOLO S.R.L. c/ NIEVA, MIGUEL ALBERTO Y OTROS s/ ESPECIALES (RESIDUAL)
– Expte. N° 67/20

Concepción

AUTOS Y VISTOS:

Las presentes actuaciones que se encuentran a despacho para resolver, de cuyo estudio surge

RESULTA:

Que en fecha 04/09/2020 se presenta el Dr. Ignacio Jose Silvetti como apoderado de la firma Arbol Solo SRL y deduce incidente de tercería de dominio en los términos del art. 94 y c.c. del CPC y C supletorio al fuero, en contra Miguel Alberto Nieva, DNI: 17.537.072 domiciliado en B° Santa Emilia S/N de la localidad de Alto Verde, La Paz SA. con domicilio en Velez Sarfield 509 de la ciudad de Aguilares (ambos sujetos pasivos según 95 CPCyC) y de la Dra. Silvia Adriana Faiad domiciliada en Italia 1397 de la ciudad de Concepción (la legitimación pasiva de la letrada deviene de las sentencias de fecha 26/06/2019 y 01/10/2019, quien además presto caución juratoria por la medida). Solicita el levantamiento del embargo dispuesto por sentencia de fecha 01/10/2019 llevado a cabo el 27/12/2019.

Manifiesta que la cuestión planteada tiene relación en lo que pueda resolverse en el expte. N° 398/15 y su incidente 398/15-I1. Aclara que mediante la sentencia denegatoria el juez de primera instancia interpretó que su mandante no logró acreditar la posesión de los bienes muebles ni la identidad de los mismos, pese a la documentación que se acompañó. Fundamenta su pedido en el hecho que la razón social Arbol Solo SRL es legítimo propietario y poseedor de los inmuebles matriculas Z-5686 y 5685 donde se ordenó el embargo y que el 17/03/2003 celebró un contrato de compraventa con la firma La Paz SA por el cual transfería la propiedad de los inmuebles mencionados. Recalca que acompaña facturas de fecha 10/09/2003 y 19/12/2003 que acreditan la compra de los bienes a Agrícola Ruivel SRL. Hace reserva de reclamar daños y perjuicios. Ofrece pruebas. Efectúa petitorio.

En 31/03/2022 responde el traslado la letrada Silvia Adriana Faiad por derecho propio y en representación del señor Miguel Alberto Nieva. Contesta la tercería negando en forma particular y general los hechos invocados por la contraria. Al relatar su versión de los hechos manifiesta que al

momento de la traba del embargo los bienes muebles se encontraban en posesión de la razón social demandada La Paz SA. Resalta que, si bien la incidentista afirma que las fincas fueron adquiridas en el año 2003 siendo las facturas de los bienes del mismo año, se dejó establecido en sentencia de fondo que la razón social La Paz SA explotaba esas fincas cuando el actor trabajó entre 2009 a 2013, cuando se da por despedido. Ofrece pruebas. Solicita se rechace la demanda porque la tercerista no era propietaria ni se encontraba en posesión de los bienes muebles al momento de la traba del embargo y se impongan las costas a Arbol Solo SRL.

Conforme decreto de fecha 01/08/2022, los presentes autos se encuentran a despacho para resolver.

CONSIDERANDO:

La tercería es la intervención de una persona ajena en un proceso judicial, que se ve perjudicada y formula una pretensión en el litigio incompatible con las demás pretensiones. Desde un punto de vista procesal, el tercero es aquel que no es parte, pero a la vez tiene un interés legítimo en el objeto de discusión y es digno de amparo jurídico.

La legitimación activa para iniciar el procedimiento de tercería de mejor derecho, recae sobre el propietario de un bien que es embargado en un procedimiento de ejecución, del que no es parte, como si el bien perteneciera a un tercero. La promoción de la tercería se explica y justifica como acción por la aspiración de los terceristas de hacer prevalecer su derecho, en el caso, la condición de propietarios que invocan y que resulta desconocida por la cautelar que procuran dejar sin efecto.

Como terceros en el proceso les corresponde proporcionar los medios que acreditan infundada la asignación de propiedad sobre la que se asienta la medida, es decir sustentar la titularidad que alegan.

Analizadas las posiciones de las partes y las pruebas producidas, resulta necesario establecer que:

1.- Lo planteado por el incidentista como tercería de dominio, no es tal. De las constancias de autos surge que la medida cautelar ordenada por sentencia de fecha 26/06/2019 y su ampliatoria del 01/10/2019, es un embargo sobre bienes muebles ubicados en la propiedad sita en Finca Monte Rico de la localidad de Alto Verde provincia de Tucumán.

En dicho inmueble se procedió a embargar y secuestrar una cisterna de agua de 4.000 litros con tanque de acero inoxidable, mangueras y bomba montado sobre un chasis de dos ejes color verde, un tractor marca Fiat de color naranja, una máquina fumigadora de un eje y dos ruedas con tanques de 400 litros cada uno con sus respectivas bombas, un tanque de acero de 1.500 litros y dos ruedas, una podadora, una máquina abonadora marca Audi con dos tanques color amarillos montados sobre dos ruedas y un carro volquete sobre un eje de cuatro ruedas (conforme acta de fecha 27/12/2019).

2.- Con respecto al bien embargado y su posesión, si bien, el incidentista incorporó las facturas (de fecha 10/09/2003 y 19/12/2003) que prueban la compraventa (no la entrada en dominio ni la posesión de los mismos) de varios bienes muebles en cuestión, cabe aclarar que los mismos no se encuentran debidamente individualizados en el instrumento como prueba acabada que se trata efectivamente de los bienes embargados. Asimismo, observo que en la sentencia definitiva de los autos 398/15 surge demostrado que la razón social La Paz SA explotaba las fincas, donde se encontraban los bienes embargados, cuando el actor trabajó en las mismas entre el año 2009 y 2013, momento en que se da por despedido. Es decir, con posterioridad a supuestas adquisiciones de los bienes muebles e inmuebles efectuados por la firma Arbol Solo SRL.

Por otro lado la adquisición del inmueble donde se encontraban los muebles embargados no acredita el dominio sobre los mismos, dado que la demandada continuó en la tenencia del inmueble y por

ende de los muebles que se encontraban en el local -

Por todo ello, no habiéndose acreditado efectivamente la propiedad de los bienes muebles embargados en cabeza del incidentista, corresponde no hacer lugar a la tercería y denegar el levantamiento del embargo y así lo declaro.

CAMARA CIVIL EN DOC. Y LOCACIONES Y FAMILIA Y SUCES. - CONCE - Sala en lo Civil en Documentos y Locaciones DIAZ TERESITA EUGENIA Vs. DIAZ FRANCISCO MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO (INCIDENTE TERCERIA DE DOMINIO Nro. Expte: 814/16-II

Nro. Sent: 76 Fecha Sentencia 05/07/2019 TERCERIA DE DOMINIO: BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES. LA POSESION COMO TITULO SUFICIENTE. DISCREPANCIA ENTRE EL ACTA DE EMBARGO Y EL INVENTARIO DEL INCIDENTISTA. PRUEBA A CARGO DEL TERCERISTA. RECHAZO DEL INCIDENTE. Tratándose de bienes muebles no registrables, los que resultan ser embargados en el sub lite, entendemos que debe tenerse presente lo dispuesto por el art. 1895 del Cód. Civil y Comercial de la Nación, que mantiene la regla del anterior art. 2412 del Cód. Civil, condensada en la conocida expresión “posesión vale título”. Es decir, la posesión de buena fe de una cosa mueble crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella. Se establece no sólo una presunción irrefragable de propiedad a favor del poseedor de cosas muebles, sino también de la legitimidad de ella y de la buena fe de quien posee, extremos que se presumen “iuris tantum” y pueden ser objeto de prueba en contrario (Salas - Trigo Represas, López Mesa, “Código Civil Anotado”, T. 4 “B”, pág. 21) (cfr. CDLTuc., Sala 2, Mag. Manca - Alonso, [“Credimas S.A. c/ Vuotto José Manuel s/ Cobro Ejecutivo, sent. 19/04/2007”](#)). De allí, que la cuestión debe dirimirse en el terreno de la posesión de las cosas muebles al momento de realizarse la traba de la cautelar. Por lo tanto, tratándose de esos bienes, es suficiente que el tercero demuestre que al momento de la traba del embargo se encontraba en posesión de los mismos amparándose en la presunción legal, corriendo a cargo del embargante la prueba en contrario (CNCom., Sala B, 1987/09/11, La Ley 1988-A-351 -DJ, 988 -1-709; Ídem CNCiv., Sala L, 1994/12/02, La Ley 1995 -C, 86 - DJ, 1995 -2-235) atendiendo a las constancias de autos, en especial del acta de embargo del expediente principal y del escrito de interposición de Tercería de Dominio en el que detallan los bienes sobre los que solicita la restitución y levantamiento de embargo observa el Tribunal - que el detalle de su individualización y características detalladas en el acta de embargo-, que estos no se corresponden con los individualizados en el inventario y que fuera acompañado como parte integrante del boleto de compraventa de bienes muebles adjuntado en el escrito de demanda Al no haber concordancia de las características, entre la individualización de los bienes inventariados cuyo levantamiento de embargo se solicita y los bienes detallados en el acta de embargo, el tercerista debió entonces ofrecer las pruebas tendientes a acreditar que los bienes embargados detallados en el acta, eran los mismos que se encontraban inventariados en el instrumento.- DRES.: SANTANA ALVARADO - AGUILAR DE LARRY.

Costas, atento al resultado arribado, deberán ser soportadas por el incidentista, en virtud del principio de derrota art. 105 CPC y C supletorio al fuero.

Honorarios: reservar pronunciamiento para su oportunidad.

Por ello,

RESUELVO:

I) NO HACER LUGAR al Incidente de Tercería de Mejor Derecho promovido por el letrado Ignacio Jose Silvetti, apoderado de Arbol Solo SRL, por lo considerado.

II) COSTAS, como se consideran.

III) HONORARIOS, reservar pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER:

ANTE MI.

Actuación firmada en fecha 10/08/2022

NRO. SENT.: 166 - FECHA SENT.: 10/08/2022

Certificado digital:
CN=ROBLEDO Guillermo Alfonso, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20142264286

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.

Expediente: 67/20

Carátula: ARBOL SOLO S.R.L. C/ NIEVA, MIGUEL ALBERTO Y OTROS S/ ESPECIALES (RESIDUAL)

Unidad Judicial: EXCMA. CÁMARA DEL TRABAJO SALA II C.J.C.

Tipo Actuación: INTERLOCUTORIAS (A PARTIR DE LA LEY 8988 CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO)

Fecha Depósito: 04/11/2022 - 05:32

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

20284766521 -

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN

Excma. Cámara del Trabajo Sala II C.J.C.

ACTUACIONES N°: 67/20



H20912472996

JUICIO: ARBOL SOLO S.R.L. c/ NIEVA, MIGUEL ALBERTO Y OTROS s/ ESPECIALES (RESIDUAL). EXPTE. 67/20

CONCEPCIÓN, 03 DE NOVIEMBRE DE 2022

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal del tercerista Arbol Solo SRL, en contra de resolución interlocutoria n° 166 dictada en fecha 10/08/2022, y

CONSIDERANDO

1- Que mediante sentencia interlocutoria n° 166 dictada en fecha 10/08/2022 se resuelve no hacer lugar al incidente de tercería de dominio promovido por el letrado Ignacio Jose Silvetti, apoderado de Arbol Solo SRL

2- El tercerista funda su recurso de apelación expresando lo siguiente:

En primer lugar que se agravia de la sentencia en crisis por cuanto se afirma en la misma que, lo planteado por su parte como tercería de dominio no es tal, sin ningún tipo de fundamento legal y sin hacer la categorización del proceso que considera correcta. Situación que deja a su parte indefensa al no saber a que proceso o normativa quedaría supeditado su derecho y su pretensión.

Que la sentencia reconoce que su parte es un tercero en el proceso que se presenta a reclamar un derecho que ha sido vulnerado (propiedad) el cual fue afectado por la medida de embargo trabado por el Sr. Nieva a través de su letrada quien personalmente prestó caución. Que entonces por definición del art. 94 CPCC estamos ante una tercería de dominio.

Que la Sra. Juez entienda que no se ha logado acreditar la propiedad del bien (porque no se habría logrado probar la posesión de los bienes muebles) no puede cambiar la naturaleza del proceso ni del derecho sustancial (derecho de dominio) vulnerado.

En su segundo lugar se agravia de la resolutive bajo análisis en cuanto dispone respecto a los bienes embargados, que si bien se incorporaron facturas que prueban la compraventa de varios bienes muebles los mismos no fueron debidamente individualizados en el instrumento como prueba acabada que se trata efectivamente de los bienes embargados. Que sin embargo la sentencia no invoca ningún argumento por el cual su pretensión deba ser rechazada.

Que el defectuoso detalle de los bienes embargados realizados en el acta de traba de la medida cautelar no puede ser imputado a su parte y menos aún, como argumento del rechazo del levantamiento de embargo o como defensa a la acción de la tercería en cuestión.

Que según la sentencia de fecha 01/10/2019 dictada en el proceso iniciado por el Sr. Nieva, su letrada estaba autorizada a denunciar los bienes, que a ella le correspondía identificar debidamente los bienes que embargaba para que luego puedan ser debidamente individualizados tanto como para realizar el secuestro y posterior subasta de los bienes y de esta manera resguardar los derechos de las partes y de terceros.

Que como la letrada Faiad no ha detallado los bienes indicando por ejemplo el número de chasis, de motor, color, dominio, etc. o bien tomado el recaudo de tomar fotografías de los bienes que permitan su posterior identificación, no puede entonces invocar su torpeza como fundamento de su defensa y mucho menos como argumento de la sentencia de rechazo de la tercería.

Que asimismo, si en la factura se indicaba por ejemplo el color, número de chasis y motor del tractor, tampoco habría sido suficiente porque en el acta de embargo y secuestro labrada en fecha 27/12/2019 solo se indica un tractor naranja marca Fiat sin indicación de modelo, número de chasis o motor. Que jamás podría existir el grado de coincidencia que requiere la sentencia lo cual es consecuencia de la insuficiente descripción de los bienes que se realiza en el acta de fecha 27/12/2019 imputable a la letrada Faiad y al Sr. Nieva.

Que el excesivo rigorismo formal coloca a su parte en una situación de indefensión. Que lo resuelto también atenta contra el principio según el cual las medidas cautelares solo se otorgan bajo estricta responsabilidad de quien la solicita. Que esta responsabilidad está dada para que el embargante sea diligente en la traba de la medida y que, con su accionar no perjudique a terceros ajenos al proceso o al propio condenado más allá del derecho reconocido en la sentencia.

Que por otro lado, la propia sentencia que ordenaba el embargo lo hacía siempre y cuando fueran de propiedad de La Paz SA, que ni la letrada Faiad ni el Sr. Nieva han acreditado que los bienes embargados sean de propiedad de La Paz SA.

En tercer lugar refiere que, para que exista derecho de dominio se requiere la existencia del título y modo. Que el título está dado por la compraventa de los bienes muebles embargados instrumentado con las facturas que acompaña. Que el modo se encuentra acreditado desde el primer intento de trabar la medida y en el momento en que se trabó el embargo, ya que cuando llegaron al inmueble se le informó a la apoderada del actor que el campo pertenecía a Arbol Solo SRL. Que sin perjuicio de ello, la sentencia omite hacer una aplicación de las normas que regulan el momento en que se adquiere la posesión de los bienes muebles.

Que por aplicación de lo dispuesto por el art. 1145 CCCN la factura de compra es el título de propiedad de las cosas muebles y es la prueba formal de su existencia (art. 1020 CCCN). Cita arts. 1903, 1914, 1925 y cc. del CCCN a los cuales me remito en honor a la brevedad.

Refiere que la sentencia recurrida omite aplicar los alcances del art. 1895 CCCN que establece que la posesión de buena fe de bienes muebles es suficiente para adquirir el dominio sobre ellos. Que cualquier prueba en contrario debe recaer sobre la parte y no en Arbol Solo SRL como

arbitrariamente se hace en la sentencia. Cita jurisprudencia.

Sostiene que Arbol Solo SRL acreditó la propiedad del inmueble con la correspondiente escritura de dominio y como acto posesorio acompañó el contrato de arriendo celebrado con La Paz SA, la cual sostiene que jamás puede ser considerada como poseedora del campo y de los bienes muebles que se encuentran en su interior.

Señala que en el expediente no se ha probado que La Paz SA haya sido propietaria del inmueble en el que se realizó la medida, que solo se acreditó una tenencia la cual no es suficiente para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados. Que en consecuencia no puede presumirse que La Paz SA hubiese tenido la posesión de la finca y que esta se conservase luego de siete años de vencido el contrato de arriendo.

Que el arriendo no le daba a La Paz SA la posesión del inmueble, que al momento de trabarse el embargo, La Paz SA no estaba en tenencia del inmueble ya que, conforme contrato de arriendo, el plazo había vencido.

Que por lo tanto, el contrato de arriendo y la prestación de servicios en fincas de terceros realizados muchos años antes del embargo, no pueden ser hechos que hagan presumir que los bienes muebles que se encuentran en el campo de un tercero son de propiedad de La Paz SA.

Que la sentencia realiza una reversión de la carga de la prueba en contra del texto de la ley violado el debido proceso, afectando el derecho de defensa de su parte y su derecho de propiedad. Por lo que solicita se revoque la sentencia, se disponga hacer lugar a la tercería de dominio y el inmediato levantamiento de embargos trabados sobre los bienes muebles de propiedad de Arbol Solo SRL.

3- Corrido traslado del respectivo memorial de agravios presentado por el recurrente, la parte actora responde en fecha 13/09/2022, solicitándose el

rechazo del recurso interpuesto, por los motivos que se exponen, a los que nos remitimos por razones de brevedad.

Elevada la causa y radicada en la Sala II de esta Cámara, mediante proveído del 14/09/2022, se integra el Tribunal, ordenándose el pase de los autos a despacho para resolver. Firme la misma, queda la cuestión en estado de ser resuelta.

4- El recurso deducido cumple con los requisitos de oportunidad y forma previstos en los artículos 122, 124 y 125 del Código Procesal Laboral -C.P.L.- por lo que corresponde su tratamiento, dejando establecido que, con relación a la causa, las facultades del tribunal están limitadas por las cuestiones materia de agravios.

En primer lugar señalaré que Árbol Solo SRL es propietaria del inmueble donde el actor prestó servicios, donde se encontraban los bienes muebles sobre los que se trabó embargo. En efecto, conforme copia de escritura e informe de dominio (certificado por escribano) presentados en autos, dicha firma es titular de ese inmueble desde el 17-3-03.

En efecto, de ese documento surge que la firma Árbol Solo SRL, representada por Jorge Simón Padrós, compró esa finca a la firma La Paz SRL, representada por Silvina María López Villagra de Simón Padrós.

También queda claro que la firma arrendó ese inmueble un tiempo después a la firma La Paz SRL- es decir, a la misma empresa que le había vendido ese terreno-. En esta oportunidad, nuevamente, la Sra. Villagra de Simón Padrós y Jorge Simón Padrós representan a las sociedades mencionadas.

Esto ocurrió, según el tercerista, el 16-4-06. La parte demandada negó en forma específica la autenticidad del contrato adjuntado en autos, y no se produjo prueba para probar ese extremo. Sin embargo, en virtud de que en la sentencia recaída en el principal se determinó que el actor trabajó para La Paz SRL, y que lo hacía en inmuebles arrendados a tal fin por su empleadora, para mí no quedan dudas de que, efectivamente, como lo señala el tercerista, Árbol Solo SRL arrendó a La Paz SRL el inmueble sito en Monte Rico, padrón 55.027.

Además, durante ese contrato, La Paz SRL procedió a contratar al Sr Nieva como empleado. Posteriormente, el contrato de trabajo se extingue, en 2013.

Tiempo más tarde -el 30-9-16, según el tercerista-, el contrato de locación finaliza, y La Paz SRL deja de ser arrendataria del inmueble.

Luego de ello, en forma casi inmediata, Árbol Solo SRL retoma la explotación de la finca por sí, conforme su propia versión, adjuntando a tales fines un contrato de compra venta de fruta celebrado con SA San Miguel.

La primera conclusión que extraigo de todo ello es que, efectivamente, en todos esos años el dominio del inmueble -y con ello, la posesión- perteneció a Árbol Solo SRL. Cuando ésta da en arriendo el inmueble, solamente entrega la tenencia a La Paz SRL, quien no se convierte por ello en poseedor, pues reconoce el dominio del inmueble en cabeza del arrendador, siendo aquella, por su carácter de arrendataria, un mero tenedor. Igualmente, al momento de trabarse el embargo, ya La Paz SRL había restituido el inmueble a su propietario.

Así, y aplicando el principio jurídico de que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, y teniendo en cuenta, claro está, que el inmueble no se encontraba arrendado ya al momento de la traba del embargo -porque si lo hubiera estado esos bienes podrían pertenecer al arrendatario, no siendo aplicable aquél principio en ese caso-, cabe presumir que los bienes muebles que se encontraban en dicha finca también pertenecen al titular de la misma, conclusión que cedería en casos específicos que no han sido siquiera invocados en autos, y que eventualmente deberían ser probados, en este caso, por la codemandada (cfr. CNCom., Sala B, 1987/09/11, La Ley 1988-A-351 -DJ, 988 -1-709; Ídem CNCiv., Sala L, 1994/12702, La Ley 1995 -C, 86 - DJ, 1995 -2-235).

Es decir, entiendo que el tercerista acredita la posesión de los bienes muebles embargados no con las facturas adjuntadas en autos -cuya autenticidad fue negada en forma específica por la contraparte, y no se produjo prueba para acreditar tal extremo-, sino al probar que es titular de dominio del inmueble donde se encontraban esos bienes, siéndole aplicable, entonces, el principio que rige en materia de cosas muebles que establece que “posesión vale título”, jugando tal presunción a su favor.

Sin perjuicio de lo expresado, considero que el recurso no debe prosperar, es decir, debe confirmarse la sentencia de primera instancia, pero por las razones que paso a exponer.

Ya señalé que Árbol Solo SRL le arrendó la finca a La Paz SRL en 2006, y que esta firma, a su vez, contrató al Sr Nieva como empleado en 2009, y que luego lo despidió en 2013. Posteriormente -y antes de la traba del embargo en autos- La Paz SRL dejó de ser arrendataria del inmueble.

En ese contexto, para mí resulta aplicable el art 227 LCT -y alguna breve mención al respecto sobre ello hace la parte codemandada al contestar la tercera-, porque ha existido una doble transferencia del inmueble o finca donde trabajaba el actor. La primera de ellas se produjo en 2006, cuando aún el Sr Nieva nada tenía que ver; la segunda, en 2016 -según la versión de la incidentista-, cuando ya el

contrato de trabajo se había extinguido. Obsérvese que Árbol Solo SRL, entonces, da en arriendo el inmueble en 2006, para luego recibir de nuevo el mismo, casi 10 años después, y continuar explotándolo como tal, conforme su propia versión, al contratar con SA San Miguel, el 12-12-16.

Se da en el caso, entonces, una doble transferencia. De Árbol Solo a La Paz (en 2006), y de La Paz a Árbol Solo (2016).

El artículo 227 LCT, en su último párrafo, dice: “ Al vencimiento de los plazos de éstos, el propietario del establecimiento, con relación al arrendatario () asumirá las mismas obligaciones del artículo 225, cuando recupere el establecimiento cedido precariamente”

Al respecto, doctrina cuyo criterio comparto, ha dicho, refiriéndose a las transferencias transitorias: “ según Vazquez Vialard, podría decirse que en las transmisiones transitorias, “las partes han decidido no una transferencia, sino dos, que producen sus efectos en tiempos distintos”. La primera es la que opera como consecuencia de la etapa inicial del negocio concertado; en virtud de ella, el adquirente se subroga en el rol de empleador que tenía su contratante. Al vencer el plazo fijado en el acuerdo celebrado (segunda etapa), se produce una nueva transferencia, de signo contrario a la anterior, en la que el empleador originario recupera ese rol que durante un tiempo había dejado de ejercer; en otras palabras, la titularidad de la unidad productiva (y con ella, su carácter de empleador respecto de las relaciones laborales) revierte a su persona. Al producirse esa reversión, el propietario o cedente asume (o mejor dicho, reasume) el carácter de empleador, no solo respecto de los trabajadores que habían sido contratados por él, sino también respecto de los que fueron contratados por el locatario o cesionario (). Así, por ejemplo, los trabajadores arbitrariamente despedidos por el locatario pueden reclamar las indemnizaciones respectivas tanto a éste como al locador “ (“Curso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”, Adrian Goldin, Ed. La Ley, 2009, pag 478/9).

Considero que ese sistema de responsabilidad, aplicable a las transferencias transitorias, tiene pleno fundamento, por cuanto de no ser aplicado, podría producirse una laguna en el sistema de responsabilidad ante las transferencias de establecimientos que perjudique al trabajador, dejándolo indefenso ante posibles maniobras defraudatorias.

En conclusión, el actor tiene derecho a agredir el patrimonio tanto de quien fue su empleador -La Paz SRL- como el de quién debe responder solidariamente -Árbol Solo SRL-, en razón de las transferencias transitorias efectuadas.

Destaco que al momento en que Árbol Solo SRL dice que se había terminado el arriendo, las obligaciones emergentes de la relación laboral habida entre éste y su arrendataria estaban plenamente vigentes, aunque no así la relación laboral, que se había extinguido en 2013. En ese sentido, el plenario “Baglieri”(CNAT, 1995) - cuyo criterio es casi unánimemente aceptado- sostiene: “ Cuando al momento de la transferencia existen obligaciones pendientes, se produce la solidaridad de quien recibe la transferencia, ya que la lectura del art. 228 LCT no puede limitarse a los contratos de trabajo existentes. En efecto, dicha norma menciona "obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión" con lo cual la solidaridad se produce aún cuando el contrato de trabajo se hubiera extinguido”. Es el criterio seguido también por la CSJT (“Ibañez Oscar Santiago vs. Curia Hnos. S.H. y otros s/cobro de pesos”, Sent. N° 1774, de fecha 21/11/2017).

Asimismo, el carácter de “establecimiento” -en el sentido de “unidad técnica productiva, art. 6 LCT- que tiene la finca donde trabajaba el Sr Nieva queda demostrado con la cláusula 2° del contrato adjuntado por la incidentista, en el cual se deja establecido que el inmueble arrendado será destinado a la “explotación agrícola ganadera”; asimismo, el convenio establecía que la arrendataria debía abonar el 10% de lo obtenido como canon. Con esto quiero decir que queda demostrado que Árbol Solo SRL en algún momento (2016-2021) pudo explotar por sí misma el inmueble de Monte Rico

(para cumplir con SA San Miguel), y en otro momento (2006-2016) decidió arrendar ese inmueble a un tercero (La Paz SRL), por lo que queda claro que la firma (es decir, una sociedad comercial) tiene como objeto la actividad agrícola y que el fundo de Monte Rico es, efectivamente, una unidad productiva de su titularidad que explota por si misma o arrendándolo.

Al respecto, tiene dicho la jurisprudencia (SCBA- LP- L- 89651 S- 11/07/2012/ "Salum, María A. y otras c/Sanatorio Argentino del Plata S.A. s/Despido"- Tribunal Origen: TT0300LP) que "la circunstancia de que no hubiera mediado una cesión del fondo de comercio entre el transmitente y el adquirente en modo alguno obsta a la configuración de la transferencia del establecimiento en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula un mecanismo especial de responsabilidad por las obligaciones laborales que -por expresa disposición legal- opera de pleno derecho en caso de transmisión "por cualquier título" del establecimiento (art. 225 LCT), incluso cuando ella se produzca "a título precario o por cualquier otro modo" y "cualquiera sea la naturaleza y carácter" (art. 228, LCT) del contrato que origine la transferencia".

En conclusión, rige, según mi criterio, el art 227 LCT para el caso que nos ocupa, razón por la cual, reitero, el Sr Nieva puede procurar el cobro de su crédito, reconocido judicialmente, persiguiendo o agrediendo no sólo el patrimonio

de su ex empleadora, sino también de la firma Árbol Solo SRL, en razón de su responsabilidad solidaria.

Por lo expuesto, considero que la sentencia de primera debe ser confirmada.

Costas: Las mismas se imponen íntegramente a la apelante vencida (artículos 49 del C.P.L., 107 y cc. del C.P.C.C. de aplicación supletoria al fuero).

Por ello, se

R E S U E L V E

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por Árbol Solo SRL, en contra de la sentencia n° 166 de fecha 10/08/2022, la que se confirma en lo que fue materia de agravios, en mérito a lo considerado.

II) COSTAS, como se consideran.

III) HONORARIOS, oportunamente.

HAGASE SABER

PEDRO PATRICIO STORDEUR

MALVINA MARIA SEGUI

Actuación firmada en fecha 03/11/2022

NRO. SENT.: 148 - FECHA SENT.: 03/11/2022

Certificado digital:
CN=KARSCHTI Luis Francisco, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20271426071

Certificado digital:
CN=STORDEUR Pedro Patricio, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20235184061

Certificado digital:
CN=SEGUÍ Malvina María, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27126757099

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.

Expediente: 67/20

Carátula: ARBOL SOLO S.R.L. C/ NIEVA, MIGUEL ALBERTO Y OTROS S/ ESPECIALES (RESIDUAL)

Unidad Judicial: EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SECRETARÍA JUDICIAL - LABORAL - CJC

Tipo Actuación: FONDO CORTE

Fecha Depósito: 23/06/2023 - 05:02

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

20284766521 - ARBOL SOLO S.R.L., -ACTOR

20217459770 - LA PAZ S.A., -DEMANDADO

27144658545 - NIEVA, MIGUEL ALBERTO-DEMANDADO

ACTUACIONES N°: 67/20



H20932505391

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN

CASACIÓN

Provincia de Tucumán, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Contencioso Administrativo, Laboral, Civil en Documentos y Locaciones y Cobros y Apremios, integrada por los señores Vocales doctores Daniel Leiva, Claudia Beatriz Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos, bajo la Presidencia de su titular doctor Daniel Leiva, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "*Árbol Solo S.R.L. vs. Nieva, Miguel Alberto y otros s/ Especiales (residual)*".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctoras Eleonora Rodríguez Campos y Claudia Beatriz Sbdar y doctor Daniel Leiva, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora Vocal doctora Eleonora Rodríguez Campos, dijo:

I.- Árbol Solo SRL, actor en autos, plantea recurso de casación el 14/11/2022, contra la Sentencia N° 148 de la Cámara de Apelación del Trabajo del Centro Judicial Concepción, Sala II, del 03/11/2022. El recurso fue declarado admisible por resolución del referido Tribunal de fecha 05/12/2022 y una vez radicados los autos ante este Tribunal, ninguna de las partes presentó la memoria facultativa que autoriza el artículo 137 del Código Procesal Laboral (en adelante, CPL), de acuerdo a lo informado por la señora Actuaría el 07/02/2023.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Contencioso Administrativo, Laboral, Civil en Documentos y Locaciones y Cobros y Apremios como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por la Cámara, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto dentro del plazo que consagra el artículo 132 del CPL; el escrito recursivo se basta a sí mismo; el afianzamiento no resulta exigible en autos; la impugnación se motiva en la supuesta infracción a normas de derecho y arbitrariedad; la sentencia cuestionada es equiparable a definitiva en tanto pone fin al incidente de tercería de dominio (en sentido similar, CSJT, "Falivene Constructora S.R.L. vs Consorcio Barrio Vial Tres s/cobro de pesos", Sentencia N° 394 del 08/06/2010; "García Manuel vs Ramírez José Antonio vs Rodríguez Dante Daniel y otro", Sentencia

N° 525 del 03/6/2014; “Sucesión de Flomenbom de Dimond Sara Dimond Jorge Raúl vs Lizárraga Armando Manuel c/Kadima y/o Bach Ricardo Alberto s/Tercería”, Sentencia N° 848 del 28/08/2014; “Bulacio María Teresa vs López Julia María s/Despido. Incidente de Embargo Preventivo promovido por la Actora”, Sentencia N° 64 del 11/02/2015; “García Manuel vs Ramírez José Antonio c/Rodríguez Dante Daniel y otro s/Tercerías”, Sentencia N° 1026 del 01/09/2016, entre muchas otras), y denuncia violación de la cosa juzgada que asume gravedad institucional. Consecuentemente, el recurso es admisible y corresponde abordar su procedencia.

III.- La sentencia recurrida dispuso no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Árbol Solo SRL contra la sentencia N° 166 de fecha 10/08/2022. En este último pronunciamiento, el Juzgado del Trabajo del Centro Judicial Concepción de la Primera Nominación dispuso no hacer lugar al Incidente de Tercería de Mejor Derecho promovido por el letrado Ignacio José Silvetti, apoderado de Árbol Solo SRL.

Para así resolver consideró que Árbol Solo SRL es propietaria del inmueble donde el actor prestó servicios, donde se encontraban los bienes muebles sobre los que se trabó embargo, según surge de la copia de escritura e informe de dominio. Además, conforme a la sentencia recaída en el principal, tuvo por acreditado que la firma Árbol Solo SRL compró esa finca a la firma La Paz SRL y que la firma arrendó ese inmueble un tiempo después a la firma La Paz SRL- es decir, a la misma empresa que le había vendido ese terreno. Tuvo también por cierto que, durante ese contrato, La Paz SRL procedió a contratar al señor Nieva como empleado, que el contrato de trabajo se extinguió en 2013 y que el 30/9/16, según el tercerista, el contrato de locación finalizó, La Paz SRL dejó de ser arrendataria del inmueble y que, en forma casi inmediata, Árbol Solo SRL retomó la explotación de la finca por sí, conforme su propia versión, adjuntando a tales fines un contrato de compra venta de fruta celebrado con SA San Miguel.

Sostuvo que en todos esos años el dominio del inmueble -y con ello, la posesión- perteneció a Árbol Solo SRL; que cuando dio en arriendo el inmueble, solamente entregó la tenencia a La Paz SRL, quien no se convirtió por ello en poseedor, pues reconoció el dominio del inmueble en cabeza del arrendador, siendo aquella, por su carácter de arrendataria, un mero tenedor; además de ello, al momento de trabarse el embargo, ya La Paz SRL había restituido el inmueble a su propietario.

Concluyó que aplicando el principio jurídico de que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, y teniendo en cuenta que el inmueble no se encontraba arrendado ya al momento de la traba del embargo, cabe presumir que los bienes muebles que se encontraban en dicha finca también pertenecen al titular de la misma, conclusión que cedería en casos específicos que no han sido invocados en autos, y que eventualmente deberían ser probados, en este caso, por la codemandada.

Estableció que el tercerista acredita la posesión de los bienes muebles embargados no con las facturas adjuntadas en autos -cuya autenticidad fue negada en forma específica por la contraparte, y no se produjo prueba para acreditar tal extremo-, sino al probar que es titular de dominio del inmueble donde se encontraban esos bienes, siéndole aplicable, entonces, el principio que rige en materia de cosas muebles que establece que “posesión vale título”, jugando tal presunción a su favor.

No obstante ello, consideró que el recurso no debía prosperar por aplicación del artículo 227 de la Ley de contrato de Trabajo (en adelante LCT) porque ha existido una doble transferencia del inmueble o finca donde trabajaba el actor, de Árbol Solo SRL a La Paz SA (en 2006), y de La Paz SA a Árbol Solo SRL(2016); que el sistema de responsabilidad previsto por la norma citada es aplicable a las transferencias transitorias, por lo que el actor tiene derecho a agredir el patrimonio tanto de quien fue su empleador -La Paz SA- como el de quién debe responder solidariamente -Árbol Solo SRL-, en razón de las transferencias transitorias efectuadas.

Destacó que al momento en que Árbol Solo SRL dice que se había terminado el arriendo, las obligaciones emergentes de la relación laboral habida entre éste y su arrendataria estaban plenamente vigentes, aunque no así la relación laboral, que se había extinguido en 2013.

Tuvo por probado el carácter de establecimiento -en el sentido de “unidad técnica productiva”, artículo 6 de la LCT- y que Árbol Solo SRL en algún momento (2016-2021) pudo explotar por sí misma el inmueble de Monte Rico (para cumplir con SA San Miguel), y en otro momento (2006-2016) decidió arrendar ese inmueble a un tercero (La Paz SRL), por lo que queda claro que la firma (es decir, una sociedad comercial) tiene como objeto la actividad agrícola y que el fundo de Monte Rico es, efectivamente, una unidad productiva de su titularidad que explota por sí misma o arrendándolo.

Sostuvo que el artículo 227 de la LCT es aplicable por lo que el señor Nieva puede procurar el cobro de su crédito, reconocido judicialmente, persiguiendo o agrediendo no sólo el patrimonio de su ex empleadora, sino también de la firma Árbol Solo SRL, en razón de su responsabilidad solidaria.

IV.- La parte recurrente sostiene que la sentencia viola el principio de congruencia por cuanto el proceso iniciado en este expediente tiene por objeto discutir la titularidad de los bienes que han sido objeto de una medida cautelar dentro de un proceso en el que el propietario no ha sido demandado y en el que los jueces sólo pueden pronunciarse sobre si los bienes embargados son o no propiedad de terceros. Aduce que, no obstante, ello, la Cámara, a pesar de reconocer la propiedad y posesión de los bienes embargados rechaza el recurso de apelación con fundamento en normas que hacen a una supuesta relación o responsabilidad solidaria de fondo prevista por los artículos 225, 226, 227 y 228 de la LCT.

Señala que la responsabilidad prevista en las mencionadas normas de la LCT debe ser invocada y hacerse valer en una demanda y reconocida por una sentencia, lo que no fue planteado por el ahora demandado en su demanda laboral.

Expresa que su parte sólo es un tercero en el proceso “Nieva Miguel Alberto vs La Paz S.A. s/Despido”, Expte. N° 398/15, cuya sentencia le es inoponible.

Manifiesta que el pronunciamiento recurrido implica una violación al principio de preclusión procesal porque la etapa para demandar a Árbol Solo SRL por una eventual responsabilidad solidaria en los términos de los artículos 227 y 228 de la LCT ha precluido.

Indica que en la causa “Nieva Miguel Alberto vs La Paz S.R.L. s/Despido”, Expte. N° 398/15-I4, el actor intentó iniciar un incidente de extensión de responsabilidad en contra de su parte que fue rechazado por decreto de fecha 29/06/2022 y que la revocatoria con apelación en subsidio interpuesta por Miguel Alberto Nieva también fue rechazada por decreto de fecha 06/06/2022 por lo que este decreto está firme. Agrega que ahora la Cámara modifica un acto consentido con carácter de cosa juzgada y que, si no se pudo extender la responsabilidad de su parte en el proceso principal, tampoco se puede extender dentro de un proceso autónomo de tercería de dominio.

Sostiene que el Tribunal violó los límites de sus facultades porque excedió la materia propuesta en el memorial de agravios; que ninguna de las partes invocó la falta de aplicación de los artículos 227 y 228 de la LCT y que la sentencia se pronuncia sobre hechos y derecho que no fueron materia de agravios, sino que empeora la situación de la recurrente por cuanto ahora resultaría responsable con todo su patrimonio y no sólo con los bienes embargados motivo de la cautelar y de este juicio. Agrega que lo resuelto es además una modificación de la cautelar de embargo y su ampliación por cuanto reconoce que los bienes embargados y secuestrados no son de La Paz SA, demandada en el juicio laboral, sino que la extiende sobre cualquier bien de propiedad de Árbol Solo SRL.

V.- Asiste razón al recurrente?

Anticipo que el recurso habrá de prosperar.

En efecto, requerido por esta Corte el expediente “Nieva Miguel Alberto vs La Paz S.A. S/Despido”, Expte. N° 398/15, con fecha 28/02/2023, se advierte que, mediante incidente I4 incorporado a las actuaciones principales, el actor, por intermedio de su apoderada, inicia el 01/06/2022 Incidente de Extensión de Responsabilidad por transferencia del establecimiento del fondo de comercio con fundamento en los artículos 227, 228 y 225 de la LCT “a fin de que oportunamente se condene a la razón social Árbol Solo SRL, CUIT 30-70742680-9, con domicilio social y legal en la localidad de Monte Rico Viejo, Departamento Chicligasta, Provincia de Tucumán, a pagar al actor, las sumas ordenadas por la sentencia de fondo con más sus intereses, gastos y costas”.

En dichas actuaciones, por decreto del 29 de junio de 2022 el Juzgado de Primera Instancia dispuso que “En análisis del presente, surge que se pretende introducir en la litis a personas que hasta ahora no tomaron parte en la misma, y por lo cual ante estas actuaciones revisten el carácter de terceros. Al respecto, el Art. 90 del C.P.C. y C. de aplicación supletoria al fuero, es claro en cuanto a la oportunidad para citar a terceros, que es con la demanda o con la contestación de la misma, si lo piden las partes, mientras que el art. 93 C.P.C. y C. otorga la facultad al juez, siendo el momento hasta la apertura a prueba. En autos, como lo reconoce el propio incidentista, ya se ha dictado sentencia, por lo cual, la oportunidad para citar terceros ha precluído, razón por la cual el pedido de la parte actora debe ser rechazado por extemporáneo. Como consecuencia: Devuélvase el escrito de fecha 01-06-2022 al presentante. Atento la modalidad del SAE, procédase por Secretaría a reservar el mencionado escrito a fin de que no sea tenido en cuenta”.

Interpuesto por el actor recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra dicha resolución el 05/07/2022, el Juzgado decretó con fecha 06/07/2022: “A lo solicitado por la letrada Silvia Adriana Faiad: 1) A la revocatoria planteada, encontrándose en un todo ajustado a derecho, no ha lugar. 2) A la apelación, no ha lugar atento lo normado por el Art. 151 del C.P.L.”. De ello se sigue que la providencia ha quedado firme.

La sola lectura de la sentencia ahora impugnada da cuenta de que la Cámara, para rechazar el recurso de apelación de la actora en este expediente, fundamentó su decisión en la extensión de responsabilidad prevista en el artículo 227 de la LCT contra Árbol Solo SRL que ya había sido rechazada por el Juzgado de Primera Instancia mediante resoluciones que a la fecha de la sentencia de Cámara se encontraban firmes.

En ese orden se advierte que asiste razón a la recurrente en que la sentencia de Cámara desconoció los efectos de la preclusión y la cosa juzgada de los proveídos de primera instancia que ya habían rechazado la extensión de responsabilidad a la hoy actora en el procedimiento de ejecución de sentencia.

Tiene dicho esta Corte que si en el desarrollo gradual de las instancias procesales hubo cuestiones que ya fueron resueltas y quedaron firmes o alcanzaron el estado de cosa juzgada, el principio de gradualidad procesal, custodiado por la preclusión y fincado en las garantías del debido proceso y del derecho de propiedad, impide el replanteo de los temas superados de un modo definitivo, irrevocable e irrevisable (CSJT, “Nougués Hnos. vs. Suc. Carlos Elwart y otros s/Cobro Ejecutivo, sentencia N° 425 del 10/06/1997; “Coria, Juan Carlos vs. Azucarera J. M. Terán S.A. -Ingenio Santa Bárbara-s/Indemnización por enfermedad accidente”, Sentencia N° 283 del 23/4/2007; “Villalonga Miguel Ángel vs. Organización Gálvez S.A. s/Despido”, Sentencia N° 843 del 28/08/2009; “Pedroza Avellaneda Germán Exequiel vs. Big Match S.A. s/ Cobro de Pesos”, Sentencia N° 375 del 26/5/2010, entre muchas otras).

Ha dicho asimismo que “Las cuestiones resueltas en una incidencia y consentidas por las partes adquieren el valor de cosa juzgada en el proceso que han sido sustanciadas” (CSJT, “Brizuela Rubén Oscar vs. Azucarera Trinidad S.A. s/Indemnización por enfermedad accidente”, Sentencia N° 685 del 04/09/1997).

En mérito a lo expuesto corresponde **CASAR** la sentencia recurrida en mérito a la siguiente doctrina legal: *“Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia de segunda instancia que viola la cosa juzgada y el principio de preclusión al expedirse sobre una cuestión que quedara firme en la instancia anterior”*.

VI.- En mérito a lo considerado en los puntos precedentes corresponde **HACER LUGAR** al recurso de casación interpuesto por el actor, Árbol Solo SRL, contra la sentencia N° 148 de la Cámara de Apelación del Trabajo del Centro Judicial Concepción, Sala II, del 03/11/2022 y **CASAR** dicha sentencia, dejándola sin efecto conforme la doctrina legal expresada en el punto precedente y **REENVIAR** estos autos al referido Tribunal que, por la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado sin que ello signifique adelantar opinión sobre las cuestiones planteadas.

VII.- Atento a que el recurso prospera como consecuencia de la actuación del Órgano jurisdiccional, las costas de esta instancia extraordinaria local deben ser soportadas por el orden causado (artículos 49 del CPL y 105, inc. 1°, del CPCC).

La señora Vocal doctora Claudia Beatríz Sbdar, dijo:

I.- Comparto el voto de la señora Vocal preopinante, doctora Eleonora Rodríguez Campos, salvo la doctrina legal, que formulo en éstos términos: "Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que se pronuncia sobre una cuestión que quedó firme en la instancia anterior".

El señor Vocal doctor Daniel Leiva, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por la señora Vocal preopinante, doctora Eleonora Rodríguez Campos, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excm. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Contencioso Administrativo, Laboral, Civil en Documentos y Locaciones y Cobros y Apremios, se

RESUELVE:

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor, Árbol Solo SRL, contra la sentencia N° 148 de la Cámara de Apelación del Trabajo del Centro Judicial Concepción, Sala II, del 03/11/2022 y **CASAR** dicha sentencia, dejándola sin efecto conforme la doctrina legal expresada en el considerando y **REENVIAR** estos autos al referido Tribunal que, por la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado sin que ello signifique adelantar opinión sobre las cuestiones planteadas.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

SUSCRIPTA Y REGISTRADA POR LA ACTUARIA/O FIRMANTE EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, EN LA FECHA INDICADA EN LA CONSTANCIA DE LA REFERIDA FIRMA DIGITAL DE LA ACTUARIA/O. MEV

Actuación firmada en fecha 22/06/2023

NRO. SENT.: 749 - FECHA SENT.: 22/06/2023

Certificado digital:
CN=FORTE Claudia Maria, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27166855859
Certificado digital:
CN=RODRÍGUEZ CAMPOS Eleonora, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27264467875

Certificado digital:
CN=SBDAR Claudia Beatriz, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27142261885

Certificado digital:
CN=LEIVA Daniel, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20161768368

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.

Expediente: 67/20

Carátula: **ARBOL SOLO S.R.L. C/ NIEVA, MIGUEL ALBERTO Y OTROS S/ ESPECIALES (RESIDUAL)**

Unidad Judicial: **EXCMA. CÁMARA DEL TRABAJO SALA I C.J.C.**

Tipo Actuación: **INTERLOCUTORIAS (A PARTIR DE LA LEY 8988 CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO)**

Fecha Depósito: 28/11/2023 - 04:55

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

20217459770 - LA PAZ S.A., -DEMANDADO

27144658545 - NIEVA, MIGUEL ALBERTO-DEMANDADO

20284766521 - ARBOL SOLO S.R.L., -ACTOR

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN

Excma. Cámara del Trabajo Sala I C.J.C.

ACTUACIONES N°: 67/20



H20911538219

JUICIO: ARBOL SOLO S.R.L. c/ NIEVA, MIGUEL ALBERTO Y OTROS s/ ESPECIALES (RESIDUAL)
EXPTE 67/20

Fecha y número de registro del fallo puesta al pie del documento

VISTO: para resolver el recurso de apelación interpuesto por la tercerista Arbol Solo S.R.L. en contra de la sentencia interlocutoria n° 166 de fecha 10/08/22, conforme reenvío casatorio de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuesto mediante Sentencia N° 749 del 22 de agosto de 2023, de cuyo estudio,

RESULTA

1- Conforme registro historial del sistema Sae, surge que mediante sentencia interlocutoria N° 166 de fecha 10/08/22 se resuelve el rechazo del Incidente de Tercería de Dominio promovido por Arbol Solo SRL. Contra dicho pronunciamiento, la tercerista interpone recurso de apelación que es concedido por decreto del 17/08/2022, expresando sus agravios el 31/08/2022.

Sustanciado el recurso de apelación, contesta en fecha 13/09/22 la parte actora, por intermedio de su letrada apoderada Silvia Adriana Faiad, oponiéndose al progreso del recurso por los fundamentos que expone en dicha presentación y que damos por reproducidos en mérito a la brevedad y economía procesal.

Radicada la causa por ante la Sala II° de esta Cámara de Apelaciones del Trabajo, se dicta la sentencia n° 148 del 03/11/2022 que resuelve no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Árbol Solo SRL, en contra de la sentencia de fecha 10/08/2022, la que se confirma en cuanto rechaza la tercería de dominio

La tercerista plantea recurso de casación, que se concede por sentencia del 05/12/2022.

2- La CSJT por sentencia n° 749 del 22 de agosto de 2023 resuelve: "I.- Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el actor, Árbol Solo SRL, contra la sentencia N° 148 de la Cámara de

Apelación del Trabajo del Centro Judicial Concepción, Sala II, del 03/11/2022 y casar dicha sentencia, dejándola sin efecto conforme la doctrina legal expresada en el considerando y reenviar estos autos al referido Tribunal que, por la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado sin que ello signifique adelantar opinión sobre las cuestiones planteadas. II.- Costas, como se consideran. III.- Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad” Entre sus fundamentos refiere el máximo Tribunal que “La sola lectura de la sentencia ahora impugnada da cuenta de que la Cámara, para rechazar el recurso de apelación de la actora en este expediente, fundamenta su decisión en la extensión de responsabilidad, prevista en el artículo 227 de la LCT contra Arbol Solo SRL, que ya había sido rechazada por el Juzgado de Primera Instancia mediante resoluciones que, a la fecha de la sentencia de Cámara se encontraban firmes”. En base a esta y otras consideraciones elabora la siguiente doctrina legal: “Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia de segunda instancia que viola la cosa juzgada y el principio de preclusión al expedirse sobre una cuestión que quedara firme en la instancia anterior”.

En ese marco, se inaugura esta instancia procesal a los efectos de decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por Arbol Solo SRL en contra de la sentencia de fecha 10/08/22. Consecuentemente notificada que fuera la nueva integración del Tribunal, y cumplida la medida previa ordenada por decreto del 18/09/23, queda la causa en estado de resolver (con la firmeza de la providencia de fecha 30/10/23), y

CONSIDERANDO

I- La denegatoria de la tercería de dominio se funda en que: a) las facturas acompañadas no prueban la entrada en dominio ni la posesión de los bienes embargados, que además tales instrumentos no permitían identificar si los bienes que allí figuran trataban efectivamente de los embargados porque no se encontraban individualizados; y b) que la prueba de la propiedad del inmueble en cabeza de la tercerista es insuficiente para demostrar el dominio sobre los bienes muebles allí existentes, porque fue la condenada en autos principales -La Paz SA.- la que continuó en la tenencia del inmueble con posterioridad a su adquisición por la tercerista.

El agravio principal del recurso de la actora en la tercería apunta a conmover lo decidido con respecto a que ella no ha logrado acreditar fehacientemente ser la propietaria de los bienes muebles embargados. En su defensa sostiene agravarse, en primer lugar, que la sentencia afirmara que lo planteado por su parte como tercería de dominio no es tal. Dice que ello se hace sin ningún tipo de fundamento legal y sin hacer la categorización del proceso que considera correcta. Continúa diciendo que con ello se deja a su parte indefensa al no saber a que proceso o normativa quedaría supeditado su derecho y su pretensión. Refiere que la misma sentencia reconoce que su parte es un tercero en el proceso que se presenta a reclamar un derecho que ha sido vulnerado (propiedad) el cual fue afectado por la medida de embargo trabado por el Sr. Nieva a través de su letrada, quien personalmente prestó caución, y que entonces por definición del art. 94 CPCC se está ante una tercería de dominio. Afirmar que el no haber logrado acreditar la propiedad del bien, porque no se habría logrado probar la posesión de los bienes muebles, no puede cambiar la naturaleza del proceso ni del derecho de dominio vulnerado. En orden al segundo agravio, cuestiona que la resolutive bajo análisis hubiera dispuesto respecto a los bienes embargados, que si bien se incorporaron facturas que prueban la compraventa de varios bienes muebles los mismos no fueron debidamente individualizados en el instrumento como prueba acabada que se trata efectivamente de los bienes embargados. Manifiesta que el defectuoso detalle de los bienes embargados realizados en el acta de traba de la medida cautelar no puede ser imputado a su parte y menos aún, como argumento del rechazo del levantamiento de embargo o como defensa a la acción de la tercería en cuestión. Puntualiza que según la sentencia de fecha 01/10/2019 dictada en el proceso iniciado por el Sr. Nieva, su letrada estaba autorizada a denunciar los bienes, que a ella le correspondía identificar

debidamente los bienes que embargaba para que luego puedan ser debidamente individualizados tanto como para realizar el secuestro y posterior subasta, además de resguardar los derechos de las partes y de terceros. Asevera que la letrada Faiad no ha detallado los bienes indicando, por ejemplo el número de chasis, de motor, color, dominio, etc., que no puede entonces invocar su torpeza como fundamento de su defensa y mucho menos como argumento de la sentencia para el rechazo de la tercería. Entiende que jamás podría existir el grado de coincidencia que requiere la sentencia lo cual es consecuencia de la insuficiente descripción de los bienes que se realiza en el acta de fecha 27/12/2019 imputable a la letrada Faiad y al Sr. Nieva. Asevera que el excesivo rigorismo formal coloca a su parte en una situación de indefensión y a merced de la voluntad del Sr. Nieva y que todo ello por una omisión que sólo puede ser imputable a quién solicita la medida cautelar. Señala que lo resuelto también atenta contra el principio según el cual las medidas cautelares solo se otorgan bajo estricta responsabilidad de quien la solicita, que esta responsabilidad está dada para que el embargante sea diligente en la traba de la medida y que, con su accionar no perjudique a terceros ajenos al proceso o al propio condenado más allá del derecho reconocido en la sentencia. Establece que la propia sentencia ordenaba que el embargo se hiciera siempre y cuando los bienes fueran de propiedad de La Paz SA, y que, no obstante ello, ni la letrada Faiad ni el Sr. Nieva han acreditado que los bienes embargados sean de propiedad de La Paz SA. En orden al tercer agravio refiere que, para que exista derecho de dominio se requiere la existencia del título y modo, que el título está dado por la compraventa de los bienes muebles embargados, instrumentado con las facturas que acompaña, que el modo se encuentra acreditado desde el primer intento de trabar la medida y en el momento en que se trabó el embargo, ya que cuando llegaron al inmueble se le informó a la apoderada del actor que el campo pertenecía a Arbol Solo SRL. Considera que la sentencia omite hacer una aplicación de las normas que regulan el momento en que se adquiere la posesión de los bienes muebles. Advierte que por aplicación de lo dispuesto por el art. 1145 CCCN la factura de compra es el título de propiedad de las cosas muebles y es la prueba formal de su existencia (art. 1020 CCCN). Cita arts. 1903, 1914, 1925 y cc.del CCCN. Señala que la sentencia recurrida omite aplicar los alcances del art. 1895 CCCN, que cualquier prueba en contrario debe recaer sobre la parte y no en Arbol Solo SRL como arbitrariamente se hace en la sentencia. Apunta que el fallo que cita la sentencia para fundar su postura y que hace mención al art. 1895 CCCN es contrario a lo allí resuelto, que con ello se violenta el principio de no contradicción. Sostiene que el fallo citado en la sentencia dice que para el tercero es suficiente ampararse en la presunción legal, estando a cargo del embargante probar lo contrario, y que a pesar de esta cita y del reconocimiento expreso de su derecho que ello implica, la sentencia resuelve en forma contraria. Denota que, por todas estas disposiciones legales, la posesión de los bienes por parte de Árbol Solo SRL se presume iniciaron en las fechas de las facturas, que la posesión inició con anterioridad a la relación laboral entre el Sr. Nieva y La Paz S.A. y que recaía sobre los demandados en esta tercería acreditar lo contrario. Asevera que su parte acreditó la propiedad y posesión del inmueble en donde se realizó la mediada de embargo y donde se encontraban los bienes muebles. Indica que Arbol Solo SRL acreditó la propiedad con la correspondiente escritura de dominio y como acto posesorio acompañó el contrato de arriendo celebrado con La Paz SA. Declara que La Paz SA jamás puede ser considerada como poseedora del campo y de los bienes muebles que se encontraban en su interior. Considera infundado, contrario a derecho y no adecuado a las pruebas rendidas en autos lo resuelto en la sentencia, que del fallo definitivo en los autos 398/15 surge demostrado que la razón social La Paz SA explotaba las fincas, donde se encontraron los bienes embargados, cuando el actor trabajó en las mismas entre el año 2009 y 2013, momento en que se da por despedido, que ello es posterior a supuestas adquisiciones de los bienes muebles e inmuebles oficiales por la firma Arbol Solo SRL. Sostiene que la sentencia definitiva le es inoponible en cuanto tercero del proceso, que el actor haya trabajado para el arrendatario dentro del plazo de vigencia del arriendo, no es prueba de posesión del inmueble por parte de la Paz S.A., ni de la titularidad y posesión del inmueble ni de los bienes muebles embargados. Continúa diciendo que en dicha sentencia también se reconoce que el Sr. Nieva

prestaba servicios en otras fincas de terceros. Afirma que la prueba del dominio y posesión del inmueble es fundamental respecto a la prueba de la posesión efectiva y real de los bienes muebles embargados, que además gozan con el beneficio de todas las presunciones citadas con anterioridad y que, por ellas, la prueba en contrario recaía sobre el embargante. Refiere que el Sr. Juez de Paz de Alpachiri, el día 17/10/2019, puso en conocimiento de la Sra. Juez y de las partes que la medida de embargo no podía realizarse en el inmueble porque era de propiedad de Árbol Solo SRL, que nada impedía a los embargantes indagar sobre el estado de dominio y posesión del inmueble, más cuando eran responsables de que la medida de embargo recayera sobre bienes de propiedad de La Paz S.A. como expresamente se indicaba en las sentencias que concedían la cautelar. Asevera que, La Paz S.A. no podía invocar la posesión del inmueble, tampoco podía hacerlo el Sr. Nieva, ni la Dra. Faiad ni la Sra. Juez. Mucho menos después de que tuvieron conocimiento previo de que el inmueble no le pertenecía a La Paz S.A. Señala que en el expediente laboral no se ha probado que La Paz S.A. haya sido la propietaria del inmueble en el que se realizó la medida, que solo se acreditó una tenencia. Manifiesta que en consecuencia no se puede presumir que La Paz S.A. hubiese tenido la posesión de la finca y con ello de los bienes muebles que se encuentran en su interior y que ésta se conservase luego de siete años de vencido el contrato de arriendo. Achaca a la sentencia que también omitiera considerar otro acto posesorio sobre el inmueble realizado por su mandante como ser la celebración de un contrato de compraventa de fruta producida en la Finca Monte Rico Alto Verde en fecha 12/12/2016, con S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. Dice que el plazo de este contrato es hasta el 31/12/2021 y que ello demuestra que, a la fecha en que se llevó a cabo la medida de embargo, la Finca se encontraba en posesión de Árbol Sólo SRL. Afirma que los bienes embargados estaban destinados y eran utilizados para la explotación agropecuaria del inmueble y que con ellos se daba cumplimiento al contrato de compraventa de fruta celebrado con S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. Insiste acerca de que el arriendo no le daba a La Paz S.A. la posesión del inmueble, al momento de trabarse el embargo, que La Paz S.A. ya no estaba en tenencia del inmueble, ni de los bienes muebles que se encontraban en su interior y que el plazo del contrato de arriendo ya había vencido. Concluye afirmando que el contrato de arriendo y la prestación de servicios en fincas de terceros realizados muchos años antes del embargo, no pueden ser hechos que hagan presumir que los bienes muebles que se encuentran el campo de un tercero son de propiedad de La Paz S.A.; que la sentencia realiza una reversión de la carga de la prueba en contra del texto expreso de la ley, violando el debido proceso, afectando el derecho de defensa de su mandante y su derecho de propiedad. En orden al cuarto agravio, cuestiona la imposición de costa a su parte. Finalmente pide se revoque la sentencia y en su lugar se disponga hacer lugar a la tercería de dominio y el inmediato levantamiento de los embargos trabados sobre los bienes muebles de propiedad de Árbol Solo SRL.

II- Analizadas las constancias reunidas en la causa, estimo que le asiste razón en su queja a la actora en estos autos. Me explico:

En primer lugar cabe recordar que en el caso de marras, la tercerista Arbol Solo SRL pretende el levantamiento del embargo de una cisterna de agua de 4.000 litros con tanque de acero inoxidable, mangueras y bomba montado sobre un chasis de dos ejes color verde, un tractor marca Fiat de color naranja, una máquina fumigadora de un eje y dos ruedas con tanques de 400 litros cada uno con sus respectivas bombas, un tanque de acero de 1.500 litros y dos ruedas, una podadora, una máquina abonadora marca Audi con dos tanques color amarillos montados sobre dos ruedas y un carro volquete sobre un eje de cuatro ruedas (conforme acta de fecha 27/12/2019), que fueran embargados en el Expte. N° 398/15 -I1 caratulado: "Nieva Miguel Alberto c/ La Paz S.A. s/ Despido" (Incidente de Embargo y Secuestro promovido por el actor), a la vista en este acto.

Tratándose de bienes muebles no registrables lo embargado en el sub lite, entendemos que debe estarse a lo dispuesto por el art. 1895 del Cód. Civil y Comercial de la Nación, que mantiene la regla del anterior art. 2412 del Cód. Civil, condensada en la conocida expresión "posesión vale título". Es

decir, la posesión de buena fe de una cosa mueble crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella.

En efecto, a partir del poder de señorío que ostenta una persona sobre la cosa mueble -no registrable- se presume su calidad de poseedor animus domini y de esta posesión en sentido propio deriva a su vez una presunción de propiedad. Pero mientras la primera es *iuris tantum* y admite prueba en contrario, la segunda es en cambio *iuris et de jure* y se confunde con la causa misma del dominio. La prueba destinada a enervar la presunción de posesión que ampara al detentador de la cosa mueble, es acreditar que media un vínculo de mera tenencia por el cual se reconoce la posesión ajena y en cuya virtud existe obligación de restituir el bien a su legítimo titular.

En este sentido, la jurisprudencia ha establecido que se presume la posesión, con la consecuencia prevista por el art. 2412 del Código Civil, de aquel que se hallaba en poder de la cosa al momento de hacerse efectiva la medida cautelar (conf. Salas-Trigo Represas, Lopez Mesa, "Cód. Civil Anotado", T. 4 "B", pág. 21). Esto es en razón de que, probado el corpus, la posesión se presume *iuris tantum* (art. 2363 del Código Civil) (conf. Bueros -Highton de Nolasco - Código Civil y normas complementarias..., T. 5, pag. 169).

Queda claro entonces desde la perspectiva jurídica delineada, que en todo proceso de tercería de dominio lo que corresponde determinar ante todo es: cuál de las personas involucradas, el tercerista o el obligado (en nuestro caso Arbol Solo SRL o La Paz S.A. respectivamente), tenía los bienes embargados bajo su señorío al momento de practicarse el embargo.

En la especie, arriba indiscutido que los bienes en cuestión se hallaban al momento de la traba del embargo en la Finca Monte Rico - Alto Verde. No obstante que tal circunstancia no es determinante, sino más bien el hecho de la posesión o de quien tenga la cosa al momento de la traba como ya se dijo, no podemos soslayar que cobra suma importancia el lugar en que se hallaban los bienes al momento del embargo.

El criterio señalado coincide con la jurisprudencia elaborada sobre la cuestión. Al respecto, se ha concluido que: "En la presente causa el tercerista aporta como prueba de la propiedad del bien, factura y recibo de compra del mismo, pero los mismos no constituyen prueba concluyente en el sentido pretendido pues por tratarse de una cosa mueble lo dirimente es quien tiene la posesión de la misma y que en el caso, enclavada en una cosa inmueble queda atrapada en el dominio de éste..." (Cám. Apel. Trab. Resistencia, Chaco, S1 Rs, L000 93 S, Fecha: 14/10/1991, Carátula: Aragón Julio Robertson c. Barros, Pedro Antonio s/ Haberes).

Pues bien, cabe subrayar que la tercerista acreditó la propiedad del inmueble donde se realizó la medida con la correspondiente escritura traslativa de dominio de fecha 17/03/2003, al igual que su debida inscripción en el Registro Inmobiliario de la provincia (ver instrumentos digitalizados adjuntos a la presente causa). Y es justamente tal circunstancia que debe ser merituada en forma conjunta con aquellas otras que rodearon al acto de diligenciamiento del mandamiento n° 70 -llevado a cabo en fecha 27/12/2019- de donde emerge que el Oficial interviniente fue atendido en la Finca Monte Rico por quien, sin oponerse a la medida se identificó como Jorge Simón Padrós, apoderado de Arbol Solo SRL.

Hay que mencionar además, que esta misma persona fue la designada depositario judicial de los bienes embargados, como así también su expresa manifestación -previa aceptación del cargo- acerca de que "los bienes embargados no pertenecen a la Paz S.A. sino a Arbol Solo SRL quien es la propietaria del inmueble donde se realiza la medida" (todo ello conforme constancias de la incidencia de embargo y secuestro que corre anexada a la causa caratulada: "Nieva Miguel Alberto c/ La Paz S.A. s/ despido"- Expte. N° 398/15, que en este acto se tiene a la vista).

La circunstancia de que la vinculación laboral que dio origen a la traba de embargo que motiva esta tercería de dominio, transitara en el domicilio donde se llevó a cabo la medida cautelar de ninguna manera implicaba transformar la presunción del art. 1895 del Cód. Civil y Comercial de la Nación a favor del embargante como lo hizo el magistrado de primera instancia. Y decimos esto, tomando en cuenta que aquella circunstancia obedecía un contrato de arriendo celebrado entre la tercerista y la ejecutada La Paz S.A., que tuvo fecha de expiración el 30/09/2016, esto es a más de tres años antes de que se llevara a cabo la traba del embargo. Si bien la demandada en esta causa impugna la autenticidad del contrato de arriendo acompañado por la tercerista, diremos que no es de recibo en tanto dicho instrumento privado adquirió fecha cierta por encontrarse certificadas por funcionario público las firmas, y ser además, anterior a la traba del embargo.

En tal sentido, el máximo Tribunal de la provincia ha señalado que: "Cuando el instrumento privado ha obtenido autenticidad por haber sido verificada la firma -en el caso, un boleto de compraventa- el valor probatorio de su contenido es análogo al de los instrumentos públicos, con referencia a las partes y a sus sucesores universales, pero frente a los terceros, éste adquiere autenticidad al adquirir fecha cierta y sólo desde entonces" (Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, sala civil y penal, 23/08/1999, Barrera, Nélica en: Hidalgo, Manuel c. Apas, José Y., LLONA, 2000-1041).

Es cierto, merced a la escritura traslativa de dominio agregada a esta incidencia que La Paz S.A. vendió el inmueble en cuestión en el año 2003 a la tercerista, como así también que con posterioridad a dicho acto, en el año 2007, aquella adquirió su tenencia merced al contrato de arriendo aludido precedentemente. Sin embargo, resulta incompresible que se hubiera pasado por alto que dicha vinculación contractual feneció en el año 2016 y que en la especie de ninguna manera se invocó menos aun se demostró hubiera ocurrido una prórroga del contrato en las mismas condiciones pactadas originariamente. De todas maneras pareciera necesario tener que recordar que a tenor de lo dispuesto por los arts. 1929, 1930 y conc. del Código Civil y Comercial un contrato de arriendo de ninguna manera se transfiere la posesión de un inmueble y mucho menos de los muebles que allí existen, sino solo la tenencia por el plazo contractual.

El contexto probatorio evidencia claramente que la tercera es propietaria exclusiva del inmueble donde se efectivizó la medida. Y aunque la presunción del art. 1895 CCyCN no deviene operativa por la mera titularidad (derivada de la inscripción en el registro del inmueble), sino del hecho mismo de "poseer", sin lugar a dudas esta circunstancia le es aplicable a la tercerista de autos, pues conforme lo apuntado por el Oficial encargado de llevar adelante la medida es indiscutible que Arbol Solo SRL se encontraba en posesión de los bienes al momento de realizarse la manda judicial (Cfr. acta de fecha 27/12/2019).

Para ilustrar mejor, bueno es referir al unánime criterio jurisprudencial en tal sentido. Así se sostiene que "Siendo el incidentista propietario del inmueble en el que se practicó la medida cautelar debe presumirse su posesión de todas las cosas muebles que en él se encuentran." (CNCiv.y Com., Autos: Haagen, Jorge s/ Tercería de Dominio en Librería Easso S.A. c/ Haagen A. S/ Ejec.", sent. de fecha 31/10/1984. El caso de autos encuadra plenamente en el fallo citado, y también en el dictado por CCiv, Doc. y Loc. de Tucumán, Sala II, sent. del 26.11.2007 "Sepúlveda M. C. c/ Sleiman s/ Tercería de Dominio" donde se estableció "La tercerista es propietaria del inmueble, lo posee y habita, por lo que el principio del art. 2412 rige únicamente a su favor, por ende debe presumirse su posesión sobre todas las cosas muebles que en él se encuentran".

En esa misma línea coincide la doctrina en señalar que la tercerista debe acreditar en autos la ocupación por su parte del inmueble donde se hallaban los objetos embargados al momento de la traba, toda vez que por aplicación de la teoría de la custodia, el tenedor de un inmueble, independientemente de su posesión jurídica, adquiere la posesión de las cosas que están en él,

generando a su vez la presunción de su título de dominio con relación a ellos (cfr. art. 2412 C. Civil) (cfr. Enrique Falcón, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado, Concordado y Anotado, T. I, págs. 853 y sstes.).

De acuerdo con lo que venimos analizando, la presunción establecida por el artículo 1895 del CCyCN tiene plena vigencia en el subexamine. De toda evidencia resulta que los objetos embargados estaban emplazados en el inmueble de Arbol Solo SRL y la presunción se extiende a todas las cosas que estaban dentro de él. La carga de la prueba para destruir la presunción legal, corría por cuenta del embargante que se opuso a la tercería de dominio, debiendo ser esta prueba categórica y contundente, tendiente a demostrar que los bienes embargados habían sido habidos dentro del ámbito donde su deudor ejercía su señoría o bien que eran de propiedad de éste o se hallan situados bajo la esfera de su custodia. Nada de ello aconteció en el caso analizado.

No obsta a la conclusión arribada, la pretendida insuficiencia de las facturas acompañadas por la tercerista para acreditar la propiedad de los bienes embargados, pues tratándose de cosas muebles que estaban en poder y en el domicilio de la tercerista, el derecho real de dominio se presume por la sola posesión (conf. arts. 750 y 1895 del CCyCN). En materia de cosas muebles no registrables, el título lo constituye la posesión y no los documentos. Estos últimos podrán probar que determinada persona adquirió los bienes, pero no influirán respecto de la propiedad, al momento de practicarse el embargo (cfr. Roland Arazi y Jorge A. Rojas "Código Procesal Civil y Procesal de la Nación" - Comentado, Anotado y concordado con los códigos provinciales, Tomo I, págs. 466 y sstes.).

De ello se sigue, resulta desacertada la relevancia que el fallo cuestionado proporciona a la falta de acreditación de la autenticidad de las facturas acompañadas por la tercerista, ya que según doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia "Si el tercerista es exclusivo propietario del inmueble donde se embargaron bienes muebles, y se acreditó que los mismos se encontraban en su poder, se encuentra amparado por la regla del art. 2.412 del Código Civil, no siéndole exigible prueba documental de adquisición de los muebles" (Gimenez Carlos Alberto vs. Coop. de Trabajo de Transporte Automotor Ltda., 9/2/96).

Desde tal perspectiva, debe quedar claro que aun cuando pudiera resultar útil producir la prueba de título o del hecho del cual surge el dominio sobre las cosas muebles, ella no es suficiente ni determinante ya que en virtud de los arts. 1895, 1916 y 1919 del CCCN, la posesión constituye el título. Por tanto, si como aconteció en el caso la medida judicial se llevó a cabo en un inmueble de propiedad de la tercera, tratándose de bienes no registrables, ejerce sobre ellos el corpus posesorio, gozando de la presunción de buena fe.

Una postura contraria implicaría una interpretación errada del art. 1917 que estatuye: "El sujeto de la relación de poder sobre una cosa no tiene obligación de producir su título a la posesión o a la tenencia, sino en el caso que deba exhibirlo como obligación inherente a su relación de poder". Precisamente esta norma confirma la presunción de posesión, es decir, quien tiene la cosa posee por sí, sin tener que probar nada. A esto se llama presunción de la legitimidad de la posesión. En virtud de esta presunción, tampoco debe justificar ni dar razones sobre la causa de la posesión. Solo estaría obligado a producir su título en caso de enfrentar una acción reivindicatoria (art. 2242 y cc. del CCCN).

Finalmente, aunque no resulta obligatorio para el Tribunal seguir a las partes en todas sus alegaciones, dejamos aclarado que la prelación lógica de la temática analizada en párrafos precedentes, respecto de la cuestión debatida, hace innecesario el tratamiento de los demás agravios de la recurrente.

III- Entonces, en mérito de las consideraciones expuestas, es dable concluir que la tercera incidentista es poseedora de los bienes embargados por los que reclama, derivándose de ello la consecuencia de ser considerada titular del dominio a tenor de los artículos 1916 y 1919 del Cód. Civil y Comercial de la Nación (artículos 2412 y 2362 del derogado Cód. Civil), siendo procedente el incidente de tercería incoado. Por lo tanto, se hace lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la sentencia dictada en fecha 10/08/2020 y disponiendo en substitutiva “Hacer lugar al incidente de tercería de dominio promovido por Arbol Solo SRL. En consecuencia, Procédase al levantamiento del embargo trabado sobre los bienes detallados en acta de fecha 27/12/19 obrante en incidencia de embargo y secuestro que corre anexada a la causa caratulada: "Nieva Miguel Alberto c/ La Paz S.A. s/ despido"- Expte. N° 398/15-.

IV- De acuerdo al modo de resolver la cuestión traída a la Alzada, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto en materia de costas y adecuar dicho tópico al nuevo resultado del litigio, por lo que el tratamiento de los agravios deducidos en este sentido por la recurrente deviene abstracto (art. 782 CPCC supl.).

En atención al resultado obtenido y las razones que fundamentan la decisión, se resuelve imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada, vencida en la tercería, en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 91 y 92 del CPCC de aplicación supletoria). Al respecto, atendiendo a su expresa petición sobre imposición de costas a la tercerista en virtud de lo dispuesto por el ex art. 96, 2do párrafo del CPCC ley 6176 (actual art. 57 del CPCyC ley 9531), advertimos que dicha normativa no resulta de aplicación al incidente de tercería, sino a las actuaciones que se hubieran sustanciado en los autos principales, y que hubieran generado gastos, en razón de la presunta negligencia que se imputa o atribuyen al interesado negligente en ejercitar su derecho y por haberlo tentado tardíamente.

Repárese en que la norma citada expresa, en lo pertinente: “Si el tercerista dedujere la demanda después de quince días desde que tuvo o debió tener conocimiento de la medida cautelar o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, abonará las costas que origine su presentación extemporánea, aunque correspondiere imponer las del proceso a la otra parte por declararse procedente la tercería”. Puede colegirse de su lectura que existe una independencia entre las costas que se generen en la “tercería” supuesto en que son aplicables las reglas generales contenidas en los art. 91 y 92 del CPCyC, sea aplicando el principio objetivo de la derrota o sus excepciones si se diera el caso.

Sobre la interpretación adelantada no existe discrepancia entre la doctrina entre los que podemos citar a Osvaldo Gozaíni, “Costas Procésales” p. 225 al decir: “... la presentación tardía de la pretensión determina que el tercerista deba abonar las costas de la incidencia sin importar, en el caso, el resultado que obtengan. Estas costas no pueden ser otras que las que resulten de las actuaciones producidas en los autos principales con posterioridad al vencimiento del plazo, verbi gracia, las que hubieran efectuado para obtener el secuestro del bien embargado, pedido de remate y otras análogas para posibilitar la ejecución”.- “Se trata de una disposición tendiente a prevenir abusos y a evitar dilaciones innecesarias, que conspiran contra la celeridad de las tramitaciones, operando como estímulo de la actividad del tercerista, a fin de excluir el dispendio procesal que el adversario pueda haber realizado dentro de la ejecución ante la inacción y en miras a la más económica dilucidación de los eventuales derechos en conflicto” C. Nac. Com., sala A, 12-8-74, LL, v.156, p. 628).- “

De acuerdo con lo analizado, no existiendo en la especie motivo válido o causas de excepción que justifique el apartamiento del principio general de la derrota previsto expresamente en el ya citado art. 91 del Digesto Procesal aplicable supletoriamente al fuero, carece de fundamento la pretensión de la embargante de ser eximida de la imposición de costas en la presente tercería, y así se declara. Se

tenga presente.

Por ello, el Tribunal,

R E S U E L V E

I) HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por la tercerista ARBOL SOLO S.R.L contra la sentencia de fecha 10/08/2022, la que se revoca íntegramente y disponiendo como sustitutiva: “Hacer lugar al incidente de tercería de dominio promovido por Arbol Solo SRL. En consecuencia, procédase al levantamiento del embargo trabado sobre los bienes detallados en acta de fecha 27/12/19 obrante en incidencia de embargo y secuestro que corre anexada a la causa caratulada: "Nieva Miguel Alberto c/ La Paz S.A. s/ despido"- Expte. N° 398/15- I1”.

II) COSTAS de ambas instancias conforme se considera.

III) RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.-

ENZO RICARDO ESPASA MARIA JOSÉ POSSE

Actuación firmada en fecha 27/11/2023

NRO. SENT.: 191 - FECHA SENT.: 27/11/2023

Certificado digital:
CN=GARCIA PINTO Juan Carlos, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20303000160

Certificado digital:
CN=POSSE Maria Jose, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27130674513

Certificado digital:
CN=ESPASA Enzo Ricardo, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20138477933

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.



Caja de Previsión y Seguridad Social de
Abogados y Procuradores de Tucumán

NOTA DE CREDITO PARA LA
CUENTA ESPECIAL LEY N° 6059

C 01183287

Depositante

FAIAD SILVIA ADRIANA

Título y N° de Matricula

ABOGADO CONCEPCION 2531 ABOG. SUR
170

Tipo y N° Doc

14465854

Juicio

NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ ARBOL SOLO SRL S/ ESPECIALES
(RESIDUAL)

Expte: 7/24

Tipo de Juicio

JUICIOS LABORALES

Juzgado

JUZGADO DEL TRABAJO 1° NOMINACION

APORTE INICIAL
(Art. 27 Ley 6059)

\$ 1900.00

BONO PROFESIONAL
(Art. 26 Ley 6059)

\$ 22100.00

TOTAL GRAL.
Aporte + Bono

\$ 24000 .-

Son Pesos

VEINTICUATRO MIL

Valido para pagar hasta 2024-03-06

Bco Macro



86498011832870



CajaPopular/Rapipago



86498011832870000240000006032406

Comprobante para el Banco [1]



Macro
Click de Pago



Caja de Previsión y Seguridad Social de
Abogados y Procuradores de Tucumán

NOTA DE CREDITO PARA LA
CUENTA ESPECIAL LEY N° 6059

C 01183287

Depositante

FAIAD SILVIA ADRIANA

Título y N° de Matricula

ABOGADO CONCEPCION 2531 ABOG. SUR
170

Tipo y N° Doc

14465854

Juicio

NIEVA MIGUEL ALBERTO C/ ARBOL SOLO SRL S/ ESPECIALES
(RESIDUAL)

Expte: 7/24

Tipo de Juicio

JUICIOS LABORALES

Juzgado

JUZGADO DEL TRABAJO 1° NOMINACION

APORTE INICIAL
(Art. 27 Ley 6059)

\$ 1900.00

BONO PROFESIONAL
(Art. 26 Ley 6059)

\$ 22100.00

TOTAL GRAL.
Aporte + Bono

\$ 24000 .-

Son Pesos

VEINTICUATRO MIL

Valido para pagar hasta 2024-03-06

Bco Macro



86498011832870




CajaPopular/Rapipago



86498011832870000240000006032406

Comprobante para la C.P.S.S.A.P.T. [2]


BANCO MACRO S.A. 22/02/2024
26916-Servicio Integral de Recaudaciones

Modo: Hora: Suc /Caja Operac.:
N-ON 12:57:39 608 jagutier 2 11

Cobranza Nro.: 924181676
Empresa Recaudadora:
2858 - COLEGIO DE ABOGADOS DEL SUR
CUIT EMPRESA: 30-67527122-0

Datos del Depositante:
Id. Cliente: 27144658545
FAIAD SILVIA ADRIANA
Doc. Nro.: 27-14465854-5
1

COMPROBANTES:
Sec.: 1407631137
818271 \$ 8,000.00
IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$ 8,000.00
DETALLE DEL PAGO:

EFFECTIVO
TOTAL EF.: \$ 8,000.00

COPIA PARA EL CLIENTE

La modalidad de Pago con Cheques se
encuentra sujeta a posterior
confirmación por parte de Banco
Macro S.A.

BANCO MACRO S.A. 22/02/2024
26916-Servicio Integral de Recaudaciones

Modo: Hora: Suc./Caja Operac.:
N-ON 12:58:54 608 12/02/2024

Cobranza Nro.: 924186070
Empresa Recaudadora:
90740 - TASA DE JUSTICIA
CUIT EMPRESA: 30-64881575-8

Datos del Depositante:
Id. Cliente: 27144658545
FAIAD SILVIA ADRIANA
Doc. Nro.: 27-14465854-5
1

COMPROBANTES:

Sec.: 1407741423
818265

\$ 770.00



IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$ 770.00
DETALLE DEL PAGO:

EFFECTIVO

TOTAL EF.: \$ 770.00

COPIA PARA EL CLIENTE

La modalidad de Pago con Cheques se
encuentra sujeta a posterior
confirmación por parte de Banco
Macro S.A.

 Poder Judicial de Tucumán Secretaría Administrativa	Poder Ad Litem N° 0002-004300  2402231523408
---	--

Ante esta Secretaría Administrativa comparece:	
Datos Personales	
Apellido y Nombre: NIEVA MIGUEL ALBERTO	
Nacionalidad: ARGENTINO	Estado Civil: CASADO/A
Profesión: JORNALERO	Fecha de Nacimiento: 20/05/1965
Domicilio: B° ROSEDAL S/N - SANTA EMILIA	
Localidad: ALTRO VERDE	
Provincia: TUCUMAN	DNI/LC/LE: 17537072

Y haciendo uso de la facultad que le confiere el Código de Procedimiento del Trabajo (Ley 6204) en su Art. 26 otorga PODER ESPECIAL a favor del:			
Dr/a: FAIAD SILVIA ADRIANA	DNI/LC/LE N°: 14465854	Matrícula N°: 170	Tomo: 01 Folio: 05
Dr/a: TEJERIZO ANTONIO SEVERO	DNI/LC/LE N°: 10220813	Matrícula N°: 167	Tomo: 01 Folio: 05
Para que lo represente ante los Tribunales del Trabajo del Centro Judicial Concepción y en todo lo que tenga relación con el juicio que interpondrá contra: ARBOL SOLO S.R.L. y cuyo objeto es EXTENSION DE RESPONSABILIDAD Y declara: que a los efectos y en la forma prevista por el Art. 26 de la Ley 6204 le confiere poder suficiente para demandar, conciliar, proseguir el juicio, interponer recursos, ejecutar la sentencia y realizar todos los demás actos que estimara convenientes y útiles para la defensa de sus derechos y de sus intereses y para que tanto en lo principal, incidentes y dependientes, haga y practique lo que el otorgante haría y practicase siendo presente. Con lo que se da por cumplimentado el acto previa lectura y ratificación por ante actuario, la firma el compareciente por ante mí que certifico.—			

miguel A. Nieve

Concepción, 27 10 2024

Ker A

[Firma]

C.P.N. MIGUEL RAUL PRIETO
SECRETARIO JUD. CAT. A
DELEGACION ADMINISTRATIVA
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

Firma Otorgante

Aclaración del Otorgante

Firma Funcionario
Sec. Administrativa
o Deleg. Administrativa

Sello



ADJUNTO DOCUMENTACION

SRA. JUEZ DEL TRABAJO:

IA. NOM.

JUICIO: “NIEVA, MIGUEL ALBERTO c/ ARBOL SOLO SRL. s/ ESPECIALES (RESIDUAL)”. Expte. N° 7/24

SILVIA ADRIANA FAIAD, apoderada del actor en autos, a V.S. respetuosamente digo:

I.- Por el presente vengo a adjuntar la siguiente documentación:

- Recaudos legales por apersonamiento de la suscripta.
- Poder Ad-Litem.
- Las constancias de los autos principales del juicio “NIEVA, MIGUEL ALBERTO c/ LA PAZ S.A. s/ DESPIDO” Expte. N° 398/15, especialmente las sentencia de Ia. Instancia de fecha 26/03/2018, que tramitara ante el Juzgado del Trabajo de la 2ª. Nom. y su aclaratoria de fecha 28/03/2018; y la de 2da. Instancia de fecha 19-12-2018 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala 2a., que se adjuntan escaneadas.
- Las constancias del Incidente de Extensión de Responsabilidad tramitado en el Incidente caratulado JUICIO: “NIEVA, MIGUEL ALBERTO c/ LA PAZ S.A. s/ DESPIDO” Expte. N° 398/15-I4, especialmente los decretos de fechas 29-06-2022 y 06-07-2022, que tramitaron ante el Juzgado del Trabajo de la 2ª. Nominación.
- Las constancias del juicio “ARBOL SOLO SRL vs. NIEVA MIGUEL ALBERTO, FAIAD SILVIA ADRIANA Y LA PAZ S.A. s/ TERCERIA DE DOMINIO.- Expte. N° 67/20, que tramita actualmente ante el Juzgado del Trabajo de la 1ª. Nom. (CJC). Especialmente la demanda; la escritura pública con la que acredita la titularidad de los inmuebles; el informe del Registro Inmobiliario; los contratos de arrendamientos celebrados con La

PAZ S.A.; las sentencias de fondo de Ia. Instancia de fecha 10-08-2022; de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala 2 (CJC) de fecha 03-11-2022; de la CSJT de fecha 22-06-2023; y de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala 1ª. de fecha 27-11-2023.

II.- PETITORIO:

1) Téngase por presentado los recaudos legales y documentación descripta y téngase el presente escrito como parte integrante de la demanda incoada.

2) Provéase la demanda conforme lo peticionado.

JUSTICIA

Firmado digitalmente
Silvia Adriana Faiad
Mat. C.A.S. 170 - Lo. 01 - Fo. 05.
Casillero digital: 27144658545